

EDICIÓN 29

CORREO

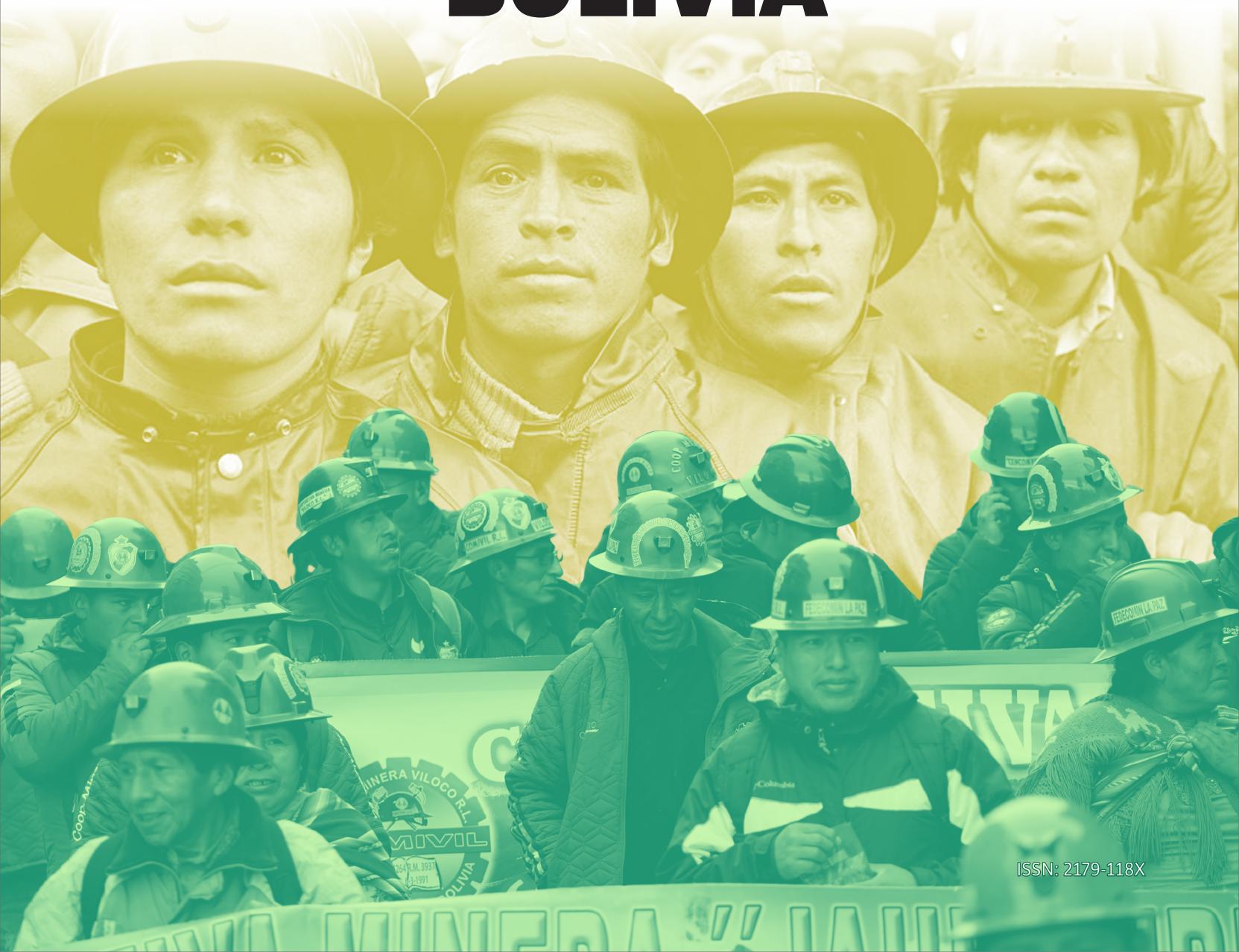
INTERNACIONAL

PUBLICACIÓN DE LA LIT-CI
LIGA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

JUNHO
2026

EDICIÓN
29

ESPECIAL BOLIVIA



ISSN: 2179-118X

SUMÁRIO

SUMÁRIO

—	NUEVO LEVANTAMIENTO POPULAR Y OBRERO EN BOLIVIA EN 2026	3
—	BOLIVIA: LA REBELIÓN POPULAR EN LA CRISIS DEL ORDEN MUNDIAL	8
—	BOLIVIA: DEL CICLO REVOLUCIONARIO A LA CONTENCIÓN DEL MAS	16
—	BOLIVIA, UNA REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA EN CURSO (2003)	28
—	BOLIVIA, ABRIL DE 1952: LA REVOLUCIÓN OBRERA QUE PUDO CAMBIAR AMÉRICA LATINA.....	33
—	BOLIVIA – LA INSURRECCIÓN TRAICIONADA (1985).....	44
—	CRONOLOGÍA DE LA REVOLUCIÓN Y LA CONTRARREVOLUCIÓN EN BOLIVIA	53
—	BOLIVIA: LA DIRECCIÓN DE LA COB NEGOCIA, TRAICIONA AL MOVIMIENTO Y EL GOBIERNO DECRETA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN	58

Editor responsable: Eduardo Almeida

Diagramación: Miao Ferr Alves Blackrucat

Acceda a las publicaciones de la LIT-CI en:

www.litci.org

Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
Junio de 2026

NUEVO LEVANTAMIENTO POPULAR Y OBRERO EN BOLIVIA EN 2026

LENA SOUZA, PSTU BRASIL Y FLORENCE OPPEN (WV, EE. UU.)

EL REGRESO DE LAS CALLES

Bolivia atraviesa la crisis social y política más profunda desde las jornadas insurreccionales de 2003 que derrocaron a Gonzalo Sánchez de Lozada. Desatada por el giro del presidente Rodrigo Paz Pereira, una ola de movilizaciones masivas, bloqueos y huelgas paraliza el país desde mayo de 2026. Lo que comenzó como demandas sectoriales por la calidad del combustible y la tenencia de la tierra se ha transformado rápidamente en una rebelión nacional que exige la renuncia del mandatario bajo el grito unificador: “¡Fuera Paz!”. En esta nueva ronda de protestas, la Central Obrera Boliviana (COB), y las organizaciones sociales indígenas, campesinas y barriales desempeñan un papel clave, lo que acentúa el carácter prerrevolucionario de la situación. Al mismo tiempo, la creciente respuesta represiva del Estado boliviano, apoyado por Trump, pone a prueba un posible triunfo de las masas y un avance hacia un cambio social y político de calidad.

LOS DETONANTES INMEDIATOS: LA OFENSIVA NEOLIBERAL DEL GOBIERNO DE PAZ

Las protestas no son espontáneas, sino la consecuencia directa de un terremoto político iniciado con las elecciones de agosto-octubre de 2025. Tras casi dos décadas de gobierno del Movimiento Al

Socialismo (MAS), que administró el capitalismo boliviano bajo un discurso de cambio, el proceso fue derivando hacia una creciente burocratización de sus estructuras políticas y sindicales, así como hacia su división. La crisis económica y política resultante del agotamiento de este modelo debilitó el apoyo popular al gobierno y abrió espacio para el avance de los sectores de derecha, que lograron disputar y ocupar posiciones de poder en el Estado. De esta forma, un electorado cansado por la profunda crisis económica (escasez de dólares, desabastecimiento de combustibles, inflación del 14%) castigó duramente al partido en las urnas. El MAS pasó de tener una bancada mayoritaria a solo un diputado, y el candidato de derecha, Rodrigo Paz Pereira (hijo del expresidente Jaime Paz Zamora), del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganó la segunda vuelta prometiendo estabilidad.

Sin embargo, una vez en el poder (asumió el 22 de octubre de 2025), Paz implementó un brutal paquete de medidas de corte neoliberal que destruyó rápidamente su apoyo electoral:

1. **Decreto Supremo 5503 y eliminación de subsidios:** Derogó los subsidios a los combustibles, lo que provocó un aumento inmediato de los precios del diésel y la gasolina. Este fue el detonante inicial que unificó el malestar disperso.

2. **Crisis por combustible adulterado:** El gobierno importó gasolina de baja calidad que averió masivamente los motores de vehículos (especialmente de taxis y micros), afectando directamente a los trabajadores del transporte público por cuenta propia.

3. **Ley de Tierras N° 1720 (10 de abril):** promulgada para "reconvertir" la propiedad agraria, permitía usar tierras comunitarias y pequeñas propiedades como garantía bancaria. Esto fue interpretado por los movimientos campesinos e indígenas como el preludio de un despojo masivo en favor de los terratenientes y del agronegocio, lo que



abrió la puerta a privatizaciones encubiertas.

4. **Paquete económico completo:** Anulación del impuesto a las grandes fortunas, liberalización de las importaciones, congelamiento de los salarios públicos y anuncio de una reforma constitucional para priorizar la inversión extranjera en los recursos naturales.

Estas medidas, aplicadas en apenas seis meses, demostraron una rápida alianza del gobierno con la oligarquía agroindustrial de Santa Cruz y el capital financiero internacional, revirtiendo las pocas conquistas sociales que el MAS había preservado del ciclo de luchas de 2003-2005.

EL ROL DE LA COB Y LOS ESPACIOS DE AUTOORGANIZACIÓN

Frente a esta ofensiva, la clase trabajadora y los pueblos originarios respondieron con métodos históricos de acción directa. El factor central que canalizó y radicalizó el descontento fue la Central Obrera Boliviana (COB), aunque en una relación tensa y dinámica con las bases y con otras organizaciones.

La COB, bajo la dirección de su ejecutivo, Mario Argollo, desempeñó un rol crucial al convocar, el 1 de mayo de 2026, a un cabildo en El Alto que declaró **la huelga general indefinida**. Sin embargo, a lo largo del conflicto, la dirigencia de la COB mostró contradicciones. Mientras las bases presionaban por profundizar la lucha y la consigna "Fuera Paz", sectores burocráticos del movimiento afiliados y no afiliados a la COB, como la Confederación de trabajadores de la Educación y los transportistas, se mostraron proclives a negociaciones

sectoriales con el gobierno (como el bono anual para maestros o el resarcimiento a los transportistas). Finalmente, bajo presión de las bases, un encuentro ampliado nacional de la COB, el cabildo de la FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales de El Alto) y el ampliado de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Tupac Katari", a inicios de junio ratificó la continuidad de las medidas de presión y la exigencia central de la renuncia de Paz, lo que constituyó una derrota para la estrategia gubernamental de negociación por sectores con el objetivo de la desmovilización.

El verdadero motor de la rebelión ha sido la capacidad de autoorganización que desbordó las propias dirigencias tradicionales. Los espacios clave fueron:

- **La Federación de Campesinos Túpac Katari y Los Ponchos Rojos:** Estas organizaciones indígenas aymaras del altiplano implementaron un cerco total de carreteras y bloqueos indefinidos en los accesos a La Paz y El Alto, mostrando una notable disciplina y capacidad de combate.

- **La FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales) de El Alto:** El Alto volvió a ser el epicentro de la insurrección. Las juntas vecinales organizaron barricadas, piquetes de vigilancia y logística para sostener el bloqueo de la ciudad, recreando los métodos de 2003.

- **Marchas autónomas:** La "Marcha por la Vida para Salvar Bolivia", convocada por Evo Morales (sector evista del MAS), recorrió 300 km desde el Trópico de Cochabamba hasta La Paz y se sumó a las protestas el 18 de mayo. Además, campesinos de la Amazonía caminaron durante 24 días hasta la sede del gobierno.

- **Sindicatos de base:** maestros urbanos y rurales, mineros y fabriles mantuvieron la huelga en varias regiones, incluso cuando sus dirigencias nacionales aceptaban acuerdos, lo que demostró la independencia de las bases.

La unidad de acción entre obreros urbanos, campesinos, indígenas, transportistas y juntas vecinales configuró un **bloque social en lucha** que no se veía desde la Guerra del Gas. La COB, aunque con limitaciones, funcionó como un paraguas articulador, pero el poder real residió en los bloqueos y la capacidad de las



bases para sostener la lucha durante más de un mes.

EL CARÁCTER PRERREVOLUCIONARIO Y LA SITUACIÓN DE DOBLE PODER

La situación actual en Bolivia presenta características prerrevolucionarias, dado el surgimiento de elementos de **organismos de doble poder** en el territorio.

Existe un doble poder de facto. El gobierno de Paz mantiene el control formal del aparato estatal, del palacio de gobierno, del reconocimiento internacional y, crucialmente, del mando nominal de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en amplias regiones del país —particularmente en el altiplano, en la ciudad de El Alto,

en las provincias de La Paz y en partes de Cochabamba y Oruro— la autoridad real la ejercen las organizaciones movilizadas.

Las organizaciones campesinas y vecinales controlan más de 104 puntos de bloqueo a inicios de



junio. Son ellas quienes determinan qué mercancías, combustibles o alimentos entran o salen de las ciudades. El gobierno no puede garantizar la libre circulación ni el abastecimiento, lo que genera pérdidas millonarias para la burguesía y una creciente parálisis económica.

Mientras que Paz es visto por las clases medias urbanas y el empresariado como un "defensor de la democracia" frente a "grupos radicales", para los sectores populares movilizad el presidente ha perdido toda legitimidad. Su mandato es considerado ilegítimo por haber aplicado un programa opuesto al que prometió en campaña. Las consignas "Fuera Paz" no solo exigen su renuncia, sino que también expresan el agotamiento del régimen político.

Un elemento que impide la consolidación de una situación revolucionaria clásica (con la caída inminente del gobierno) es la falta de una alternativa de poder clara y unificada por parte de las organizaciones populares. La crisis de dirección estratégica se expresa con tres salidas posibles:

- La opción de **nuevas elecciones**, impulsada por Evo Morales, es vista con escepticismo por los sectores más radicalizados, que señalan que la democracia burguesa ha demostrado sus límites y que las elecciones, sin resolver el poder de los empresarios, no cambiarán sustancialmente la situación del país. Sin embargo, sigue siendo la salida más defendida por las principales direcciones políticas y sindicales del movimiento popular y, ante la ausencia de una alternativa estratégica impulsada desde esas mismas direcciones, es también la propuesta que hoy concita mayor apoyo entre amplios sectores de las bases.

- El **vicepresidente Edmand Lara** ha intentado distanciarse de Paz para erigirse como una "opción de consenso", pero es rechazado por las bases como una maniobra de la misma burguesía.

El vicepresidente Edmand Lara ha procurado diferenciarse parcialmente de Paz para presentarse como una alternativa de consenso entre las distintas alas del oficialismo y la oposición. Sin embargo, en lugar de apoyarse en la movilización popular, ha apostado por negociaciones y acuerdos con los sectores vinculados tanto a Paz como a Evo Morales. Para numerosos activistas y sectores movilizad, esta orientación no representa una verdadera alternativa, sino un intento de recomponer la gobernabilidad mediante pactos entre las cúpulas políticas, dejando de lado las demandas de las bases en lucha.

- Finalmente se delinea **una perspectiva anticapitalista**: sectores de la izquierda revolucionaria (como la LIT-CI) plantean la consigna "Todo el

poder a la COB". Partiendo de la experiencia acumulada por el movimiento obrero, campesino e indígena, estos sectores sostienen que una salida de fondo a la crisis requeriría que las organizaciones de trabajadores y del pueblo avancen hacia la construcción de un poder propio, independiente de las instituciones del Estado y de los partidos de la burguesía. En ese marco, levantan la perspectiva de "Todo el poder a la COB y a las organizaciones obreras, campesinas e indígenas", planteando la necesidad de que sean estas organizaciones las que asuman la conducción política del país y lleven adelante transformaciones estructurales. Sin embargo, esta posición sigue siendo minoritaria dentro del movimiento, ya que las principales direcciones sindicales y populares continúan apostando por salidas centradas en la negociación política o en una nueva convocatoria electoral.

A pesar de estas limitaciones, la correlación de fuerzas es la más favorable para el movimiento popular desde 2003. El gobierno se encuentra acorralado, sin capacidad de gobernar en vastas zonas, y la única manera de sostenerse es mediante la creciente represión y el llamado al estado de sitio.

LA REPRESIÓN DEL ESTADO CON APOYO DEL IMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE

Ante su debilidad, el gobierno de Rodrigo Paz ha respondido con una escalada represiva que busca decapitar el movimiento y recuperar el control por la fuerza.

El gobierno está llevando a cabo la criminalización y la persecución judicial de las

protestas, calificándolas de “terrorismo” y “narcotráfico”. Se emitieron órdenes de captura contra los principales dirigentes de la COB (Mario Argollo, quien pasó a la clandestinidad), líderes de la FEJUVE (Justino Apaza), dirigentes campesinos y exsenadoras del MAS como Simone Quispe. Estas órdenes, en algunos casos revocadas temporalmente por los jueces para abrir un falso diálogo, buscan aterrorizar a la dirigencia y vaciar de conducción las protestas.

La represión judicial va acompañada de una creciente represión en las calles. Las fuerzas policiales han dispersado marchas y bloqueos mediante gases lacrimógenos, perdigones y

detenciones masivas. Según denuncias de organizaciones sociales, el conflicto ha dejado al menos seis fallecidos, entre ellos un mallku de Taraco y un manifestante muerto durante la represión en San Julián. Se contabilizan, además, alrededor de 365 detenidos y decenas de dirigentes sindicales, campesinos e indígenas perseguidos o procesados. Entre los casos más denunciados figuran el secuestro de dirigentes por parte de grupos civiles afines al gobierno y la reciente represión de la marcha en La Paz, que terminó con nuevos arrestos y manifestantes heridos. Las organizaciones movilizadas denuncian una escalada represiva destinada a desarticular la protesta

social y un cerco informativo para minimizar la magnitud de los hechos.

La jugada más peligrosa del gobierno ha sido aprobar a toda prisa en el Congreso una nueva **Ley de Regulación de los Estados de Excepción** (7 de junio de 2026). Esta ley otorga al Ejecutivo los siguientes poderes excepcionales:

- **Blindaje normativo** que permite el despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas en conflictos internos y define los protocolos para “intervenir” en las rutas bloqueadas, lo cual, por lo general, está prohibido por la Constitución.

- **Reducción de garantías en los derechos de protesta**, declarando las protestas viales y los cortes de ruta como un atentado



contra la seguridad interna, con penas de prisión de 3 a 5 años para los bloqueadores.

- **Movilización militar:** Faculta al presidente para decretar el estado de sitio y movilizar a las fuerzas armadas para “restablecer el orden” en las zonas declaradas en excepción.

- **Blindaje jurídico** a las fuerzas represivas: el artículo 26 presume la legalidad de las actuaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía durante los estados de excepción, mientras que el artículo 27 garantiza la defensa legal, financiada por el Estado, a los efectivos procesados por hechos ocurridos en los operativos.

La promulgación de esta ley transforma el conflicto: ya no es una protesta social, sino una posible guerra interna, con el ejército como protagonista.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha brindado su respaldo explícito al gobierno de Paz, asociando las protestas con el “narcotráfico” y el “terrorismo”. Este apoyo no es gratuito: a cambio, el gobierno de Paz ha alineado su política exterior con Washington, revirtiendo décadas de cierta independencia regional. Hegseth declaró que su país apoyará a Bolivia para que no caiga “en la trampa del antiguo status quo de dominio narcoterrorista”. Este respaldo internacional fortalece la mano del gobierno para aplicar una mano dura sin temor a sanciones.

BOLIVIA EN UNA NUEVA ENCRUCIJADA REVOLUCIONARIA

Bolivia se encuentra en una encrucijada histórica. El intento del presidente Rodrigo Paz de imponer un programa neoliberal radical ha desatado una rebelión

popular que, en la práctica, ha generado una situación de **doble poder**. La Central Obrera Boliviana y las organizaciones sociales autónomas han demostrado una enorme capacidad de movilización y resistencia, sosteniendo bloqueos y huelgas durante más de cinco semanas, a pesar de la represión y las maniobras gubernamentales.

El movimiento se enfrenta a desafíos decisivos

1. **La unidad y la centralización:** La lucha sigue siendo desigual en todo el país. Ciudades como Santa Cruz (bastión de la derecha) no están tan movilizadas como La Paz y El Alto. La COB debe lograr la plena incorporación de todos los sectores a nivel nacional.

2. **Derrotar la represión y el estado de sitio:** Con la nueva Ley de Excepción, el gobierno intenta una salida militar al conflicto. Una represión masiva con apoyo de EE. UU., podría intentar aplastar la rebelión, pero a costa de un baño de sangre y una crisis aún más profunda.

3. **La cuestión del poder:** La demanda de “Fuera Paz” es negativa (sacar a uno), pero aún no se ha traducido en una propuesta positiva de poder por parte de las organizaciones populares. La historia de Bolivia (2003, 2005) muestra que sacar a un presidente no basta si no se transforma el Estado. Las bases radicalizadas empujan hacia una asamblea constituyente popular o un gobierno de la COB, pero las dirigencias aún coquetean con salidas institucionales (elecciones, un vicepresidente).

En resumen, el estallido iniciado en mayo de 2026 es la expresión más aguda de la crisis del régimen político boliviano. El

gobierno de Paz, ilegitimado por su propio programa, solo se sostiene con la represión y el apoyo de Trump. El movimiento popular, con la COB al frente pero impulsado por la autoorganización de base, tiene la oportunidad histórica de resolver las tareas pendientes de 2003: la destrucción del Estado burgués y la construcción de un verdadero poder obrero, campesino e indígena. El desenlace de esta rebelión definirá el rumbo del país en las próximas décadas. ■

BOLIVIA: LA REBELIÓN POPULAR EN LA CRISIS DEL ORDEN MUNDIAL

LITIO, DISPUTA INTERIMPERIALISTA Y LUCHA DE CLASES EN EL CORAZÓN DE AMÉRICA LATINA

EDU ALMEIDA Y FLORENCE OPPEN

INTRODUCCIÓN

Bolivia vive una nueva oleada de bloqueos, huelgas y protestas. No es una crisis política más. Es una rebelión popular que ocurre en un mundo muy distinto al de 2003 y 2005. El orden internacional cambió. Pero la explotación de los trabajadores bolivianos sigue intacta.¹

Sin embargo, la rivalidad interimperialista entre Estados Unidos y China no es un telón de fondo abstracto. Se expresa en las fuerzas políticas bolivianas, condiciona las alianzas de clase, atraviesa la crisis del MAS y el ascenso de Paz. La disputa por el litio, los contratos con Beijing, el respaldo de Washington al nuevo gobierno: todo eso forma parte de la misma trama. Por eso, para entender la rebelión popular de 2026, hay que mirar al mismo tiempo el Salar de Uyuni y la pelea entre los grandes monopolios mundiales.²

En este marco, la administración de Donald Trump impulsó una profunda redefinición de la estrategia estadounidense hacia América Latina. La política exterior de Estados Unidos ha definido cada vez más a China como su principal competidor estratégico. El National Security Strategy publicada en diciembre de 2025, identifica la competencia con China como uno de los principales desafíos del período y sitúa al hemisferio occidental entre las prioridades estratégicas de Estados Unidos.³

Esta estrategia comenzó a materializarse en nuevas iniciativas económicas y militares. Estados Unidos impulsó diversos mecanismos de

coordinación internacional orientados a asegurar el acceso a minerales críticos y reducir la dependencia de proveedores chinos.⁴

Paralelamente, Estados Unidos promovió el Escudo de las Américas, formalizado mediante una declaración conjunta del Departamento de Estado el 21 de mayo de 2026. Los países miembros —incluyendo a Bolivia— expresaron su respaldo al gobierno de Rodrigo Paz en medio de las protestas sociales, a las que calificaron como un intento de "subvertir el orden constitucional" apoyado por "criminales y narcotraficantes".⁵

Por lo tanto, la crisis boliviana actual no debe entenderse únicamente como un conflicto interno. La resistencia al ajuste económico, la crisis social y la gestión de los recursos nacionales se desarrollan en el contexto de una creciente disputa interimperialista por recursos clave para la economía global del siglo XXI. Comprender la relación entre la lucha de clases y el orden internacional es esencial para interpretar el significado histórico de la actual rebelión boliviana.

LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DE BOLIVIA (2003-2024): AUGÉ, CRISIS Y DEPENDENCIA RENOVADA

Para comprender la crisis actual es necesario examinar las transformaciones que experimentó la economía boliviana durante las últimas dos décadas. El denominado "modelo económico social comunitario productivo", impulsado por el MAS desde 2006, se apoyó en tres pilares: la recuperación estatal de una parte importante de la renta de los



hidrocarburos, el incremento del gasto público y una fuerte expansión de la inversión estatal. Favorecido por el auge internacional de las materias primas, Bolivia atravesó uno de los períodos de crecimiento más prolongados de su historia reciente. Entre 2003 y 2024, el PIB nominal pasó de aproximadamente 10.000 millones de dólares a cerca de 47.000 millones, mientras que el PIB per cápita aumentó de poco más de 1.000 dólares en 2005 a alrededor de 3.800 dólares en 2024. La pobreza extrema descendió del 38% al 15% durante el mismo período.⁶

Sin embargo, este crecimiento se ha dado, como en el resto de América Latina, como parte de la adecuación a la división internacional del trabajo impuesta

por el imperialismo: esencialmente extractivista. El caso boliviano, que se apoyó durante décadas en el estaño, ahora se centró en la producción y exportación de gas crudo (en particular a Brasil y Argentina), sin desarrollar la cadena productiva. En lugar de superar la dependencia, el auge permitió gestionarla en condiciones excepcionalmente favorables gracias al boom de las commodities.⁷

Desde la segunda mitad de la década de 2010 surgieron signos claros de agotamiento del ciclo del gas, debido al fin del boom de las commodities y a la disminución de las exportaciones a Brasil y Argentina (que pasaron a producir más). Las reservas internacionales, que alcanzaron cerca de 15.000 millones de dólares en 2014, cayeron a menos de 2.000 millones

de dólares en 2025. El Wall Street Journal describió esta caída como "una de las crisis de liquidez más severas de la región".⁸

En este contexto, el litio se convirtió en la principal apuesta estratégica del Estado boliviano. Se esperaba que el "oro blanco" reemplazara al gas como motor de crecimiento. Sin embargo, los resultados estuvieron lejos de lo esperado. Pese a contar con las mayores reservas teóricas de litio, Bolivia solo produjo 1.200 toneladas anuales de carbonato de litio en 2024, frente a las 200.000 toneladas de Chile y las 150.000 toneladas de Argentina. El accidentado camino de la industrialización del litio, después de diecisiete años de promesas, ha dejado a Bolivia fuera del auge de la electromovilidad.⁹

Paralelamente, la estructura de las relaciones económicas internacionales del país se transformó. En 2003, Estados Unidos era uno de los principales socios comerciales de Bolivia. Dos décadas después, China se convirtió en el principal socio comercial y proveedor de Bolivia, mientras que Estados Unidos descendió a un segundo plano. Empresas chinas como CAMC Engineering, Sinohydro, Huawei, TBEA Group y el consorcio CBC (CATL-Brup-CMOC) se convirtieron en actores centrales de la economía boliviana.¹⁰

La dependencia boliviana no desapareció sino que adoptó una forma más compleja. La crisis de rentabilidad del capitalismo estadounidense abrió una oportunidad para la expansión de empresas y de financiamiento chinos. Como documenta una tesis de la Universidad de Barcelona (2024), la dependencia de Bolivia ha rotado, pero no se ha

roto: de depender del capital estadounidense pasó a depender del capital chino.¹¹

EL TRIÁNGULO DEL LITIO Y LA DISPUTA INTERIMPERIALISTA

América Latina se ha convertido en uno de los escenarios centrales de la disputa entre Estados Unidos y China. Más de veinte países de la región, incluyendo Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, se han incorporado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), con una inversión china acumulada que supera los 180.000 millones de dólares.¹²

En los últimos años se produjo un cambio significativo. Mientras que inicialmente las inversiones chinas se centraban en la extracción de materias primas, ahora buscan controlar segmentos más amplios de las cadenas de

valor. Como señala el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), China ha pasado de saturar el mercado de litio para destruir la rentabilidad de proyectos rivales a asegurar contratos de largo plazo con productores en Chile, Argentina y Australia.¹³

Bolivia ocupa una posición central en esta disputa. Junto con Argentina y Chile, integra el denominado Triángulo del Litio, que concentra aproximadamente el 60% de los recursos mundiales de este mineral. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Bolivia posee alrededor de 23 millones de toneladas de recursos identificados, Argentina, 22 millones, y Chile, 11 millones. Sin embargo, la brecha entre el potencial geológico y la capacidad productiva es enorme. En 2024 Bolivia produjo apenas 1.200 toneladas de carbonato de litio, frente a las 200.000 de Chile y 150.000 de Argentina.¹⁴



El litio no vale por el mineral en bruto. Vale por lo que permite: baterías, autos eléctricos, dominio tecnológico en un momento clave de transformación de la matriz energética de producción y de integración de la IA a todos los niveles de la industria. Quien controla la tecnología de extracción, el refinado y la producción de cátodos —ese se lleva la mayor parte de la ganancia. Bolivia tiene el recurso, pero la renta se genera en eslabones monopolizados por unas pocas corporaciones transnacionales.

China es hoy una "potencia imperialista emergente en pugna con Estados Unidos", que sigue la misma lógica que las potencias clásicas: asegurar materias primas, mercados e inversiones para sostener su acumulación.¹⁸ Sus grandes corporaciones —CATL, BYD, CMOC, Zijin Mining, Ganfeng Lithium— operan como monopolios globales: exportan capital, controlan tecnologías estratégicas y organizan cadenas de producción a escala mundial.

Según el informe más reciente de la Agencia Internacional de la Energía (2025), China controla el 70% del refinado mundial de minerales críticos y mantiene cuotas del 80% o más en múltiples segmentos de la cadena de suministro de baterías, alcanzando un casi monopolio (superior al 95%) en materiales como los cátodos de fosfato de hierro y litio (LFP). Paralelamente, los gobiernos de Bolivia, Argentina y Chile firmaron en julio de 2025 el Tratado de Cooperación e Integración Litífera, buscando aumentar su capacidad de negociación frente a las grandes

corporaciones.¹⁵

Mientras Estados Unidos y China se disputan el control del "oro blanco", son los trabajadores bolivianos —mineros, campesinos, fabriles, transportistas— quienes sostienen con sus cuerpos y sus luchas la posibilidad de una salida distinta. La renta del litio no llega a sus bolsillos. Pero su capacidad para bloquear la economía y poner de rodillas a cualquier gobierno es el verdadero poder estratégico del país.

Esta presencia se manifiesta de manera concreta en el Triángulo del Litio. En Chile, la estadounidense Albemarle continúa siendo una de las principales productoras, mientras que la china Tianqi Lithium adquirió una participación en SQM. En Argentina, Ganfeng Lithium participa en proyectos como Cauchari-Olaroz. En Bolivia, el consorcio CBC se convirtió en el principal socio extranjero de YLB. BYD, el fabricante de coches eléctricos que ha superado a Tesla en ventas globales, presentó en mayo de 2026 una propuesta para instalar una planta de baterías en Bolivia.¹⁶

La disputa por el litio no sólo reorganizó las relaciones entre Bolivia y las grandes potencias. También reconfiguró el sistema político boliviano y aceleró la crisis del propio MAS.

EL MAS Y LA PENETRACIÓN CHINA EN BOLIVIA

El caso boliviano ilustra las contradicciones del llamado "socialismo del siglo XXI" en América Latina. Tras casi dos

décadas de gobiernos del MAS, Bolivia no superó su dependencia estructural ni desarrolló una base tecnológica propia para industrializar sus principales recursos. Por el contrario, el agotamiento del ciclo gasífero y la apuesta por el litio profundizaron nuevas formas de subordinación económica y tecnológica.¹⁷

La creciente relación entre el MAS y China evidenció una nueva configuración de intereses de clase en la burguesía boliviana. Mientras los sectores empresariales tradicionales mantenían vínculos históricos con Estados Unidos, los gobiernos del MAS impulsaron el ascenso de nuevos sectores burocráticos y tecnocráticos cuya acumulación dependía del gasto estatal y de la articulación con nuevos socios internacionales. China ofrecía financiamiento y tecnología sin exigir las reformas que el FMI históricamente imponía. Esa convergencia facilitó la aproximación entre el MAS y el capital chino.

Durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019) se sentaron las bases del rentismo extractivista. El litio fue declarado recurso estratégico no concesible en la Constitución de 2009 y la empresa estatal YLB fue creada en 2016. Sin embargo, la estrategia de Morales, basada en "piscinas de evaporación", resultó ineficaz en el Salar de Uyuni debido a la alta concentración de magnesio. Tras fracasar un contrato con la alemana ACI Systems (anulado en 2019), Morales recurrió a China y firmó acuerdos con TBEA Group y CAMC Engineering.¹⁹

El gobierno de Luis Arce (2020-2025) dio un giro radical

hacia la extracción directa de litio (EDL), una tecnología que Bolivia no posee. En septiembre de 2024 se firmó un contrato con la rusa Uranium One Group por 970 millones de dólares. En noviembre de 2024 y en enero de 2025 se firmaron contratos con el consorcio chino CBC por un total de 1.030 millones de dólares. El ministro de Energía justificó: "Rusia y China tienen la tecnología que nosotros no tenemos". Sin embargo, una jueza suspendió los proyectos en agosto de 2025 tras denuncias de comunidades indígenas por falta de consulta previa. El Center for International Private Enterprise (CIPE), vinculado al National Endowment for Democracy, calificó los contratos de un posible intento de "captura autoritaria" de la industria del litio. Organizaciones indígenas y civiles cuestionaron los acuerdos por falta de transparencia.²⁰

La gestión de Arce profundizó el giro: el capital extranjero asumió el control de la tecnología, se dejó de lado el discurso antiimperialista del MAS y la eliminación de subsidios a los combustibles — mediante el Decreto Supremo N° 5503 del 17 de diciembre de 2025— implementó el ajuste que Sánchez de Lozada intentó en 2003.²¹

LA FRACTURA DEL MAS

El conflicto interno entre evismo y arcismo, intensificado entre 2024 y 2025, va más allá de una disputa personal. Su origen radica en la lucha por el control del Estado, la renta de los recursos naturales y los grandes proyectos de litio. La fractura del MAS reflejó las contradicciones derivadas de la

inserción de Bolivia en la disputa entre Estados Unidos y China.²²

El arcismo: la apuesta chino-rusa. Arce apostó por una asociación estratégica con capitales extranjeros capaces de aportar financiamiento y tecnología, aunque ello implicara una fuerte dependencia. Esto expresaba los intereses de funcionarios y tecnócratas cuya acumulación dependía de la continuidad de estos proyectos.

El evismo: oposición al nuevo bloque de poder. Morales se convirtió en el principal crítico de los acuerdos con China y Rusia, denunciando la opacidad y las condiciones desfavorables. Pero estas críticas reflejaban también una disputa política: el éxito de los proyectos de Arce consolidaría un nuevo bloque de poder dentro del MAS, lo que reduciría la influencia de este.

Andrónico Rodríguez. El presidente del Senado se distanció de ambos y se presentó a las elecciones de 2025 con su propio partido. Esta fragmentación fue letal: el MAS, que en 2020 había obtenido el 55% de los votos, obtuvo apenas un 3,16% en 2025, rozando la pérdida de su personería jurídica.²³

Los límites históricos del MAS. Durante casi dos décadas construyó un bloque de poder basado en la renta de los hidrocarburos, pero no consolidó una base autónoma de acumulación. Se fueron formando nuevos sectores burgueses a partir del aparato del Estado, que se dividieron en torno al control del litio. Cuando la renta disminuyó, esta debilidad se convirtió en una

crisis política abierta. La falta de una dirección revolucionaria sigue siendo el punto débil de la lucha de clases en Bolivia.²⁴

El vacío dejado por el MAS fue el terreno en el que la burguesía tradicional comenzó a reorganizarse. La fragmentación del partido gobernante abrió la oportunidad para que los sectores empresariales y políticos desplazados durante casi dos décadas reconstruyeran una alternativa común. Esa alternativa encontró expresión en Rodrigo Paz.²⁵

LA BURGUESÍA TRADICIONAL Y EL ASCENSO DE RODRIGO PAZ

Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y formado en la American University de Washington D.C., ganó las elecciones de 2025 con la coalición Alianza Patria, que agrupa a Creemos (Camacho), Unidad Nacional (Doria Medina), SOL.bo (Revilla) y el MIR-Nueva Mayoría. Es un frente político de la burguesía que va desde la derecha dura autonomista hasta el neoliberalismo empresarial.²⁶

El programa de Paz, Agenda 50/50, propone la descentralización radical, la eliminación de las barreras arancelarias y la criminalización de la protesta social. Aunque ha declarado su oposición al FMI, su proyecto es un ajuste estructural clásico: eliminación de subsidios, desregulación y apertura total al capital extranjero.²⁷

El gobierno de Paz es la expresión de una fracción de la

burguesía boliviana que apuesta por reintegrarse al circuito tradicional de acumulación: Estados Unidos, el FMI, los inversores occidentales. Creen que, atándose otra vez al capital estadounidense, se aseguran una mayor renta y estabilidad. Para los trabajadores, la diferencia es menor: con un amo u otro, siempre son ellos los que pagan el ajuste.²⁸

LA CRISIS ACTUAL: REBELIÓN POPULAR, REPRESIÓN E INTERVENCIÓN EXTRANJERA

Las movilizaciones populares que estallaron a partir de diciembre de 2025 y se intensificaron en mayo y junio de 2026 expresan un profundo rechazo al deterioro de las condiciones de vida, al aumento del costo de los combustibles, a las políticas de ajuste y a la percepción de que los recursos estratégicos siguen subordinados a intereses externos. Organizaciones campesinas, sectores indígenas, sindicatos y juntas vecinales volvieron a ocupar un lugar central. El Alto recuperó el protagonismo que había tenido en 2003 y 2005.²⁹

La respuesta gubernamental ha sido la represión. Pero el rasgo más significativo es la intervención rápida de Estados Unidos. Los días 4 y 5 de junio de 2026, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth anunciaron el envío de "asistencia de emergencia" al gobierno de Paz en el marco del Escudo de las Américas. Rubio calificó las protestas de "un intento de golpe financiado por el narcotráfico", mientras que Hegseth denunció el supuesto retorno al "dominio

narcoterrorista". Por primera vez desde 2006, Estados Unidos intervino de manera tan explícita en una crisis política boliviana.³⁰

Mientras Estados Unidos respaldaba abiertamente a Paz, China adoptó una estrategia diferente: evitar intervenir directamente y concentrarse en garantizar la continuidad de los contratos. A través de su embajada, declaró su "respeto a la soberanía de Bolivia" y su "confianza en que el gobierno cumplirá los contratos". China no necesita tanques para asegurar su acceso al litio boliviano: tiene deudas, contratos y una red de intereses económicos entrelazados.³¹

La fuerza de las organizaciones obreras, campesinas e indígenas contrasta con la falta de una dirección política independiente de clase. La COB, la FEJUVE y los sindicatos campesinos mantienen autoridad y capacidad de movilización, pero ninguna ha logrado articular una estrategia común para disputar el poder. La fragmentación de la dirección de las masas —entre arcistas, evistas, autonomistas e independientes— es tan real como la de la burguesía.

LA POLÍTICA REFORMISTA DE LOS "CAMPOS" REVELA UNA VEZ MÁS SU VERDADERA ESENCIA

Hoy Bolivia está en el centro de la lucha de clases del continente. Trump obtuvo una victoria política en Venezuela, apoderándose del petróleo e imponiendo a Delcy Rodríguez. Busca una nueva victoria en Bolivia. Si, por el contrario, el gobierno de Paz cae bajo la presión del movimiento de

masas, será una seria derrota para Trump.

La fuerte polarización social y política en el continente puede desembocar en un ascenso revolucionario semejante al de Colombia, Ecuador y Chile entre 2018 y 2020, que fue canalizado hacia la democracia burguesa por las direcciones reformistas. Pero ese ascenso se está chocando no solo con la ultraderecha y Trump, sino también con la democracia burguesa. El apoyo de Lula al gobierno de Paz contra las masas es todo un símbolo de esa política: el reformismo se alía con la burguesía y el imperialismo para mantener la paz y la democracia burguesa.

NI ESTADOS UNIDOS NI CHINA: LA PERSPECTIVA DE UNA SALIDA INDEPENDIENTE DE CLASE

La crisis boliviana expresa la convergencia de tres procesos: la crisis del orden internacional posterior a la restauración capitalista en la ex URSS; el ascenso de China como potencia capaz de disputar espacios a Estados Unidos; y la crisis de los proyectos nacional-populares que intentaron administrar la dependencia sin romper con ella.³²

La creciente agresividad de la política estadounidense hacia Bolivia —NSS, Escudo de las Américas, respaldo directo a Paz— evidencia la pérdida de influencia de Estados Unidos en las dos décadas previas. Recuperar presencia en el Triángulo del Litio es fundamental para su estrategia global de competencia con China. La competencia por el control de

los minerales estratégicos, las cadenas de suministro y los espacios de inversión constituye una manifestación concreta de la disputa por la acumulación mundial. En este marco, los monopolios estadounidenses buscan recuperar posiciones frente a la expansión de los capitales chinos en América Latina, mientras el Estado estadounidense actúa como el principal instrumento político, diplomático y militar de esos intereses.

Durante casi veinte años, el MAS no modificó la inserción subordinada de Bolivia en la economía mundial. Como documenta el CEDLA, la crisis energética y fiscal "no es coyuntural, sino el resultado de un modelo de producción y consumo insostenible" basado en la renta extractivista. La articulación con China y Rusia prolongó la viabilidad del proyecto, pero cuando la renta disminuyó, las contradicciones estallaron. La burguesía tradicional aprovechó ese colapso para recomponerse alrededor de Paz, con el respaldo de Estados Unidos.³³

Las masas bolivianas han demostrado una y otra vez que pueden derribar gobiernos (2003, 2005) y poner en jaque a los poderes establecidos (2019, 2026). Lo que les ha faltado no es fuerza, sino una dirección política que articule esa fuerza en un programa de poder obrero y campesino. La COB, la FEJUVE y las organizaciones indígenas cuentan con autoridad moral y capacidad organizativa. Falta la voluntad política para romper con el reformismo y con la ilusión de que se puede administrar el capitalismo con rostro humano.

La experiencia boliviana muestra que la fuerza de las movilizaciones de masas, por sí sola, no resuelve la cuestión del poder. La construcción de un partido revolucionario arraigado en la clase trabajadora, los campesinos y los pueblos indígenas sigue siendo una necesidad estratégica.³⁴

No nos equivoquemos. La rivalidad interimperialista entre Washington y Pekín modifica las formas de la dominación imperialista, sin eliminar su contenido de clase. La rivalidad interimperialista entre Washington y Pekín modifica las formas de esa dominación, pero no elimina su contenido de clase. El único camino para la soberanía nacional y una verdadera independencia es que la clase trabajadora boliviana, aliada con las comunidades indígenas, tome el poder, ponga la economía y las tierras bajo control obrero, nacionalice verdaderamente la producción y corte la dependencia de ambas potencias imperialistas y sus intereses en el país. Por eso hoy más que nunca, la solidaridad internacionalista con la lucha del pueblo boliviano es fundamental.

Las movilizaciones de 2026 han vuelto a situar en el centro una cuestión clave de la historia contemporánea de Bolivia. Los bloqueos, la COB, la FEJUVE y las organizaciones campesinas demuestran que existen fuerzas sociales capaces de desafiar al Estado. En este contexto, la consigna "Todo el poder a la COB" resume la necesidad de que la clase trabajadora y los sectores populares actúen con un programa propio. La principal tarea de la

nueva rebelión sigue siendo transformar esa fuerza demostrada en una alternativa de poder que dispute el gobierno y abra el camino hacia una Bolivia socialista, integrada en una federación socialista de América Latina. ■

NOTAS

¹ Sobre la crisis del orden mundial: **Historical Materialism**, vol. 32, núm. 3, 2024; Perry Anderson, **New Left Review** 147, 2024; Graham Allison, **Destined for War** (2017); IISS, **The Military Balance 2026**.

² Ídem.

³ **National Security Strategy 2025-2030** (The White House, diciembre 2025); USGS, **Mineral Commodity Summaries 2025**.

⁴ Un ejemplo fue el FORGE (Forum on Resource Geostrategic Engagement), lanzado en febrero de 2026 con 56 países. **Yonhap News Agency**, 5 febrero 2026.

⁵ **U.S. Department of State**, "Declaración conjunta de los miembros del Escudo de las Américas", 21 mayo 2026; **Reuters**, 21 mayo 2026.

⁶ INE, **Cuentas Nacionales 2000-2024**; BCB, **Memorias Anuales**; Banco Mundial, **Bolivia: Poverty Assessment 2025**.

⁷ CEPAL, **América Latina y el Caribe: Recursos naturales, desarrollo y crisis del extractivismo** (2025), cap. 4.

⁸ **The Wall Street Journal**, "Bolivia's Liquidity Crisis", 17 enero 2026.

⁹ **El País América Futura**, "El accidentado camino del litio en Bolivia", 3 junio 2025; USGS, **Mineral Commodity Summaries 2025**.

¹⁰ Ver nota 11.

¹¹ **Universitat de Barcelona**, tesis doctoral "Essays on the Political Economy of Trade Policy" (2024), cap. 4.

¹² CEPAL, "La Franja y la Ruta de la Seda en América Latina" (2024); RED ALC-China, **Inversión china en América Latina 2005-2024** (2025).

¹³ **Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL)**, "El mercado de litio", 24 abril 2026.

¹⁴ USGS, **Mineral Commodity Summaries 2025**; Universidad Complutense de Madrid, "Producción y comercialización del litio en el Triángulo del Litio" (2025).

¹⁵ IEA, **Energy Technology Perspectives 2025**; **Mining.com**, "Bolivia, Argentina, Chile sign lithium cooperation agreement", 25 julio 2025.

¹⁶ Reuters, "BYD pitches lithium plan to Bolivia", 1 junio 2026.

¹⁷ Maristella Svampa, **Extractivismo neoextractivismo y crisis civilizatoria** (2023); Pablo Stefanoni, **¿La rebeldía se volvió de derecha?** (2025).

¹⁸ **Liga Internacional de los Trabajadores (LIT)**, "China, la potencia imperialista emergente en pugna con EE.UU.", 21 de noviembre de 2025.

¹⁹ **Financial Times**, "The curse of white gold", 14 junio 2018.

²⁰ Contratos: Reuters, 29 junio 2023, 26 septiembre 2024, 26 noviembre 2024. Suspensión: **Mongabay Latam**, 25 agosto 2025.

CIPE: **Center for International Private Enterprise**, "Securing the Lithium Sector", diciembre 2025.

²¹ **Decreto Supremo N° 5503**, 17 diciembre 2025; **El Deber**, 30 diciembre 2025.

²² **Página/12**, "Bolivia: una autodestrucción", 19 octubre 2025;

The Guardian, 24 agosto 2025.

²³ **The Guardian**, 24 agosto 2025; **SWI swissinfo/EFE**, 18 agosto 2025.

²⁴ **CEDLA**, "Modelo rentista, crisis y pobreza multidimensional", abril 2025.

²⁵ Jonas Wolff (PRIF), "Back to the Future? Bolivia after the 2025 elections", **Más Poder Local** N°62, 2025; **NACLA**, "Bolivia and its Destiny", 28 octubre 2025.

²⁶ **NACLA**, 28 octubre 2025; **Tribunal Supremo Electoral**, Resolución TSE N° 045/2025.

²⁷ Rodrigo Paz, **Agenda de Gobierno "Bolivia 50/50"** (diciembre 2025); entrevistas con **Reuters** y **FT**, noviembre-diciembre 2025.

²⁸ **Mining.com/Bloomberg**, 5 febrero 2026; **Reuters**, 5 febrero 2026.

²⁹ **Página Siete**, 20 mayo 2026; **El Deber**, 25 mayo 2026.

³⁰ Marco Rubio y Pete Hegseth, declaraciones 4-5 junio 2026; **APDHB**, informe 5 junio 2026.

³¹ Embajada de China en Bolivia, declaraciones públicas, junio 2026.

³² Ver notas 1 y 2; **CEDLA**, "La crisis energética en Bolivia es estructural", 31 octubre 2025.

³³ **CEDLA**, Carlos Arze Vargas, "La obsesión por la oferta", 31 octubre 2025; **KAS**, "Bewährungsprobe für Boliviens Regierung", 29 mayo 2026.

³⁴ Sobre la necesidad de un partido revolucionario, véase la tradición trotskista (programa de transición, Cuarta Internacional).

BOLIVIA: DEL CICLO REVOLUCIONARIO A LA CONTENCIÓN DEL MAS

LENA SOUZA (PSTU B) Y ESPI RAMÓ (WV, EEUU)

INTRODUCCIÓN

Entre 2000 y 2005, Bolivia fue uno de los principales laboratorios de la lucha de clases latinoamericana. Mientras gran parte de la izquierda mundial proclamaba la estabilidad definitiva del capitalismo, las masas bolivianas protagonizaron levantamientos que cuestionaron no solo un gobierno o una política económica, sino también el conjunto de las políticas neoliberales surgidas tras la restauración capitalista. Estas políticas expresaban la ofensiva imperialista liderada por Estados Unidos a través del FMI y del Banco Mundial, mediante privatizaciones, ajustes estructurales y la apertura económica forzada al capital de los imperialismos occidentales.

La Guerra del Agua de Cochabamba, las rebeliones cocaleras y campesinas, la insurrección de octubre de 2003 y las jornadas de mayo-junio de 2005 marcaron uno de los ascensos más profundos de América Latina en el siglo XXI. En menos de cinco años cayeron varios gobiernos. Decenas de miles de campesinos bloquearon rutas, los mineros regresaron a la escena política y El Alto emergió como el principal centro de poder plebeyo del continente.

En 2003, Bolivia tenía aproximadamente 9 millones de habitantes. Las movilizaciones de junio de 2005, con entre 400.000 y 500.000 personas en las calles de La Paz, involucraron alrededor del 5% de la población. La COB agrupaba entonces a aproximadamente 500.000 trabajadores sindicalizados, cerca del 22% de la población económicamente activa.¹

En los momentos culminantes de esta ola de luchas surgieron elementos embrionarios de una alternativa de poder. Las juntas vecinales de El Alto, los sindicatos mineros, la COB y diversas coordinadoras populares asumieron funciones que escapaban al control estatal. En junio de 2005, cuando

cientos de miles colmaron las calles de La Paz y se planteó una Asamblea Popular, la cuestión del poder dejó de ser una consigna y se convirtió en un problema práctico.²

Allí apareció el límite estratégico del ascenso: las masas no lograron construir una dirección revolucionaria capaz de plantear la conquista del poder. El Movimiento al Socialismo (MAS) ocupó ese vacío. Su papel histórico no fue conducir la revolución, sino canalizar el proceso hacia una salida institucional dentro de los marcos de la democracia burguesa.³

La experiencia posterior del MAS confirmó tanto la fuerza como los límites de esas expectativas. Durante más de una década, el boom de las materias primas permitió combinar crecimiento, gasto social y relativa estabilidad política. Pero las contradicciones que dieron origen al ascenso revolucionario nunca fueron resueltas. La crisis de 2019 y las disputas actuales dentro del propio MAS son el resultado de una estrategia que logró contener una revolución pero no resolver las causas que la hicieron posible.

LA GUERRA DEL AGUA: EL COMIENZO DEL ASCENSO

La primera gran explosión se produjo en Cochabamba en 2000. La privatización del servicio de agua potable en favor de Aguas del Tunari — consorcio dominado por la estadounidense Bechtel— provocó una reacción inmediata cuando el gobierno autorizó aumentos tarifarios de entre el 35% y el 400%.⁴ Para miles de familias trabajadoras y campesinas, esas tarifas significaban la imposibilidad de acceder a un recurso elemental.

La respuesta desbordó rápidamente los canales institucionales. La población tomó las calles, enfrentó al ejército y construyó organismos propios de coordinación a través de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida.⁵

La represión no derrotó al movimiento. Lo fortaleció. Finalmente, el gobierno de Hugo Banzer se vio obligado a cancelar el contrato con la multinacional.

La importancia histórica de Cochabamba excedió la cuestión del agua. Por primera vez desde la consolidación del modelo neoliberal, una movilización de masas derrotó una de las políticas centrales impulsadas por el imperialismo y los organismos financieros internacionales.⁶ El triunfo mostró que las privatizaciones podían revertirse mediante la acción directa y modificó la relación de fuerzas en todo el país.

La Guerra del Agua inauguró así una nueva etapa. Lo que comenzó como una lucha contra la privatización de un servicio público terminó transformándose en el primer gran desafío al orden neoliberal construido en Bolivia desde mediados de los años ochenta.

BLOQUEOS CAMPESINOS Y CRISIS DEL RÉGIMEN

Durante los años siguientes, el ascenso continuó ampliándose. Los cocaleros del Chapare y la CSUTCB, dirigida por Felipe Quispe, paralizaron importantes regiones mediante bloqueos de caminos, el principal instrumento de lucha de las masas rurales.⁷ La crisis dejó de ser un fenómeno localizado y comenzó a adquirir una dimensión nacional. Campesinos, indígenas y cocaleros aparecían cada vez con mayor frecuencia como actores capaces de desafiar directamente la autoridad del Estado.

Detrás de estas luchas se acumulaba el rechazo a dos décadas de privatizaciones, ajustes económicos, desempleo y

subordinación a Estados Unidos y a los organismos financieros internacionales.

La llegada de Gonzalo Sánchez de Lozada a la presidencia en 2002 no resolvió ninguno de los problemas acumulados. Por el contrario, profundizó la polarización social y política. Las luchas dejaron de girar exclusivamente en torno a reivindicaciones sectoriales y comenzaron a cuestionar más abiertamente la orientación general del país y la legitimidad de quienes lo gobernaban.

OCTUBRE DE 2003: LA INSURRECCIÓN

La decisión del gobierno de exportar gas natural a Estados Unidos y México a través de puertos chilenos detonó una crisis mucho más profunda. El proyecto, impulsado por el consorcio Pacific LNG —integrado por British Gas, Repsol-YPF y Pan American Energy—, preveía exportar enormes reservas gasíferas en condiciones ampliamente favorables para las multinacionales. Para amplios sectores populares, la exportación del gas simbolizaba la continuidad del saqueo de los recursos naturales por empresas extranjeras.⁸

La Guerra del Gas condensó reivindicaciones acumuladas durante años: recuperar el control nacional sobre los recursos estratégicos y poner fin a un modelo económico percibido como responsable del empobrecimiento de las mayorías.

La represión militar contra las comunidades aymaras en Warisata encendió la situación. El centro de gravedad se desplazó hacia El Alto, mientras los bloqueos se multiplicaban y la autoridad



gubernamental se deterioraba a un ritmo acelerado. Lo que parecía un conflicto en torno al gas se convirtió en una confrontación abierta contra el gobierno de Sánchez de Lozada.

Octubre de 2003 marcó el ingreso de Bolivia a una nueva etapa. La acumulación de luchas iniciada en Cochabamba daba paso a una situación insurreccional en la que la cuestión del poder comenzaba a emerger cada vez más explícitamente.

EL ALTO: EL CORAZÓN DE LA REVOLUCIÓN

A comienzos de los años 2000, El Alto se había convertido en una de las mayores concentraciones obreras y populares de América Latina. Surgida de la migración campesina y de la relocalización minera posteriores a las derrotas obreras de los años ochenta, la ciudad reunía cerca de 800.000 habitantes en 2005. Allí se concentraban exmineros, trabajadores informales, pequeños comerciantes, obreros fabriles, transportistas, jóvenes desempleados y comunidades indígenas urbanizadas. La destrucción de una parte importante del proletariado minero no había eliminado a la clase trabajadora boliviana; la había reconfigurado social y territorialmente.⁹

Las condiciones de vida eran extremadamente precarias: alrededor de 200.000 habitantes carecían de acceso regular al agua potable, más de la mitad de la población no disponía de servicios básicos adecuados y entre el 65% y el 75% de la población económicamente activa trabajaba en la informalidad.¹⁰ Sin embargo, esta pobreza coexistía con gran capacidad organizativa.

Las aproximadamente 600 juntas vecinales agrupadas en la FEJUVE constituían una poderosa red territorial. Durante la insurrección, organizaron bloqueos, abastecimiento, vigilancia barrial y mecanismos de deliberación colectiva que, en determinadas zonas, comenzaron a sustituir parcialmente las funciones del Estado. Foley observó que estas estructuras actuaban como verdaderos “microgobiernos” barriales, expresión de una situación en la que la autoridad estatal comenzaba a ser disputada por organismos surgidos de la movilización directa.¹¹

La FEJUVE acumulaba décadas de lucha por servicios básicos, vivienda e infraestructura urbana. Sus dirigentes surgían de las propias bases vecinales y rendían cuentas ante asambleas barriales, lo que les otorgaba una legitimidad muy superior a la de las instituciones estatales tradicionales.

El Alto se transformó así en el principal centro político de la crisis nacional. Su ubicación estratégica —controlando los accesos a La Paz y al aeropuerto— le otorgaba una enorme capacidad de presión. Sin El Alto movilizado, el abastecimiento de la capital se volvía extremadamente difícil y el gobierno perdía buena parte de su capacidad efectiva de mando.

Durante los momentos culminantes del ascenso, la ciudad se convirtió en el principal laboratorio de la organización popular del país. Allí se expresó con claridad una de las contradicciones centrales del proceso: la existencia de poderosas formas de autoorganización capaces de desafiar al Estado, pero aún incapaces de articularse a nivel

nacional en una alternativa de poder consciente.

LOS MINEROS REGRESAN A LA ESCENA HISTÓRICA

Uno de los rasgos más importantes de Octubre fue el retorno político del proletariado minero. Tras las derrotas sufridas en los años ochenta, numerosos analistas habían decretado el fin de la centralidad política de la clase obrera boliviana. La insurrección de 2003 demostró lo contrario.¹²

Las columnas procedentes de Huanuni y de otros distritos mineros marcharon hacia La Paz, armadas con dinamita, y se incorporaron al levantamiento popular. Su presencia tuvo una enorme importancia política y simbólica. Para amplios sectores de las masas evocaba las tradiciones revolucionarias de 1952, las grandes huelgas mineras y el papel histórico de la COB como dirección del movimiento obrero boliviano.

La COB convocó una huelga general indefinida y coordinó acciones con organizaciones campesinas, vecinales y estudiantiles.¹³ Maestros, trabajadores estatales y sectores populares urbanos se incorporaron masivamente a la movilización.

La convergencia entre la insurrección de El Alto, los bloqueos campesinos y el retorno de los mineros recreaba, bajo nuevas condiciones históricas, la perspectiva de una alianza obrero-campesina capaz de desafiar al Estado.

Sin embargo, esa potencialidad chocaba con el problema que atravesó todo el ciclo revolucionario: las masas demostraban una enorme capacidad de combate y organización, pero seguían

careciendo de una dirección revolucionaria capaz de centralizar la movilización a escala nacional y transformarla en una lucha consciente por el poder.

LA CAÍDA DE SÁNCHEZ DE LOZADA

La respuesta del gobierno fue el terrorismo de Estado. Tras aprobar el Decreto Supremo 27209, el ejército ocupó El Alto y desplegó tanques, vehículos blindados, helicópteros y tropas armadas con fusiles de guerra para garantizar el transporte de combustibles hacia La Paz. Entre septiembre y octubre de 2003, la represión dejó al menos 67 muertos y más de 400 heridos, en su inmensa mayoría civiles. Soldados dispararon contra bloqueos, marchas y barrios populares, mientras organismos de derechos humanos documentaron ejecuciones extrajudiciales, uso indiscriminado de la fuerza y graves violaciones a los derechos humanos.¹⁴

La masacre no derrotó la insurrección. La radicalizó. Las consignas pasaron rápidamente del rechazo a la exportación del gas a la exigencia de la caída inmediata de Sánchez de Lozada. Entre el 11 y el 17 de octubre, Bolivia vivió una situación prerrevolucionaria.¹⁵ El gobierno perdía aceleradamente autoridad y control territorial. El Alto permanecía movilizado, los bloqueos campesinos se extendían, la COB impulsaba la huelga general y los mineros convergían hacia La Paz. Incluso sectores de las clases dominantes comenzaban a temer el derrumbe completo del régimen.¹⁶

Finalmente, el 17 de octubre de 2003, Sánchez de Lozada huyó a Estados Unidos. Por primera vez desde la derrota del movimiento

obrero en los años ochenta, una movilización de masas había derribado al principal representante del neoliberalismo mediante la acción directa. Pero la victoria dejaba abierta la cuestión decisiva: quién ocuparía el vacío político creado por la insurrección.

LA CUESTIÓN DEL PODER

La caída de Sánchez de Lozada desencadenó una auténtica crisis de poder. Las instituciones tradicionales estaban desacreditadas y amplios sectores de las masas confiaban más en sus propias organizaciones. En El Alto, las juntas vecinales habían adquirido una autoridad política superior a la de muchas instituciones oficiales. Los sindicatos mineros recuperaban protagonismo nacional y la COB volvía a aparecer como un punto de referencia para amplios sectores de trabajadores y campesinos.¹⁷

El problema ya no era únicamente derribar un gobierno. Era decidir quién debía gobernar Bolivia. En determinadas zonas del país, la autoridad efectiva recaía más en las organizaciones surgidas de la movilización que en las instituciones heredadas del régimen neoliberal. Las juntas vecinales organizaban el abastecimiento y los bloqueos, los sindicatos impulsaban huelgas nacionales y las organizaciones campesinas mantenían paralizadas regiones enteras.¹⁸

Sin embargo, ninguna de las direcciones con influencia de masas impulsó una estrategia orientada a transformar aquella situación en una lucha consciente por el poder. La COB osciló entre la radicalidad discursiva y la negociación. Felipe Quispe mantuvo una perspectiva centrada en el movimiento aymara. El MAS

apostó sistemáticamente por una salida electoral, renovando la ilusión de que el sistema podía reformarse desde dentro.¹⁹

La crisis no fue derrotada militarmente. Fue desviada políticamente. La asunción de Carlos Mesa permitió recomponer parcialmente la autoridad estatal y actuar como dique de contención del proceso revolucionario. La caída de Sánchez de Lozada permitió a la burguesía sacrificar a la figura más identificada con la represión sin alterar las estructuras fundamentales del régimen. Mesa adoptó un discurso conciliador, prometió diálogo, referéndums y reformas institucionales y logró trasladar temporalmente la crisis de las calles al terreno político-parlamentario. Ninguna de las demandas centrales de Octubre fue resuelta, pero el nuevo gobierno consiguió ganar tiempo y evitar que la caída de Goni desembocara de inmediato en una confrontación abierta por el poder.

JUNIO DE 2005: EL ENSAYO GENERAL DE REVOLUCIÓN

Mesa intentó ganar tiempo, pero las demandas de Octubre permanecían intactas: nacionalización de los hidrocarburos, castigo a los responsables de la masacre y transformación del régimen. En 2005, la movilización volvió a crecer. El Alto regresó al centro de la escena y más del 60% de las rutas nacionales fueron bloqueadas. El Congreso no podía funcionar normalmente y La Paz quedó parcialmente cercada.²⁰

Mesa comprendió que no podía apoyarse en una represión generalizada como la de 2003. La masacre de octubre había dejado a las Fuerzas Armadas profundamente desprestigiadas y

una nueva intervención militar podía precipitar una crisis aún más profunda. La respuesta del gobierno fue el terrorismo de Estado. Tras aprobar el Decreto Supremo 27209, el ejército ocupó El Alto y desplegó tanques, vehículos blindados, helicópteros y tropas armadas con fusiles de guerra para garantizar el transporte de combustibles hacia La Paz. Entre septiembre y octubre de 2003, la represión dejó al menos 67 muertos y más de 400 heridos, en su inmensa mayoría civiles. Soldados dispararon contra bloqueos, marchas y barrios populares.²¹ La represión, esta vez, lejos de amedrentar las protestas, las multiplicó y les dio más fuerza, incorporando nuevos sectores radicalizados por la violencia estatal. El 6 de junio, entre 400.000 y 500.000 personas colmaron las calles de La Paz en una de las mayores movilizaciones de la historia boliviana.²² En ese contexto, la COB, la FEJUVE y organizaciones mineras comenzaron a plantear la convocatoria a una Asamblea Popular y a un gobierno basado en las organizaciones de masas. Por primera vez, la cuestión de quién debía gobernar el país aparecía formulada explícitamente por organizaciones de masas.²³

Mientras tanto, el Congreso se vio obligado a abandonar La Paz y sesionar en Sucre. La burguesía estaba dividida entre quienes impulsaban una salida represiva y quienes buscaban una fórmula de compromiso para evitar una confrontación directa con las masas. Bolivia se aproximaba a una situación revolucionaria abierta.²⁴

Sin embargo, las organizaciones populares seguían careciendo de una dirección revolucionaria. Mientras la

movilización alcanzaba sus niveles más altos, Morales insistía en la salida electoral. La crisis terminó resolviéndose mediante la convocatoria a nuevas elecciones y la asunción transitoria de Eduardo Rodríguez.²⁵

La elección de Evo Morales en diciembre de 2005, con 1,54 millones de votos y el 53,7% de los sufragios, constituyó la expresión política de esta nueva relación de fuerzas. Por primera vez desde el retorno de la democracia, un candidato obtenía una mayoría absoluta apoyado por amplios sectores de trabajadores, campesinos e indígenas que identificaban al MAS con las aspiraciones surgidas de Octubre de 2003 y Junio de 2005.²⁶

LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL MAS

La campaña del MAS logró condensar gran parte de las aspiraciones surgidas durante el ciclo de movilizaciones. Morales prometía nacionalizar los hidrocarburos, convocar una Asamblea Constituyente, recuperar la soberanía nacional frente al neoliberalismo e incorporar plenamente a los pueblos indígenas a la vida política del país. Para millones de trabajadores, campesinos e indígenas, el MAS aparecía como la expresión electoral de las reivindicaciones surgidas en Octubre de 2003 y Junio de 2005.

Sin embargo, su proyecto no apuntaba a sustituir la democracia burguesa por organismos de poder de los trabajadores y los campesinos. La propuesta central era refundar Bolivia mediante una Asamblea Constituyente capaz de reconstruir la legitimidad de un Estado profundamente desacreditado y de reorganizar el

régimen político sobre nuevas bases sociales. La ampliación de los derechos democráticos y la incorporación de los pueblos indígenas formaban parte de un nuevo pacto nacional destinado a estabilizar el país tras las jornadas insurreccionales, no de una ruptura con el capitalismo boliviano.

En este sentido, el MAS buscaba desplazar parcialmente a la vieja oligarquía tradicional y ampliar la participación de nuevos sectores empresariales, capas medias urbanas, burocracias estatales y dirigencias campesinas e indígenas integradas al aparato estatal. Mientras los sectores más radicalizados del movimiento popular comenzaban a discutir formas propias de poder, el MAS proponía resolver la crisis construyendo un nuevo bloque de gobernabilidad dentro de los límites del Estado existente.

La sigla Movimiento al Socialismo (MAS) no surgió originalmente como expresión de una definición programática socialista, sino que fue adoptada cuando el movimiento cocalero necesitó un instrumento electoral legalmente registrado y utilizó la personería de una organización ya existente.²⁷ Más importante que el nombre era el contenido político que Morales y sus principales dirigentes atribuían al término “socialismo”, que tenía un significado distinto del socialismo marxista clásico. Morales utilizaba el término de manera general para referirse al “socialismo comunitario”, inspirado en las tradiciones indígenas andinas de reciprocidad, solidaridad y vida comunitaria. En una entrevista realizada en 2003 afirmaba: “Fundamentalmente, en las comunidades campesinas hay

socialismo (...) un modelo económico basado en la solidaridad, la reciprocidad, la comunidad y el consenso”.²⁸ Esta definición no estaba centrada en la abolición de la propiedad privada ni en la construcción de un Estado obrero, sino en la recuperación de valores comunitarios considerados propios de las tradiciones indígenas andinas.

Álvaro García Linera desarrolló esta perspectiva con mayor claridad. Antes de asumir el gobierno sostuvo que Bolivia debía atravesar una etapa de “capitalismo andino-amazónico”, caracterizada por la ampliación del mercado interno, un mayor protagonismo estatal y el fortalecimiento de una burguesía nacional antes de cualquier eventual transición futura al socialismo, adoptando la típica concepción etapista del estalinismo y el frentepopulismo en los países semicoloniales.²⁹ Desde esta perspectiva, el objetivo inmediato no era superar el capitalismo boliviano sino reorganizarlo sobre nuevas bases sociales y políticas.

Por eso, aunque utilizaba un lenguaje socialista y antiimperialista, el MAS se diferenciaba profundamente de la tradición representada por la Tesis de Pulacayo y por el sindicalismo minero revolucionario, que sí planteaban una ruptura con el capitalismo y la construcción de un gobierno de trabajadores y campesinos.

UN PARTIDO NACIDO DEL ASCENSO, PERO NO PARA LLEVARLO HASTA EL FINAL

El MAS no era ni un partido burgués tradicional ni un partido obrero revolucionario. Su núcleo dirigente provenía de las federaciones cocaleras del Chapare

y de sectores campesinos e indígenas radicalizados por las luchas contra el neoliberalismo.³⁰

A diferencia de los partidos tradicionales, no aparecía como una organización ajena al movimiento popular. Había nacido de las luchas contra la erradicación de la coca, las privatizaciones y las políticas neoliberales. Pero precisamente porque aspiraba a gobernar toda la sociedad, construyó una amplia alianza en la que convivían campesinos pobres, organizaciones indígenas, pequeños productores, capas medias urbanas, intelectuales nacionalistas, funcionarios estatales e incluso sectores empresariales interesados en renegociar el lugar de Bolivia en el mercado mundial.³¹

Esta amplitud constituía una fuente de fortaleza política, pero también establecía límites precisos a su proyecto histórico. El MAS no se proponía expropiar a la burguesía ni destruir el aparato estatal, sino construir un capitalismo nacional con mayor intervención estatal, redistribución parcial de la renta extractiva y ampliación de la participación política de sectores históricamente excluidos.³²

Su base social incorporaba campesinos pobres, indígenas, cocaleros, pequeños productores, trabajadores informales y una fracción de la clase obrera. Sin embargo, su dirección actuaba como factor de moderación, disciplinando a las bases, canalizando las demandas hacia el Estado y evitando que la movilización cuestionara la propiedad privada ni el poder real de la burguesía. Mientras sectores de la COB, la FEJUVE y los mineros discutían sobre organismos de poder propios, el

MAS trabajaba para reconducir el proceso al terreno electoral.

LA NACIONALIZACIÓN Y SUS LÍMITES

La medida más emblemática fue la nacionalización de los hidrocarburos (1 de mayo de 2006). Para millones, aparecía como la concreción de una de las principales reivindicaciones de la Guerra del Gas.³³ Pero su contenido real fue mucho más limitado que su presentación pública. Las principales compañías extranjeras —Petrobras, Repsol, Total y British Gas— continuaron operando. No hubo expropiación general, control obrero ni monopolio estatal efectivo. Cambió fundamentalmente la participación estatal en la renta.³⁴

Lejos de la imagen de una expropiación revolucionaria, el gobierno de Evo Morales negoció y pagó generosas indemnizaciones. Solo en el sector de hidrocarburos, el Estado boliviano se comprometió a pagar al menos 383 millones de dólares a las empresas afectadas. Esto incluyó 112 millones para Petrobras, 240 millones para Transredes y alrededor de 30 millones para Repsol, British Gas y otras compañías.³⁵ A ello se sumaron las compensaciones pagadas en telecomunicaciones y electricidad para evitar litigios internacionales.³⁶

Un gobierno verdaderamente socialista no habría limitado las nacionalizaciones a una mayor participación estatal en la renta ni pagado indemnizaciones millonarias a las transnacionales. Habría expropiado los sectores estratégicos de la economía bajo el control democrático de los trabajadores y las comunidades y utilizado esos recursos para

impulsar la industrialización del país.

LA DEUDA EXTERNA: ¿QUIÉN LA DEBE PAGAR?

La deuda externa boliviana no comenzó con el MAS. Se remonta a los años setenta, cuando las dictaduras militares se endeudaron con el FMI y el Banco Mundial para financiar proyectos que beneficiaron principalmente a empresas constructoras y sectores privilegiados.³⁷

El gobierno del MAS no repudió esa deuda. La renegó y continuó pagando. En 2007, Bolivia pagó 328 millones de dólares solo en concepto de servicio de la deuda externa.³⁸ Aprovechando el ciclo favorable de los precios internacionales, logró acogerse a programas de alivio de la deuda. Sin embargo, la deuda externa no desapareció. Tras las condonaciones obtenidas durante los primeros años del gobierno del MAS, volvió a crecer de manera sostenida. Distintas series estadísticas sitúan la deuda externa boliviana en torno a los 7.000 millones de dólares a mediados de la década de 2000 y por encima de los 16.000 millones en 2023, cambiando además la composición de los acreedores y aumentando el peso de China, los organismos multilaterales y la banca privada.³⁹

Si el MAS hubiera querido realmente sentar las bases de una verdadera soberanía nacional, hubiera impulsado una campaña continental contra el impago de la deuda externa contraída por dictaduras y gobiernos al servicio del capital financiero internacional, por ilegítima y expoliadora.

La autodeterminación nacional no se puede lograr renegociando la relación con el imperialismo ni

sustituyendo unos socios comerciales por otros, sino avanzando hacia una ruptura efectiva con los mecanismos de dependencia económica que subordinan el desarrollo del país a las necesidades del capital extranjero.

EL BOOM ECONÓMICO Y LA NUEVA LEGITIMIDAD

La consolidación del MAS no puede entenderse sin el contexto internacional. Entre 2004 y 2014, América Latina atravesó un ciclo excepcional de crecimiento impulsado por los altos precios de las materias primas y la expansión de la economía china.⁴⁰ Bolivia fue uno de los países más beneficiados.

Las exportaciones de gas natural, minerales y soja llegaron a representar más del 80% de las ventas externas del país. Los ingresos por hidrocarburos aumentaron extraordinariamente; las reservas internacionales alcanzaron niveles históricos y el Estado amplió significativamente su capacidad de intervención económica.⁴¹

Esta expansión permitió financiar políticas redistributivas como el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy.⁴² Entre 2005 y 2014 la pobreza y la pobreza extrema se redujeron significativamente, mientras millones de personas accedían por primera vez a bienes y servicios antes inaccesibles. Amplios sectores indígenas y populares se reconocieron por primera vez como parte constitutiva del Estado boliviano.⁴³

El MAS aparecía así como la fuerza que había derrotado al neoliberalismo, recuperado una parte de la soberanía nacional y ampliado los derechos de sectores históricamente excluidos. Esa

legitimidad fue real. Sin embargo, descansaba sobre bases estructuralmente frágiles: la economía seguía dependiendo de la exportación de materias primas, el empleo informal seguía siendo dominante y la inserción internacional del país permanecía subordinada a las oscilaciones del mercado mundial.⁴⁴

El MAS no eliminó la dependencia; la administró en condiciones favorables. Cuando el ciclo de altos precios comenzó a agotarse, las contradicciones estructurales reaparecieron con mayor agudeza.

LA CONSTITUYENTE, EL PACTO CON LA BURGUESÍA ORIENTAL Y LA INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS

La Asamblea Constituyente mostró los límites estratégicos del proceso. Para millones de trabajadores, campesinos e indígenas, aparecía como la posibilidad de consumir transformaciones largamente esperadas: reforma agraria, recuperación de los recursos naturales, ampliación de los derechos colectivos y democratización del Estado.

En Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, la oligarquía agraria organizó una poderosa ofensiva autonomista destinada a preservar sus privilegios económicos y



políticos. Los prefectos opositores impulsaron referéndums autonómicos, ocuparon dependencias públicas y construyeron estructuras de poder propias.⁴⁵

La Unión Juvenil Cruceñista (UJC), identificada por diversos estudios como el principal grupo de choque de la oligarquía cruceña y el brazo operativo del Comité Pro Santa Cruz, desempeñó un papel central en la escalada de la violencia. Su estrecha relación con dirigentes empresariales como Branko Marinkovic fue ampliamente documentada, así como sus ataques contra campesinos e indígenas identificados con el MAS.⁴⁶ Su expresión más brutal fue la masacre de Porvenir (Pando), donde al menos 15 campesinos fueron asesinados por grupos armados vinculados a la estructura política del prefecto Leopoldo Fernández.⁴⁷

Diversos estudios, documentos oficiales y cables diplomáticos muestran que estos sectores también contaron con el respaldo político e institucional de Estados Unidos. A través de USAID y de la Office of Transition Initiatives (OTI), Washington financió durante años programas de descentralización y fortalecimiento institucional que beneficiaron a prefecturas y gobiernos departamentales vinculados al autonomismo. Asimismo, la National Endowment for Democracy (NED) financió organizaciones civiles, fundaciones y entidades empresariales opositoras al MAS. Entre 2016 y 2019, la NED destinó más de 1,3 millones de dólares a proyectos en Bolivia, incluyendo 118.000 dólares para iniciativas relacionadas con la denominada

“integridad electoral”⁴⁸

Cuando la polarización alcanzó su punto máximo, el gobierno optó por la negociación. El acuerdo de octubre de 2008 entre el MAS y sectores de la oposición implicó la modificación de más de un centenar de artículos del texto constituyente originalmente aprobado. Los límites a la gran propiedad rural no se aplicaron retroactivamente, mientras las transnacionales continuaban operando y la banca permanecía en manos privadas.⁴⁹

La refundación prometida terminó convirtiéndose en una reforma profunda del régimen, no en una revolución social. Desde una perspectiva marxista, la Constituyente cerró definitivamente la posibilidad de que el ascenso abierto entre 2000 y 2005 desembocara en una ruptura anticapitalista.⁵⁰

LA INTEGRACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES AL ESTADO

La principal operación política del MAS no fue económica sino estatal. Durante el ciclo revolucionario, gran parte de la fuerza del movimiento popular había residido en la autonomía de sus organizaciones: la COB, la FEJUVE, los sindicatos mineros, las organizaciones campesinas y diversas coordinadoras territoriales actuaban como organismos independientes del Estado y, en determinados momentos, como embriones de poder alternativo.⁵¹

A diferencia de los gobiernos neoliberales, el MAS no intentó derrotar frontalmente a estas organizaciones sino integrarlas al aparato estatal. Numerosos dirigentes campesinos, sindicales, indígenas y vecinales fueron

incorporados al Parlamento, a ministerios y organismos públicos. El caso más emblemático fue Abel Mamani, dirigente de la FEJUVE de El Alto y figura de la lucha contra la privatización del agua, quien pasó a ocupar el Ministerio del Agua.⁵²

Las grandes organizaciones campesinas —CSUTCB, Bartolinas y federaciones cocaleras— pasaron a desempeñar un papel central en el nuevo bloque gobernante. La COB se convirtió en terreno de disputa, donde el MAS impulsó dirigentes afines para ampliar su influencia.⁵³

El resultado fue una creciente subordinación de las direcciones sociales a mecanismos estatales de mediación, negociación y gestión, reduciendo parcialmente la autonomía que había caracterizado al ascenso revolucionario.⁵⁴

EL DISCIPLINAMIENTO DE LA COB Y LA FRACTURA DEL MOVIMIENTO INDÍGENA

La integración al Estado no fue pacífica ni voluntaria para todos. La COB, que entre 2003 y 2005 había sido uno de los ejes de la insurrección, mantuvo una relación fluctuante con el gobierno. En mayo de 2013, una huelga general de seis días que exigía el aumento de las jubilaciones al 100% del salario fue respondida por Morales con un ultimátum. El presidente calificó la protesta de “conspiración derechista” e “intento golpista” y acusó a los dirigentes de la COB de ser “instrumentos del imperio”.⁵⁵

El conflicto más importante se produjo en junio de 2016. La COB convocó una huelga general contra el cierre de la textil estatal Enatex, que dejó a más de 800 trabajadores en la calle. El gobierno declaró la huelga ilegal, amenazó con

sanciones y se negó a reincorporar a los despedidos.⁵⁶ La represión dejó al menos nueve heridos y 29 detenidos, mientras la COB denunciaba la brutalidad policial.⁵⁷

La COB no fue derrotada militarmente, como en los años ochenta. Primero el gobierno del MAS intentó administrarla, dividirla y, cuando se rebeló, criminalizarla. Un gobierno orientado por los intereses de los trabajadores habría respondido al cierre de Enatex mediante mecanismos de control y de gestión obrera. El MAS, por el contrario, actuó dentro de los límites de la lógica capitalista que pretendía cuestionar.

El movimiento indígena también se fracturó. Mientras las federaciones cocaleras y la CSUTCB se integraban al bloque gobernante, organizaciones como el CONAMAQ mantuvieron posiciones independientes y denunciaron el carácter extractivista del proyecto oficial.

La Constitución de 2009 representó una conquista histórica al reconocer el carácter plurinacional del Estado boliviano. Sin embargo, ese reconocimiento convivió con la expansión de

proyectos extractivos, conflictos territoriales y concesiones a empresas mineras y energéticas. El conflicto del Tipnis (2011-2012), en el que el gobierno impulsó una carretera a través de una reserva indígena sin consulta previa, mostró con claridad estas contradicciones. Las marchas indígenas fueron reprimidas y sus dirigentes acusados de actuar al servicio de la derecha.⁵⁸

EL GOLPE EN 2019

La crisis autonomista de 2008 anticipó muchos de los elementos que reaparecerían durante el golpe de Estado de 2019. La oposición de la Media Luna respondió a los intereses de las oligarquías agrarias y empresariales del Oriente boliviano, pero también recibió respaldo político e institucional de Estados Unidos. Según investigaciones de Jeremy Bigwood, Eva Golinger y diversos estudios posteriores, USAID invirtió más de 97 millones de dólares en programas de descentralización y autonomía regional desde 2002, además de otros 13,3 millones de dólares administrados por la OTI. Estos recursos fortalecieron

institucionalmente a los gobiernos departamentales que encabezaron la ofensiva autonomista contra el gobierno central.⁴⁸

La intervención estadounidense no adoptó la forma de una dirección directa de la oposición, pero sí fortaleció, en los ámbitos político e institucional, a sectores que buscaban limitar las reformas impulsadas por el gobierno. Las tensiones alcanzaron su punto máximo con la expulsión del embajador Philip Goldberg en septiembre de 2008. Documentos oficiales publicados por el gobierno boliviano denunciaron además la existencia de redes de inteligencia financiadas por Estados Unidos dentro de la policía y actividades de espionaje desarrolladas por la DEA.⁵⁹

Sin embargo, la principal debilidad del gobierno no residía únicamente en la presión de la derecha o del imperialismo, sino en la forma en que decidió enfrentarlos. Aunque logró derrotar políticamente a los sectores más agresivos de la Media Luna, el MAS evitó impulsar organismos permanentes de autodefensa y de poder popular. Las organizaciones obreras,



campesinas e indígenas fueron movilizadas para respaldar al gobierno, pero no para construir una fuerza independiente capaz de enfrentar a la reacción.

Esta orientación reapareció durante el golpe de Estado de 2019, que triunfó inicialmente pero no logró estabilizar el régimen y acabó derrotado. Frente a los motines policiales, la presión de las Fuerzas Armadas y la ofensiva encabezada por Camacho, Morales volvió a confiar en las instituciones estatales y en la negociación política. Como señaló la LIT-CI, existían amplias bases sociales para resistir, pero ello habría exigido movilizar y armar a los trabajadores y campesinos, lo cual resultaba incompatible con toda la estrategia del MAS. La dirección del gobierno optó por evitar una confrontación abierta con el aparato estatal y terminó aceptando una salida que facilitó el triunfo inmediato del golpe.⁶⁰

La crisis de 2019 mostró así los límites de una estrategia que buscó contener a la reacción sin romper con las instituciones fundamentales del Estado burgués. El golpe logró derrocar al gobierno de Morales e imponer un régimen reaccionario, apoyado por las Fuerzas Armadas y la policía. Sin embargo, ese triunfo fue parcial y transitorio. La resistencia popular, los bloqueos y la derrota electoral de la derecha en 2020 impidieron que el nuevo régimen se consolidara estratégicamente.⁶¹

EL LITIO: ENTRE LA PROMESA INDUSTRIAL Y LA NUEVA DEPENDENCIA

La contradicción más cruda se reveló en la política del litio. Bolivia posee alrededor de 21 millones de toneladas de recursos de litio, según estimaciones del

USGS, pero el MAS no logró industrializarlas de forma soberana.⁶²

El primer gran acuerdo llegó en febrero de 2019, cuando Evo Morales firmó un convenio con el consorcio chino Xinjiang TBEA Group-Baocheng para explotar los salares de Coipasa y Pastos Grandes, con una inversión prevista de 2.390 millones de dólares. A la convocatoria se presentaron empresas rusas, chinas y europeas, resultando seleccionadas las compañías chinas.⁶³

El gobierno de Luis Arce profundizó en esta orientación. En enero de 2023, YLB firmó un acuerdo con el consorcio chino CBC, dominado por CATL, la mayor fabricante mundial de baterías de litio, para invertir más de 1.000 millones de dólares en los salares de Uyuni y Coipasa.⁶⁴

El trasfondo es la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos. El llamado triángulo del litio —Argentina, Bolivia y Chile— concentra más de la mitad de las reservas mundiales. Mientras China avanzó agresivamente en la región, sectores estratégicos estadounidenses comenzaron a expresar preocupación por la pérdida de influencia sobre un recurso considerado fundamental para la transición energética.⁶⁵

El resultado no ha sido una industrialización soberana sino una nueva forma de dependencia. El Estado boliviano aporta los recursos naturales, mientras que las empresas extranjeras controlan la tecnología, el financiamiento y buena parte de las cadenas de valor. El litio resume una de las contradicciones centrales del proceso: el MAS no rompió con la dependencia sino que la renegoció bajo nuevas condiciones.

CONCLUSIÓN: LAS LECCIONES ESTRATÉGICAS DE LA EXPERIENCIA BOLIVIANA

Entre 2000 y 2005, trabajadores, campesinos e indígenas protagonizaron un ascenso revolucionario que puso en cuestión la continuidad del régimen neoliberal y abrió una auténtica crisis de poder. El proceso chocó con un límite decisivo: la ausencia de una dirección revolucionaria capaz de centralizar la movilización y transformarla en una lucha consciente por el poder.

El MAS ocupó ese vacío. La principal fuerza política surgida del ascenso popular terminó por convertirse en el principal mecanismo de adaptación de dicho ascenso al Estado burgués. Nacido de las luchas populares, logró expresar las aspiraciones legítimas de millones de trabajadores, campesinos e indígenas. Pero su proyecto no consistía en desarrollar la revolución sino en canalizarla hacia la institucionalidad burguesa y reconstruir la estabilidad del régimen.

La llegada de Morales permitió estabilizar una situación que la burguesía ya no podía controlar por sus propios medios. El nuevo régimen incorporó demandas democráticas históricamente postergadas, amplió derechos y mejoró las condiciones de vida de amplios sectores populares, lo que le valió una legitimidad real. Precisamente por ello pudo desempeñar una función que los antiguos partidos neoliberales ya no estaban en condiciones de cumplir: recomponer la autoridad estatal y reorganizar la dominación de las clases propietarias sobre nuevas bases sociales.

La burguesía boliviana no logró derrotar la insurrección mediante una contrarrevolución clásica. Recurrió a una salida política y encontró en el MAS un instrumento eficaz para desviar y contener el ascenso popular. Como volvería a evidenciarse en 2019, la estrategia del MAS consistió en apoyarse en las masas sin desarrollar organismos independientes de poder y de autodefensa capaces de enfrentar al Estado cuando este se volvió contra el propio gobierno.

La revolución boliviana no fue derrotada únicamente por la fuerza de sus adversarios. También encontró un límite en una dirección reformista que rechazaba sistemáticamente la ruptura revolucionaria con el capitalismo. Ésta es la principal lección estratégica del período.

Reconocer los límites del reformismo no implica negar las conquistas parciales logradas durante los años del MAS. Significa comprender que, sin una dirección independiente de la clase trabajadora, esas conquistas permanecen subordinadas a las necesidades de reproducción del sistema y pueden revertirse. La experiencia boliviana demuestra así no los límites de la revolución, sino los límites históricos de la adaptación al Estado burgués.

La cuestión pendiente no es explicar por qué fracasó la revolución boliviana, sino cómo construir la dirección política capaz de llevar hasta el final los procesos que puedan reabrirse en el futuro. Las condiciones objetivas para una transformación revolucionaria emergieron con fuerza entre 2000 y 2005. Lo que faltó fue una estrategia y una conducción capaces de convertirlas en una alternativa

consciente de poder. ■

NOTAS

¹ INE Bolivia / UN Data: población 2003 = 9.050.700 habitantes; CEDLA, informes 2000-2005.

² Jeffery R. Webber, **Red October: Left-Indigenous Struggles in Modern Bolivia**; Forrest Hylton y Sinclair Thomson, **Revolutionary Horizons: Past and Present in Bolivian Politics**.

³ LIT-CI, “Cumbre de las Américas”; Claudio Katz, **América Latina frente a la crisis global**.

⁴ Gerry Foley, “Bolivian Protests Reflect Growing Discontent all Over Latin America”, **Socialist Action**, 2000.

⁵ Raquel Gutiérrez Aguilar, **Los ritmos del Pachakuti**.

⁶ LIT-CI, “La Guerra del Agua y el comienzo de una nueva etapa”, 2000.

⁷ Pablo Mamani Ramírez, **El rugir de las multitudes**.

⁸ Carlos Villegas Quiroga, **La caída de Gonzalo Sánchez de Lozada**; Jeffery R. Webber, **Red October**.

⁹ Gerry Foley, “Bolivia Re-Ignites Beacon for Latin American Struggle”, 2005; Sian Lazar, **El Alto, Rebel City**.

¹⁰ Gerry Foley, 2005; CEDLA, informes sobre empleo e informalidad urbana, 2000-2005.

¹¹ Gerry Foley, 2005; Pablo Mamani Ramírez, **Microgobiernos barriales**, 2005.

¹² Jeffery R. Webber, **Red October**; Guillermo Lora, artículos en **Masas**.

¹³ Forrest Hylton y Sinclair Thomson, **Revolutionary Horizons**; Gerry Foley, “Bolivian Crisis Ends in Uneasy Truce”, 2005.

¹⁴ Defensoría del Pueblo de Bolivia, **Informe sobre los sucesos de septiembre-octubre de 2003**; Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), **Informe sobre Bolivia 2003-2004**; Human Rights Watch, **World Report 2004: Bolivia**.

¹⁵ Jeffery R. Webber, **Red October**; Forrest Hylton y Sinclair Thomson, “The Chequered Rainbow”, **New Left Review**, n° 35, 2005.

¹⁶ Gerry Foley, “Bolivian Crisis Ends in Uneasy Truce”, 2005; “Bolivia Re-Ignites Beacon for Latin American Struggle”, 2005.

¹⁷ Jeffery R. Webber, **Red October**; Pablo Mamani Ramírez, **El rugir de las multitudes**.

¹⁸ Pablo Mamani Ramírez, **El rugir de las multitudes**; Forrest Hylton y Sinclair Thomson, **Revolutionary Horizons**.

¹⁹ Guillermo Lora, artículos en **Masas**; LIT-CI, “Bolivia: las lecciones de Octubre”, 2004.

²⁰ Gerry Foley, “Bolivia Re-Ignites Beacon for Latin American Struggle”, 2005; Pablo Mamani Ramírez, **Microgobiernos barriales**.

²¹ Jeffery R. Webber, **Red October**; Forrest Hylton y Sinclair Thomson, **Revolutionary Horizons**; Roberto Laserna, CERES. Defensoría del Pueblo de Bolivia, **Informe sobre los sucesos de septiembre-octubre de 2003**; Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), **Informe sobre Bolivia 2003-2004**; Human Rights Watch, **World Report 2004: Bolivia**.

²² Gerry Foley, “Bolivian Crisis Ends in Uneasy Truce”, 2005.

²³ COB, declaraciones de mayo-junio de 2005; Gerry Foley, “Bolivian Crisis Ends in Uneasy

Truce”, 2005.

²⁴ Jeffery R. Webber, **Red October**; Guillermo Lora, artículos sobre la crisis de 2005.

²⁵ Gerry Foley, 2005; LIT-CI, “Bolivia: la salida electoral”, 2005.

²⁶ Jeffery R. Webber, **From Rebellion to Reform in Bolivia**; Hervé Do Alto y Pablo Stefanoni, **La revolución de Evo Morales**.

²⁷ Hervé Do Alto y Pablo Stefanoni, **La revolución de Evo Morales**; Fernando Molina, estudios sobre el origen organizativo del MAS-IPSP.

²⁸ Marta Harnecker, **Un mundo a construir (nuevos caminos)** (Madrid: El Viejo Topo, 2005), entrevista a Evo Morales realizada en 2003.

²⁹ Álvaro García Linera, “El capitalismo andino-amazónico”, artículos y conferencias publicados entre 2005 y 2006; Álvaro García Linera, **La potencia plebeya** (Buenos Aires: CLACSO/Prometeo, 2008).

³⁰ Hervé Do Alto y Pablo Stefanoni, **La revolución de Evo Morales**; Kathryn Ledebur, **Coca and Democracy in Bolivia**.

³¹ Álvaro García Linera, **Sociología de los movimientos sociales en Bolivia**.

³² LIT-CI, “¿Qué pasa en el MAS?”; Jeffery R. Webber, **From Rebellion to Reform in Bolivia**.

³³ Decreto Supremo 28701, 1 de mayo de 2006.

³⁴ Jeffery R. Webber, **From Rebellion to Reform in Bolivia**; Gerry Foley, “Bolivia Remains a Powder Keg Following the Election of Morales”, 2006.

³⁵ **Los Tiempos**; **Latin American Newsletters**; Fundación Pueblo, “La Factura de las Nacionalizaciones de Evo”, 2008.

³⁶ **Infobae**, “Cronología de las estatizaciones de Morales”, 2013.

³⁷ **Le Monde Diplomatique**,

“Bolivia: la deuda eterna”; CEPAL, estudios históricos.

³⁸ Banco Central de Bolivia, **Memoria 2007**.

³⁹ **Macrotrends**, Bolivia External Debt Stock; Banco Central de Bolivia, estadísticas de deuda externa pública.

⁴⁰ CEPAL, **Balance Preliminar de las Economías de América Latina**, varios años.

⁴¹ Banco Central de Bolivia, informes económicos 2006-2014.

⁴² Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, informes sociales 2007-2014.

⁴³ CEPAL, **Panorama Social de América Latina**; Sinclair Thomson, “The Politics of Tiwanaku”, **NACLA Report on the Americas**, 2006.

⁴⁴ CEDLA, informes sobre empleo e informalidad urbana, 2008-2015.

⁴⁵ Luis Tapia, **El Estado de derecho como tiranía**.

⁴⁶ UNDP Bolivia, **Cuaderno de Futuro No. 26**; Naomi Klein, **Open Letter to the U.S. State Department Regarding Recent Violence in Bolivia** (2008); **Reuters**; UNASUR, **Informe sobre la Masacre de Pando** (2008); Human Rights Watch, informes sobre Bolivia 2008.

⁴⁷ UNASUR, **Informe sobre la Masacre de Pando** (2008); Human Rights Watch, informes sobre Bolivia (2008).

⁴⁸ NED Grant Database; **NACLA**, **USAID's Silent Invasion in Bolivia** (2009); Jeremy Bigwood y Eva Golinger, investigaciones sobre USAID y Bolivia.

⁴⁹ Salvador Schavelzon, **El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia**; Fundación Tierra, informes 2008-2010.

⁵⁰ LIT-CI, “¿Qué pasa en el MAS de Bolivia?”

⁵¹ Pablo Mamani Ramírez, **El**

rugir de las multitudes; Jeffery R. Webber, **Red October**.

⁵² Gerry Foley, “Bolivia Remains a Powder Keg Following the Election of Morales”, 2006.

⁵³ Álvaro García Linera, **Sociología de los movimientos sociales en Bolivia**; Gerry Foley, “Bolivia: The Cockpit of the Radicalization in Latin America”, 2006.

⁵⁴ Gerry Foley, “Bolivia: The Cockpit of the Radicalization in Latin America”, 2006.

⁵⁵ **Página/12**, 15 de mayo de 2013; **Granma**, 20 de mayo de 2013.

⁵⁶ **Infobae**, 19 de junio de 2016; **Opinión Bolivia**, 18 de junio de 2016.

⁵⁷ **Agencia IP**, junio de 2016.

⁵⁸ LIT-CI, documentos sobre el Tipnis; prensa internacional, 2011-2012.

⁵⁹ Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, **Documentos Desclasificados de Estados Unidos sobre Bolivia**; **The Guardian**, 11 de septiembre de 2008.

⁶⁰ LIT-CI, **Declaración sobre la crisis política en Bolivia**, 11 de noviembre de 2019.

⁶¹ Lucha Socialista-Bolivia, **Bolivia: Contundente triunfo contra el golpe**, 20 de octubre de 2020.

⁶² USGS; **BBC News Brasil**, “A disputa entre China e EUA por litio”, 2023.

⁶³ **La Razón**, febrero de 2019; **El Deber**, “Litio: 17 años de promesas”.

⁶⁴ **AP News**, 19 de enero de 2023.

⁶⁵ **BBC News Brasil**, 2023; testimonio de la general Laura Richardson ante el Congreso de Estados Unidos.

BOLIVIA, UNA REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA EN CURSO (2003)

CORREO INTERNACIONAL, N. 102,
OCTUBRE 2003

El viernes 17 de octubre, después de casi 3 semanas de la Huelga General Indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) y con más de 80 muertos y 400 heridos por la represión militar, finalmente, alrededor de las 16:00 de la tarde, Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) anunciaba oficialmente su renuncia a la presidencia de Bolivia, para luego, salir huyendo del país con rumbo a Miami. De esa manera los trabajadores bolivianos desataron una triunfante insurrección, que propinaba una nueva y contundente derrota al imperialismo al derribar un gobierno aplicador de sus políticas.

Las masas trabajadoras bolivianas derrotaron los planes del imperialismo de saquear las reservas de gas natural, una de las más grandes del continente. Sánchez de Lozada había comprometido su venta a transnacionales norteamericanas, para exportarlo por puertos chilenos hasta EE.UU. La inicial demanda del pueblo trabajador de nacionalizar el gas de manos de las transnacionales, terminó pidiendo la cabeza de Goni, pues en cuestión de días comprendieron que no se podía recuperar el gas con un gobierno servil de las transnacionales. Lo ocurrido en Bolivia, es un ejemplo de cómo se puede derrotar los planes de pillaje del imperialismo, como el ALCA, y que esta lucha está indisolublemente unida a la lucha por tirar abajo a los gobiernos aplicadores de la política de recolonización del FMI. La triunfante insurrección boliviana comparte la misma causa y tiene el mismo contenido de las revoluciones desatadas en Ecuador, Venezuela, Argentina: la lucha por derrotar el pillaje y saqueo de la recolonización imperialista en nuestro continente.

La revolución boliviana, contestó con hechos, a una serie de polémicas en la vanguardia

latinoamericana y mundial: sobre el papel de la clase obrera como sujeto social de la lucha contra la barbarie capitalista, sobre la necesidad de luchar por el poder, de construir una dirección revolucionaria y demostró la posibilidad real de derrotar al imperialismo con la movilización.

Sin embargo, desde el inicio de la huelga general y luego de la caída de Goni, la prensa internacional y las direcciones conciliadoras, intentan minimizar la realidad detrás de una cortina de confusiones, argumentando que esta insurrección tuvo un contenido indígena, campesino y popular, en la cual la clase obrera habría jugado un papel suplementario; que no habrían surgido organismos de poder de los trabajadores; llegando incluso a sostener que en realidad en Bolivia no hubo ni hay una revolución en curso y sólo se trató de una movilización nacional contra la venta del gas por Chile. Todos estos argumentos pretenden negar que en Bolivia las condiciones para disputar el poder a la burguesía no estaban ni están dadas.

Por eso es imprescindible examinar a fondo los hechos arrojados por la revolución boliviana, y a partir de ellos sacar las conclusiones sobre cuáles son las tareas urgentes que permitan a las masas avanzar a un triunfo definitivo, capaz de cambiar radicalmente su actual situación de miseria en la que se debaten y que puede cambiar la historia de todo el continente latinoamericano.

EL CARÁCTER OBRERO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA

Es cierto que Bolivia es un país mayoritariamente campesino, cerca del 50% de la población vive en el campo; que existen más de 30 pueblos originarios de los cuales los quechuas y aymaras son mayoría



nacional y que sus reivindicaciones y luchas son un componente fundamental de la revolución. Pero lo que realmente sucedió en septiembre-octubre, no fue una insurrección indígena y campesina, sino ante todo fue una revolución obrera, campesina y popular, en la que participaron activamente todos los sectores empobrecidos (campesinos, estudiantes, desempleados, clases medias). La vanguardia y dirección de este proceso fue la clase obrera, que participó bajo la dirección de su histórica Central Obrera Boliviana (COB) en torno a la cual se agruparon los sectores más combativos como las juntas vecinales de la ciudad de El Alto. Pero, además de El Alto, la clase obrera lideró el proceso, con sus destacamentos de mineros, que arribaron hasta la ciudad de La Paz armados de dinamitas, y, tanto en La Paz como en el resto del país (en especial Oruro, Potosí, Cochabamba), fueron trabajadores asalariados a través de sus Centrales Obreras

Departamentales (COD) los que profundizaron la Huelga General, durante la última semana.

El rol protagónico de los trabajadores en el proceso boliviano, no es un hecho que cayó del cielo, es la continuidad de un formidable ascenso revolucionario que se abrió en Bolivia desde abril del 2000. Si bien, después de la derrota de los mineros en 1985, era el movimiento campesino, y particularmente los cocaleros del Chapare, los que encabezaron las luchas, la clase obrera empezó a anunciar su ingreso al combate en la insurrección de Cochabamba que expulsó a una transnacional del servicio de agua potable, en abril del 2000. En Cochabamba se unificó la movilización urbana y rural bajo la dirección de “la coordinadora del agua”, compuesta por la Central Obrera Departamental, sindicatos fabriles y agrarios.

A partir de entonces la situación boliviana nunca más

volvió a ser la misma, las masas habían abierto una etapa revolucionaria en una dinámica de confluencia de las luchas obreras y campesinas. El movimiento obrero, pese a las direcciones, tomó cada vez más parte activa y empalmaba sus luchas con los campesinos. Primero fueron los jubilados que arrancaron a Banzer un aumento del 100% de sus rentas, luego los maestros y trabajadores de salud frenando los intentos de privatización de estos servicios y arrancando mejoras salariales, y el triunfo más categórico fue el de los mineros de Huanuni que en pleno proceso electoral del 2002 mediante una movilización contundente lograron la re-estatización de su empresa, privatizada por Banzer.

Y esta dinámica no se detuvo, sino que se expresó electoralmente el 30 de junio del 2002, en la votación hacia el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y el Movimiento Indígena Pachakutec (MIP) de Felipe Quispe, que no fue sólo campesina sino que tuvo un gran componente urbano. Y después, pese a la tregua otorgada al gobierno de Goni, por las direcciones, en los primeros meses de su gestión, la situación llegó a desencadenar una primera insurrección urbana triunfante el 12 y 13 de febrero, que hirió de muerte al gobierno.

Con febrero, las condiciones para echar abajo al gobierno se agudizaron y en ese curso, la clase obrera había emprendido la tarea de recuperar la COB de manos de la dirección pro-gobiernista, tarea plasmada en su XIII Congreso de agosto de este año, paso decisivo que determinó que dicha central cumpliera el rol dirigente

centralizador y unificador de las luchas insurreccionales de octubre.

Y fue este organismo reunido en ampliado nacional quien llamó a la Huelga General Indefinida con el pedido central de la renuncia de Sánchez de Lozada del gobierno.

¿POR QUÉ LOS TRABAJADORES NO TOMARON EL PODER?

El 17 de octubre por la noche, cuando el ampliado nacional de la COB, debatía su posición ante la renuncia oficial de Sánchez de Lozada, el principal Ejecutivo, Jaime Solares, anunció al plenario que había recibido la llamada del entonces Vicepresidente Carlos Mesa, pidiéndole por favor instruya a sus bases que cercaban la plaza Murillo y el palacio de gobierno, se replieguen para que pueda ingresar al Congreso a jurar como presidente. Este hecho, grafica con sencillez el poder que concentraban las masas en lucha a la cabeza de la COB. La pregunta que surge: ¿por qué con tanta fuerza los trabajadores no terminaron en el poder?

En ese ampliado y luego al momento de levantar la Huelga General, los dirigentes pretextaban centralmente que no se disponía de armamento. Pero no dijeron la falla fundamental, es decir, el hecho que al momento de iniciar la Huelga y durante la misma, no hubo un sólo dirigente que planteara que el objetivo era la toma del poder. Ya en el inicio de la movilización, cuando la dirección de la COB, correctamente enarbó la consigna de renuncia de Goni, la huelga fue conducida contra una alternativa de gobierno obrero campesino, al plantear que después de Goni el nuevo gobierno debía



surgir en el marco de la constitución burguesa. Fue más lamentable el rol de la dirección del MAS y Evo, quien en principio no se sumó decididamente al conflicto por considerar que la demanda política ponía en riesgo la democracia y luego cuando se plegó por la presión de la movilización, fue el primero en proponer la continuidad constitucional con Carlos Mesa presidente. Igual de nefasto ha sido el rol del POR (Partido Obrero Revolucionario de Guillermo Lora), que desde la federación de maestros de La Paz, de la cual es dirección, ni siquiera se planteó el problema del poder, sino que suspendió la huelga magisterial a los dos días de iniciarla.

Entonces si los trabajadores no tomaron el poder, no fue por falta de combatividad ni de organización, que la demostraron de sobra, sino por la política de los principales dirigentes que entregaron el poder a la burguesía y el imperialismo.

LA COB ORGANISMO DE PODER

La Central Obrera Boliviana, surgida con la revolución de 1952, agrupa en su seno no sólo a los obreros asalariados, sino que de ella también son parte los campesinos, los estudiantes, los pequeños comerciantes, artesanos, artistas y muchos otros sectores populares. Se puede decir que es una "central pueblo". La COB ha jugado desde 1952 un papel de

doble poder en varios períodos de las luchas, como en 1971 bajo el gobierno de Torres; fue actor central en el derrocamiento de las dictaduras, y entre 1982 y 1985, era el doble poder opuesto al gobierno de Frente Popular de Hernán Siles Zuazo.

El carácter de organismo de poder de los trabajadores, fue continuamente negado y ocultado en décadas por la dirección de Lechín, el Partido Comunista y el Partido Obrero Revolucionario (POR) de Lora, sosteniendo que un sindicato no puede tomar el poder, sin ver que la COB es más que un sindicato. Con esa orientación posibilitaron la derrota de los mineros y la revolución boliviana en 1985, abrieron el camino a la burguesía y el imperialismo para arremeter en una ofensiva de recolonización contra las masas, implementadas con las políticas neoliberales a lo largo de la década de los '90, y que le costó a los trabajadores el despido de más de 30 mil mineros y las privatizaciones.

En los años de ofensiva neoliberal, la COB fue copada por direcciones pro-burguesas, que se dieron a la tarea de destruirla hasta casi hacerla desaparecer de escena. Pero el ingreso de la clase obrera urbana, en el ascenso de las luchas, planteó objetivamente su recuperación. Después del 12 y 13 de febrero, al interior de las organizaciones sindicales se abrió un proceso de recambio de direcciones, iniciada en marzo por los mineros que removieron a sus dirigentes oficialistas, similar actitud fue seguida por los fabriles en su confederación nacional, un proceso que desembocó en el Congreso de la COB de Oruro, en

julio-agosto de este año, cuando se derrotó a los dirigentes ligados al gobierno, para empezar a recuperar su papel histórico.

Y cuando los trabajadores con gran esfuerzo, han avanzado en la tarea de recuperar su COB, vuelven a surgir nuevamente los Lechines del pasado, que con uno y otro argumento niegan que la COB pueda ser un órgano para la toma del poder. Cuando fue ésta la que convocó a la Huelga General por la caída de Goni, y por su convocatoria se movilizaron incluso sectores que no están afiliados, como las juntas vecinales, pero que en el último ampliado nacional pidieron ser parte de la COB.

Distintas organizaciones se obstinan en señalar que la revolución boliviana de octubre no dio órganos de poder, porque no surgieron los Soviets. Creemos que es un grave error ya que no comprenden que en Bolivia a diferencia de otras revoluciones el órgano de poder es una Central Obrera que unifica a todos los sectores en lucha.

Es cierto que la COB necesita seguir fortaleciéndose, pero eso no niega que hoy es el organismo de doble poder que se dotó la revolución boliviana.

CARLOS MESA: UN GOBIERNO DÉBIL SOSTENIDO POR LAS DIRECCIONES

El gobierno de Carlos Mesa, es un gobierno producto de una insurrección victoriosa y por eso más débil que el anterior. Un gobierno kerenskista. Es consecuencia, además, de la política de sucesión constitucional levantada por las principales

direcciones. En esa línea es comprensible que la primera actitud que tuvieron es darle tregua y respaldo expresados en declaraciones como las de Evo Morales que “confiaba en que el nuevo presidente rompa con el neoliberalismo y modifique varias leyes que sustentan al modelo” o las del diputado del MIP Juan Gabriel Bautista que declaró “No es momento de amenazas ni de dar plazos al presidente Carlos Mesa, porque el país necesita un respiro, necesita un tiempo (...) Dejémoslo trabajar, yo diría que todos los parlamentarios, todos los dirigentes estamos en la obligación de dar un hombro, una manito” (Econoticias, 24/10/03). En tanto que la dirección de la COB, resolvió hacer un repliegue estratégico, para empezar la negociación del pliego de los trabajadores.

Estas actitudes no hacen más que darle un salvavidas a un gobierno que a pesar de su debilidad se mantiene fiel a los designios del imperialismo. Ya declaró que “no se apartará ni un milímetro de la línea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y dará continuidad a las políticas económicas y fiscales emprendidas por su antecesor” (Econoticias, 21/10/03). Por eso es incorrecto que las direcciones le otorguen tregua, ni menos cifrar esperanzas en un gobierno burgués pro imperialista. Todo lo contrario, no se debe dar ¡ninguna confianza ni apoyo a este gobierno!

LA TRAMPA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

La preocupación central de la burguesía y el imperialismo, es cómo desmontar el proceso revolucionario y reconstruir el

poder y el régimen burgués, hoy en ruinas. Para ello el gobierno de Mesa intenta apelar a lo que llamamos “reacción democrática” con la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Es decir, sacar a los trabajadores bolivianos de su lucha y movilización por un cambio de fondo, para meterlo en la trampa de los mecanismos electorales e institucionales burgueses, con el engaño de que en ella se va a discutir todo. Ya en la denominada Cumbre Social Alternativa realizada recientemente en Santa Cruz, ante la exigencia de amplios sectores populares ahí reunidos, para que el gobierno procediera a la abrogación de leyes entreguistas como la de hidrocarburos y las de privatizaciones, respondió categóricamente que eso se discutiría en esa instancia democrático burguesa.

Lo grave es que esta salida está siendo apoyada con fuerza por el dirigente Evo Morales, uno de los principales referentes políticos del pueblo boliviano. Y, lamentablemente, esta misma política es defendida por la casi totalidad de las corrientes latinoamericanas que se reivindican trotskistas y revolucionarias. Todos ellos plantean que ante la crisis de las instituciones burguesas la principal tarea es llamar a votar para una Asamblea Constituyente, maquillada por algunos con los apelativos de “revolucionaria” o “popular”.

Todos ellos plantean que ante la crisis de las instituciones burguesas la principal tarea es llamar a votar para una Asamblea Constituyente. La revolución boliviana, como ya hizo la

argentina, vuelve a mostrar el deterioro programático en el que han caído gran parte de las organizaciones que se reivindican del trotskismo. En medio de profundos procesos revolucionarios, sólo ven salidas por dentro del régimen democrático burgués.

Nosotros, por el contrario, opinamos que hay que hacer lo opuesto. La salida para la crisis en el país no está en los marcos de la democracia burguesa, sino en la lucha consecuente por una alternativa obrera, campesina y popular. Salida que la revolución ha mostrado creando una situación de doble poder con la COB a la cabeza. Por esto la tarea central es impulsar el fortalecimiento de este organismo que se contraponga realmente a la Constituyente burguesa y haga posible el triunfo del poder de los trabajadores.

POR GAS, TRABAJO Y TIERRA ¡PREPARAR LA TOMA DEL PODER POR LA COB!

Con la caída de Goni, se abre una nueva fase de la revolución boliviana: la lucha por el poder obrero campesino y popular y el socialismo. A pesar de la política conciliadora de los dirigentes y la tregua de 90 días que otorgaron a Mesa, el nuevo gobierno no puede, ni podrá resolver ninguna de las demandas de los trabajadores. No se abrogó ni la ley del Código tributario, ni la de seguridad ciudadana que atenta contra las luchas. Ni tan siquiera se indemniza a los familiares de muertos y heridos. Y de contrapartida, las masas se sienten victoriosas, y en el campo, aún en contra de sus direcciones, han empezado a tomar tierras de las

haciendas; en las ciudades y las minas la gente empieza a discutir la necesidad de tomar las minas de Goni, de intervenir las empresas de servicios eléctricos y de agua, para resolver ya sus problemas. Y lo más probable es que a corto plazo se vuelvan a dar duros enfrentamientos.

BOLIVIA, ABRIL DE 1952: LA REVOLUCIÓN OBRERA QUE PUDO CAMBIAR AMÉRICA LATINA

(Y LAS LECCIONES POLÍTICAS DE UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PERDIDA)

FLORENCE OPPEN

¿POR QUÉ ESTALLÓ LA REVOLUCIÓN EN BOLIVIA?

La combinación de factores que hizo posible la insurrección

La insurrección del 9 de abril de 1952 fue una revolución de masas liderada por mineros, obreros fabriles y sectores urbanos empobrecidos. Este movimiento desmanteló al ejército, organizó milicias propias y estableció un poder obrero de facto. Tras la Revolución Rusa de 1917, es el ejemplo más cercano a un levantamiento proletario clásico en el hemisferio. La comparación con Rusia se fundamenta en dinámicas de clase similares, en un desarrollo desigual y combinado, y en la presencia de un partido revolucionario, el Partido Obrero Revolucionario (POR), con influencia en el proletariado industrial. Bolivia no fue una excepción en Latinoamérica; la teoría de la revolución permanente de Trotsky sostenía que las condiciones para una revolución proletaria podían surgir en varios países "atrasados" del continente. Sin embargo, en Bolivia, antes que en otros lugares, se alinearon factores específicos que la hicieron posible. ¿Cuáles fueron?

Un proletariado minero concentrado

La importancia histórica del proletariado minero no radicaba en su peso numérico, sino en su posición estratégica. Como subraya el historiador Sándor John, la minería del estaño ocupaba un lugar central en la economía nacional y otorgaba a los trabajadores un "peso específico" muy superior a su número¹. Frente a una masa campesina atrasada y dispersa (72% de la población activa), el proletariado minero era

minúsculo: apenas 50 mil trabajadores, el 2% de la fuerza laboral y el 1,8% de la población total². Pero esa minoría estaba concentrada en los grandes complejos de Siglo XX, Catavi y Huanuni, manejaba la dinamita, controlaba el 80% de las exportaciones y producía el 25% del PIB³. En una sociedad en la que el conjunto de la vida económica dependía de la exportación de minerales, la capacidad de paralizar la producción convertía a los mineros en una fuerza política decisiva. Sus condiciones de vida eran infernales: trabajaban en los socavones con perforación en seco, llenando sus pulmones de polvo de sílice y condenándose a una muerte prematura. Como testimonia un minero, "El minero muy difícilmente llegaba a los 40, 45 años". Las jornadas eran extenuantes, la seguridad industrial brillaba por su ausencia y las viviendas en los campamentos mineros carecían de los servicios más básicos⁴.

La formación de una tradición obrera revolucionaria

La Masacre de Uncía de junio de 1923 fue un parteaguas en la memoria obrera boliviana. El ejército, por orden de la empresa Patiño, masacró a los mineros que habían declarado una huelga general en reclamo de mejores condiciones de trabajo y de la abolición del trabajo forzado. La empresa pagó los costos de movilización y alimentación de las tropas, y la masacre no logró doblegar a los trabajadores: se convirtió en un símbolo de la brutalidad patronal y en un hito de la memoria de clase que se transmitiría de generación en generación⁵.

La radicalización del proletariado minero fue el

resultado de décadas de enfrentamientos con el Estado y las empresas. Desde las primeras huelgas de comienzos del siglo XX hasta las masacres de Uncia (1923) y Catavi (1942), los trabajadores construyeron una poderosa memoria colectiva de lucha que se transformó en un componente central de su identidad política. La Guerra del Chaco (1932-1935) fue el infierno que radicalizó a una generación entera. De los aproximadamente 400.000 soldados movilizados entre Bolivia (250.000) y Paraguay (150.000), unos 100.000 murieron —57.000 bolivianos y 43.000 paraguayos—, lo que representa una tasa de mortalidad del 25% y, respectivamente, cerca del 2% y del 4% de la población total de cada país. La derrota de Bolivia deslegitimó a la vieja oligarquía minera y los sobrevivientes de la guerra volvieron a los centros mineros con una nueva conciencia política. Muchos de los futuros dirigentes del movimiento obrero, incluidos los trotskistas, fueron forjados en el Chaco⁶.

La ausencia del PC y el auge del trotskismo

A diferencia de Argentina o Chile, Bolivia carecía de un Partido Comunista estructurado y con influencia de masas, lo que Sándor John considera una condición clave para el surgimiento del trotskismo boliviano⁷. Cuando en 1940 se fundó el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), ya era demasiado tarde. Su colaboración con la "oligarquía proaliada" durante la Segunda Guerra Mundial lo desacreditó ante los mineros, que veían en los trotskistas del POR una voz revolucionaria creíble⁸.

Los orígenes del Partido

Obrero Revolucionario se remontan a 1935, cuando un grupo de exiliados bolivianos en Argentina —entre ellos José Aguirre Gainsborg, Tristán Marof y Alipio Valencia Vega— convocó un congreso de fusión que proclamó la creación del partido. Sin embargo, como señala Sándor John, aquel primer POR fue "apresuradamente organizado" y adolecía de "una confusión política" que lo acercaba más al populismo nacionalista radical que al trotskismo consecuente. No fue hasta su refundación en Cochabamba en 1938 y su posterior giro hacia las minas en la década de 1940 que el partido comenzó a forjar una base obrera sólida y a elaborar un programa revolucionario coherente, cristalizado en las Tesis de Pulacayo⁹.

La dominación imperialista
La industria estaba dominada por tres familias conocidas como los "Barones del Estaño": Patiño, Hochschild y Aramayo. Controlaban entre el 75% y el 80% de las exportaciones nacionales.¹⁰ La dominación imperialista sobre Bolivia no se limitaba al control de los precios del estaño. Las tres grandes empresas mineras eran capitales cosmopolitas, no nacionales. La Patiño Mines Enterprises estaba controlada desde París; la empresa de Mauricio Hochschild operaba a través de centros financieros en Nueva York y Londres; y las minas de Carlos Víctor Aramayo mantenían estrechos vínculos con el capital británico. Estas empresas repatriaban la mayor parte de sus utilidades, reinvertían escasamente en la economía boliviana y actuaban como enclaves extractivos al servicio del capital financiero internacional. Como

señala Sándor John, el país apenas retenía una fracción ínfima de la riqueza generada por sus entrañas.¹¹

La composición indígena del proletariado

Una de las características más singulares de Bolivia era el carácter indígena de su proletariado. Los trabajadores mineros eran reclutados masivamente de las comunidades quechuas y aymaras, hablaban estas lenguas en sus hogares, mantenían relaciones familiares con el campo y conservaban prácticas culturales precolombinas, como las ofrendas al Tío de la Mina, una deidad del subsuelo heredada de las culturas andinas.¹² La proletarización no rompió por completo los vínculos con las comunidades de origen. Muchos mineros seguían hablando quechua o aymara, mantenían relaciones permanentes con el campo y regresaban periódicamente a sus comunidades.

LA CRISIS DE LA POSGUERRA Y EL SURGIMIENTO DEL MNR

El ascenso del MNR debe situarse en el contexto de una prolongada crisis política abierta por la Guerra del Chaco. Entre 1936 y 1952, Bolivia atravesó una sucesión de experimentos nacionalistas, militares y reformistas incapaces de estabilizar el país. Los gobiernos de Toro, Busch y Villarroel intentaron construir nuevas formas de legitimidad estatal, mientras la vieja oligarquía minera perdía progresivamente autoridad política.¹³

El MNR surgió como expresión de este agotamiento histórico. Fundado en 1941 por jóvenes intelectuales y



profesionales que habían combatido en la Guerra del Chaco, no era un partido de clase sino una coalición heterogénea de sectores nacionalistas descontentos con el viejo régimen. Su origen era contradictorio: se presentaba como antiimperialista y nacionalista, pero su diario, *La Calle*, recibía subsidios alemanes y difundía una ideología fuertemente antisemita. Un informe del Departamento de Estado norteamericano de 1944 lo calificó de "partido profascista". Sin embargo, después de 1945 fue abandonando progresivamente esa orientación para adoptar un discurso nacionalista de izquierda.¹⁴

La Masacre de Catavi (diciembre de 1942), en la que el ejército asesinó a más de un centenar de mineros desarmados, impulsó enormemente su

crecimiento político. La interpelación parlamentaria de Víctor Paz Estenssoro, en la que denunció la matanza, lo convirtió en una figura nacional de la oposición. Los mineros buscaban una voz en el parlamento que denunciara la represión; el MNR necesitaba la fuerza social de los mineros para consolidarse. En esa convergencia, el partido logró capitalizar una parte importante del descontento popular.

El elemento cualitativo: el surgimiento de la COB

Las jornadas de abril

El 9 de abril de 1952 comenzó como un levantamiento armado del MNR contra la dictadura de Ballivián. Pero la realidad fue distinta. Cuando los militares leales se opusieron, la población de La Paz salió a la calle. Los obreros fabriles, recordando la masacre de Villa Victoria de 1950, tomaron las armas. Los mineros de Milluni,

Catavi y Siglo XX bajaron de los cerros con dinamita y fusiles viejos de la Guerra del Chaco. Lo que había comenzado como un golpe se transformó en una **insurrección popular de masas**. Los trabajadores derrotaron por completo a siete regimientos y les quitaron todas sus armas. Los oficiales, humillados, desfilaron en calzoncillos por las calles de la capital, custodiados por las milicias mineras.

En Potosí, los mineros se concentraron en la plaza central, con los rostros aún negros por el polvo de los socavones. El dirigente sindical Nicolás Bernal les preguntó "¿Quién va a tomar el poder político?" y la respuesta fue un rugido: "¡Los mineros!" No, el MNR. No Paz Estenssoro. Los mineros. Esa energía revolucionaria se expresaría pocos días después en la fundación de la

COB (Central Obrera Boliviana) —una central nacional que agrupaba no solo a mineros sino también a todos los trabajadores del país y que **funcionaba como un órgano de doble poder**, presentando una alternativa política al Estado burgués.

Pero el MNR supo presentarse como el beneficiario de la insurrección. Paz Estenssoro volvió del exilio. Siles Zuazo, el dirigente del MNR en el país, recibió el palacio de manos de los trabajadores. Lechín, el líder minero, se convirtió en ministro. ¿Por qué? Porque las direcciones sindicales —incluida la del POR— entregaron el poder. Como señala Sándor John, cuando los mineros potosinos tomaron la ciudad, fue "una gran falla política" haber permitido que los voceros del MNR ocuparan puestos clave.

Nuestra corriente considera que esta situación constituye el núcleo de la tragedia boliviana: el movimiento de masas, liderado por la clase obrera, se compromete plenamente y desestabiliza al régimen burgués, generando organismos alternativos con poder real. Sin embargo, por la responsabilidad de las direcciones, que finalmente apoyan a sectores patronales, se pierde la oportunidad.

La fundación de la COB

La Central Obrera Boliviana (COB) fue fundada el 16 de abril de 1952, apenas una semana después de la insurrección. A diferencia de la FSTMB, que agrupaba solo a los mineros, la **COB** era una central nacional que **reunía a todos los sectores en lucha**: mineros, obreros fabriles, campesinos, maestros, empleados públicos, ferroviarios. Agrupaba

todas las milicias, así como las organizaciones obreras y campesinas de Bolivia. La diferencia fundamental entre un sindicato ordinario y un órgano de doble poder radica en el desarrollo de una alternativa real de poder político basada en la autoorganización de sectores de la clase en lucha. En ese sentido, las milicias obreras no eran un adorno: eran la garantía material de que el poder de la COB no era una ficción. Como documenta nuestra corriente, citando al general Gay Prado Salmón, las milicias reunían entre 50 y 100 mil hombres armados, mientras las Fuerzas Armadas se encontraban en un profundo proceso de desintegración. El propio general anticomunista confirmaba la magnitud de la derrota: "El sentimiento de derrota se hacía peor cuando nos enteramos de los detalles de lo ocurrido durante los tres días de combates, lo que confirmaba que el ejército había sido vencido por todos lados. La huida del Alto Mando hizo que los oficiales se sintieran aún más abandonados. Un cierto número desertó de sus unidades sin demora... Unos pocos permanecieron en los cuarteles intentando reagrupar sus unidades"¹⁵.

La comparación con los soviets En los hechos, la COB ejercía funciones de gobierno: resolvía disputas territoriales, administraba la distribución de alimentos, organizaba la defensa armada de barrios y minas, y controlaba los centros de trabajo mediante la lealtad de los mineros y campesinos organizados. Era, en los hechos, el único centro de poder real. Guillermo Lora, dirigente del POR, reconoció que "la COB era el amo del país y, en

realidad, durante un cierto período fue el único centro del poder digno de ese nombre" y que "para la mayoría de las masas, la COB era su único líder y su único gobierno"¹⁶. Los trotskistas ocuparon puestos clave en su dirección: Miguel Alandía Pantoja, el muralista, fue el primer director de *Rebelión*, el periódico de la COB; Edwin Möller, secretario de organización; José Zegada, secretario de actas. La COB enarboló formalmente las Tesis de Pulacayo. En los hechos, tenía el poder para derrocar al gobierno del MNR y establecer un estado obrero.

Cuando Trotsky analizó los meses que transcurrieron entre la Revolución de Febrero y la toma del poder por los bolcheviques en octubre de 1917, identificó una situación política única: la coexistencia de dos poderes antagónicos. Por un lado, el Gobierno Provisional, que tenía la fachada legal, pero carecía de fuerza real. Por otro lado, los soviets, que tenían las armas, el control de los cuarteles, la lealtad de las masas, pero cuya dirección se negaba a asumir el poder pleno. Trotsky escribió:

"La dualidad de poderes significa, en esencia, la existencia en el mismo Estado de dos



organizaciones de poder antagónicas. En el ámbito jurídico, el poder recae en el gobierno provisional. En el terreno de los hechos, son los soviets quienes disponen de la fuerza real. Pero los soviets, o, más exactamente, su dirección, no quieren tomar el poder en sus manos. Temen aislarse de la burguesía, temen quedarse solos frente a la contrarrevolución, temen no saber gobernar.¹⁷

Esta era exactamente la situación de Bolivia después del 9 de abril de 1952. La COB tenía el poder de hecho. Lo que faltaba era la voluntad política para convertirlo en un poder de derecho. La crisis de dirección en una situación de doble poder. Si la COB era tan poderosa, si las milicias estaban armadas, si las *Tesis de Pulacayo* ofrecían un programa revolucionario, ¿por qué no se tomó el poder? La respuesta no está en la debilidad del enemigo—el ejército estaba derrotado—sino en la crisis de la dirección revolucionaria.

La oportunidad histórica: la COB como poder real

La situación en Bolivia después del 9 de abril de 1952 era, en sus rasgos esenciales, similar a la de Rusia después de la Revolución de Febrero de 1917. Dos poderes coexistían en el país: un gobierno burgués débil, el MNR, que había recibido el palacio de manos de los trabajadores pero carecía de fuerza propia; y la COB, que con sus milicias armadas, el control de los centros de trabajo y la lealtad de los mineros y campesinos organizados, era, de hecho, el único centro de poder real en el país. Como señala nuestra corriente, "el más fuerte, el que tenía carácter de masas, era el de

las organizaciones populares y obreras. La toma del poder por los Soviets y la COB podría haberse realizado de manera pacífica. El viejo aparato militar ya había colapsado. El camino estaba abierto para el poder obrero, que tenía sus propias armas y al pueblo tras sí, y podría haber alcanzado el poder total. El único obstáculo era que sus direcciones insistían en rescatar a la burguesía. En Rusia ese obstáculo fue superado y los obreros se apropiaron del poder. En Bolivia no"¹⁸.

El problema de la dirección: Lechín y la trampa del cogobierno

Juan Lechín Oquendo fue una de las figuras decisivas de la revolución boliviana. Dirigente de la FSTMB y, posteriormente, de la COB, combinó un discurso radical con una práctica sistemática de colaboración entre clases. Sándor John documenta que Lechín era militante del MNR y nunca rompió con ese partido.¹⁹

Aunque el POR redactaba gran parte de sus discursos y resoluciones, Lechín no representaba la política trotskista. Su función principal fue mediar entre el movimiento obrero y el gobierno nacionalista, aprovechando su prestigio para moderar las tendencias más radicales de la revolución. En este sentido, actuó como un factor de contención en el proceso revolucionario.

En el momento decisivo de abril de 1952, cuando los mineros tenían las armas y podían disputar efectivamente el poder, Lechín fue quien entregó el palacio a Siles Zuazo. Como recuerda un dirigente campesino citado por Sándor John, les dijo: "Ya hemos

tomado el gobierno; ahora está ahí el Siles-Zuazo, pero ustedes vayan a descansar". Ese "vayan a descansar" condensó toda una orientación política y marcó el comienzo de la derrota de la revolución.²⁰

La dirección de la COB optó por el cogobierno con el MNR. Los ministros obreros ingresarían al gabinete de Paz Estenssoro mientras la central sindical les otorgaría un supuesto "mandato imperativo". Era una ficción: ningún ministro dentro de un gobierno burgués deja de responder, en última instancia, a los intereses de ese gobierno. Las *Tesis de Pulacayo* habían advertido explícitamente contra esa política. Sin embargo, quienes las habían defendido terminaron por subordinarse a ella.

Lechín fue uno de los dirigentes sindicales más hábiles del movimiento obrero boliviano, ya que utilizó su autoridad para impedir que los trabajadores llevaran hasta el final la lógica de su propia revolución.

La consigna ausente: ¡Todo el poder a la COB!

De la existencia de un doble poder no se derivaba automáticamente una salida revolucionaria. La cuestión decisiva era política: ¿qué orientación debía adoptar un partido revolucionario?

Para nuestra corriente, la respuesta era clara. Si la COB constituía el verdadero poder del país, la tarea consistía en luchar para que asumiera plenamente el gobierno. La consigna correspondiente era: "¡Todo el poder a la COB!" No se trataba de fortalecer la influencia sindical

sobre el gobierno del MNR. Se trataba de reemplazar al gobierno burgués por un gobierno basado en la COB —no como central sindical, sino como órgano de poder popular—, en las milicias obreras y en las organizaciones campesinas.

Precisemos el sentido de la consigna. "¡Todo el poder a la COB!" no significaba apoyar a la dirección burocrática de Lechín. Era exactamente lo contrario. Como en Rusia, donde "¡Todo el poder a los soviets!" no significaba apoyar a los mencheviques y socialrevolucionarios que los controlaban, sino luchar para que los soviets rompieran con el gobierno burgués, echaran a esas direcciones conciliadoras y tomaran el poder por sí mismos. En Bolivia, la consigna implicaba que los trabajadores organizados en la COB —mineros, fabriles y campesinos— debían presionar desde las bases para que la central obrera asumiera el gobierno, desalojara a Lechín si fuera necesario y aplicara las *Tesis de Pulacayo*.

A nivel estratégico, la consigna "¡Todo el poder a la COB!" apuntaba a la formación de un "gobierno obrero y campesino". Se trataba de plantear, en el mismo sentido que lo hicieron los bolcheviques después de la revolución de febrero, la necesidad de que los Soviets dieran un paso adelante para enfrentar y sustituir al gobierno provisional titubeante de Kerensky. Junto con la consigna de "Todo el poder a los Soviets", los bolcheviques no exigían "un gobierno de mencheviques y socialrevolucionarios, sin capitalistas" y agitaban la consigna de "abajo los 10 ministros

capitalistas". Como afirma el *Programa de Transición*, "los bolcheviques exigían que los socialistas revolucionarios y los mencheviques rompieran su ligazón con la burguesía liberal y tomaran el poder en sus propias manos", prometiendo, si eso se daba, "su ayuda revolucionaria contra la burguesía, renunciando, no obstante, categóricamente a entrar en el gobierno y a tomar ninguna responsabilidad política por ellos."²¹ El objetivo era "acelerar y facilitar la instauración de la dictadura del proletariado", y tener consignas con valor educativo para desenmascarar a los sectores reformistas que lideran procesos revolucionarios. En España en 1931, y luego en Francia y España en 1936, Trotsky volvió a plantear la necesidad de esas consignas de poder si bien el desarrollo de la lucha de clases era inferior al de Rusia en 1917, ya que no existían organismos de doble poder consolidados. No obstante, Trotsky argumentaba "las masas, aun las más confiadas, siempre sienten una instintiva desconfianza hacia los burgueses, los explotadores, los capitalistas", por lo tanto, "los comunistas deben dirigir el pensamiento de los obreros, precisamente en ese sentido: exigirlo todo del gobierno, puesto que nuestros jefes se encuentran en él", es más, hay que decirles a las masas: "Si tenéis confianza en vuestros jefes, obligadlos a tomar el poder" (24 de junio de 1931)²².

Eso era exactamente lo que "¡Todo el poder a la COB!" significaba en Bolivia, en un contexto en el existían organismos de doble poder mucho más avanzados que en España y Francia en los años 30, y con la clase obrera

industrial a la cabeza: que la COB asumiera el gobierno, a pesar de tener una dirección reformista, y exigirle que aplicara las *Tesis de Pulacayo* y rompiera con el MNR, sin ilusionarse de que eso ya era el socialismo, pero apoyando resueltamente sus medidas anticapitalistas y antiimperialistas.

Lucha de clases y freno de la reforma agraria

Cuando el gobierno de Paz Estenssoro anunció la creación de una comisión para estudiar la reforma agraria, el POR respondió con desconfianza, pero aceptó enviar un delegado. Exigía "la nacionalización de la tierra sin indemnización y su entrega a las organizaciones campesinas".²³

La ley fue impuesta por la movilización revolucionaria de las masas, pero desde el inicio el MNR trató de limitar su alcance. Se legalizó la gran propiedad bajo la forma de "Empresa Agrícola". Muchos latifundios simplemente cambiaron su nombre. La reforma fue insuficiente: entre 1954 y 1968 sólo ocho de 36 millones de hectáreas cultivables cambiaron de manos.²⁴

Kevin Young argumenta que esta ambigüedad formó parte de una estrategia deliberada de contención. La reforma agraria fue una conquista popular, pero también un mecanismo para pacificar el campo y crear una capa de pequeños propietarios que luego servirían como baluarte contra el radicalismo obrero.²⁵

La contradicción central consistía en que la misma medida que expresaba una victoria de las masas también podía convertirse en un instrumento de



estabilización del nuevo régimen. La destrucción de amplios sectores del latifundio fue una conquista real de la revolución. Sin embargo, el MNR procuró canalizar esa energía hacia la consolidación de una capa de pequeños propietarios rurales integrados al nuevo Estado.

El epicentro de la avalancha campesina fue Cochabamba. Los poristas campesinos, encabezados por militantes quechuas como Modesto Sejas, plantearon una "revolución agraria" radical: la socialización de la tierra bajo la administración colectiva de los sindicatos, no el parcelamiento. Derrotaron a Lechín en una discusión a principios de 1953.

El significado político de Cochabamba excedía ampliamente

el debate agrario. Allí surgió una de las pocas experiencias en las que sectores significativos del movimiento campesino intentaron desarrollar una orientación independiente tanto del MNR como de los aparatos estatales tradicionales. El conflicto revelaba una tensión que atravesaba toda la revolución: mientras amplios sectores de base avanzaban hacia posiciones cada vez más radicales, la dirección nacional del POR continuaba subordinando su política a la perspectiva de apoyo crítico al gobierno nacionalista.

Sin embargo, esta combatividad chocó con la dirección nacional del POR. Una carta al Secretariado Internacional reveló que dentro del partido se enfrentaban "dos fracciones": una

con "posiciones capituladoras hacia el MNR" y otra que arriesgaba "aventuras en la movilización de los campesinos". La dirección nacional intervino para frenar a los radicales de Cochabamba.²⁶

En el segundo aniversario de la revolución, el Comité Local porista de Ucureña publicó un volante que desafiaba la línea oficial: "El actual gobierno es de carácter capitalista. Los campesinos y los obreros nada tenemos que ver con este gobierno, porque nuestro gobierno será el Gobierno Obrero Campesino".²⁷

Dos políticas del trotskismo Dentro del trotskismo internacional no hubo una sola línea frente a la revolución boliviana. Existieron dos corrientes claramente

diferenciadas.

Por un lado, la dirección del Secretariado Internacional, encabezada por Michel Pablo, Ernest Mandel (Germain) y Pierre Frank, defendió el apoyo crítico al MNR. El III Congreso Mundial de la IV Internacional (1951) había resuelto: "En caso de movilización de masas bajo la influencia preponderante del MNR, nuestra sección boliviana debe sostener con todas sus fuerzas al movimiento, comprendiendo esto hasta la toma del poder por el MNR".²⁸ Esta orientación expresaba una adaptación creciente a direcciones nacionalistas pequeñoburguesas consideradas susceptibles de ser empujadas hacia posiciones revolucionarias bajo la presión de los acontecimientos.

Por otro lado, la corriente encabezada por Nahuel Moreno mantuvo desde el comienzo una orientación opuesta. En mayo de 1952, *Frente Proletario* advirtió que la revolución boliviana se encontraba ante una disyuntiva decisiva: avanzar "hacia el poder auténticamente obrero" o perderse "por el camino de la conciliación".²⁹ En enero de 1953 formuló explícitamente la consigna que sintetizaba esa orientación: "¡Todo el poder a la COB!"³⁰ La consigna apuntaba a la formación de un gobierno obrero y campesino.

Dos décadas después, Moreno resumió el contraste entre ambas políticas: "Mientras nosotros planteábamos que en Bolivia la consigna era '¡Todo el poder a la COB y las milicias armadas!', en *Quatrième Internationale* los compañeros Frank y Germain

defendían el apoyo crítico al gobierno del MNR".³¹

El alcance de esta diferencia no era ni táctica ni secundaria. Expresaba dos estrategias opuestas ante una situación revolucionaria. Mientras el pablismo consideraba que la tarea consistía en acompañar críticamente al gobierno nacionalista del MNR, la corriente morenista sostenía que la existencia de la COB, las milicias obreras y la destrucción del viejo aparato militar abrían la posibilidad de luchar directamente por la toma del poder por parte de las organizaciones obreras y campesinas. La orientación seguida por el POR no era, pues, inevitable: frente a una misma realidad coexistían dos concepciones opuestas.

Esta polémica no se limitó a 1952. Dieciocho años después, durante el gobierno de Torres y la Asamblea Popular, Moreno volvió a enfrentar a la mayoría pablista, que no distinguía entre un

gobierno nacionalista burgués débil y una dictadura fascista: "Una cosa es no confiar en ningún gobierno burgués ni apoyarlo, aunque sea de 'izquierda' o 'nacionalista'; otra cosa es no distinguirlos de los gobiernos ultrarreaccionarios. No apoyar a Torres es correcto. No distinguirlo de Banzer es suicida."³² Y frente a la política de "armamento en sí" que predicaba la mayoría, Moreno planteaba la necesidad del frente único obrero contra el golpe: "Cuando se detecta el peligro de golpe 'fascista', lo primero es el combate contra el golpe a través del frente único con las organizaciones reformistas. Decir a los mineros que se armen para ir a la guerrilla y no para enfrentar el golpe era romper con todo obrero antigolpista. Nuestra política debió haber sido de frente único y no de guerrilla."³³

Nuestra corriente ha señalado que en Bolivia existían condiciones excepcionales para aplicar la orientación defendida por Lenin



en las *Tesis de Abril*. Frente a una situación de doble poder, la tarea no consistía en sostener críticamente al gobierno burgués sino en convencer a la mayoría de los trabajadores organizados en la COB y en las milicias de que el gobierno de Paz Estenssoro no era su gobierno y de que sólo la toma del poder por sus propias organizaciones permitiría satisfacer las aspiraciones de independencia nacional, tierra, trabajo y pan.³⁴

Desde esta perspectiva, la diferencia fundamental entre la política bolchevique y la del POR no residía en matices tácticos, sino en la actitud ante el gobierno burgués. Como ha señalado nuestra corriente: "La gran diferencia estuvo en cómo actuó el partido revolucionario. Los bolcheviques exigieron que los soviets rompieran con el gobierno provisional burgués y tomaran el poder por sus propios medios como única forma de conseguir la paz, el pan y la tierra. Mientras que el POR llamó a defender al gobierno burgués para que este realizara las aspiraciones más sentidas de los obreros y campesinos".³⁵

Por ello, el balance elaborado por nuestra corriente concluye que la oportunidad revolucionaria se frustró de la peor manera posible: no porque las masas fueran derrotadas militarmente ni porque faltaran organismos de poder alternativos, sino porque el partido revolucionario claudicó frente a sus responsabilidades políticas abiertas por la insurrección de abril.

Una posición intermedia, aunque críticamente valiosa, fue la

de Sam Ryan, dirigente de la Socialist Workers Party norteamericana. Ryan advirtió tempranamente que el MNR era un partido burgués y que la política de apoyo crítico podía conducir a una derrota estratégica. Al año siguiente comparó la orientación del POR con la política de los mencheviques en Rusia y del estalinismo en China.³⁶

La dirección del POR hizo caso omiso de estas advertencias. Recién en 1956 levantó tardíamente la consigna "¡Todo el poder a la COB!"³⁷ En 1963, Guillermo Lora reconocería que no haber impulsado esa orientación en los momentos decisivos había sido el error más grave del partido.³⁸

LA REVOLUCIÓN INTERRUMPIDA, UNA Y OTRA VEZ

Lo que ocurrió en Bolivia después de 1952 no fue un accidente. Fue una pauta histórica. Lo decisivo de los episodios posteriores no radica únicamente en su magnitud. Cada uno de ellos reprodujo, bajo condiciones diferentes, una tensión ya presente en abril de 1952: la existencia de organismos de masas capaces de desafiar al Estado y la ausencia de una dirección revolucionaria dispuesta a llevar esa confrontación hasta sus últimas consecuencias.

En 1971, bajo el gobierno de Juan José Torres, la COB volvió a convertirse en el centro de una situación de doble poder. La Asamblea Popular fue presentada por numerosos militantes como una reedición, en condiciones distintas, de la experiencia abierta

en 1952. Sin embargo, el sector trotskista de mayor influencia volvió a depositar sus expectativas en los sectores militares considerados progresistas. El golpe de Estado de Banzer liquidó la experiencia y abrió un nuevo ciclo de derrotas.

En 1985, los mineros ocuparon La Paz durante diecisiete días. Doce mil trabajadores paralizaron la capital. "¡Obreros al poder!" se escuchaba de nuevo en las calles. Sin embargo, la dirección de la COB, encabezada otra vez por Lechín, contuvo el movimiento y levantó la lucha. Poco después, Paz Estenssoro promulgó el Decreto 21060, que dismanteló la minería estatal y asestó la derrota más profunda sufrida por el movimiento obrero boliviano desde la revolución.

En 2003 y 2005, durante las Guerras del Gas, los mineros volvieron a ocupar un lugar de vanguardia en las rebeliones populares. Sin embargo, una vez más, las direcciones sindicales y políticas desviaron el proceso hacia una salida institucional que permitió la estabilización del régimen en nuevas formas.

Las oportunidades revolucionarias se repitieron en varias etapas. Sin embargo, los sectores revolucionarios, cada vez más debilitados, continuaron adaptándose a corrientes nacionalistas o reformistas. La reiteración de estas derrotas evidencia que el problema central no era la falta de combatividad de las masas, sino la persistencia de una crisis en la dirección revolucionaria.

Nuestra corriente sostiene que

la posibilidad de una lucha victoriosa por el poder obrero se frustró no por la superioridad del adversario, sino por las limitaciones del partido revolucionario.

La crisis de dirección revolucionaria

La revolución boliviana de 1952 no fue derrotada por la superioridad militar del imperialismo. Fue derrotada porque la dirección revolucionaria —el POR— traicionó la lucha.

Las condiciones objetivas para una transformación revolucionaria existían de manera excepcional. El ejército había sido destruido. Las milicias obreras estaban armadas. La COB concentraba una autoridad superior a la del propio gobierno. Las masas habían demostrado una disposición extraordinaria para luchar. Precisamente por eso, la revolución boliviana ocupa un lugar tan singular en la historia latinoamericana: muestra con una claridad excepcional el papel decisivo de la dirección política en los momentos culminantes de la lucha de clases. Pocas veces una corriente identificada con el trotskismo dispuso simultáneamente de influencia real en el movimiento obrero, de un programa revolucionario avanzado y de una situación objetiva tan favorable para la lucha por el poder.

¿Por qué ocurrió esto? Porque la dirección del POR nunca rompió por completo con la ilusión de que la burguesía nacional —o sus representantes sindicales— podía ser empujada hacia posiciones revolucionarias. Esta ilusión tenía una expresión política concreta: el pablismo. Michel

Pablo había teorizado que la presión de la situación mundial empujaría a sectores nacionalistas y burocráticos más allá de sus propios límites históricos. La experiencia boliviana mostró los resultados de esa orientación aplicada a una situación revolucionaria real.

Pierre Broué formuló el balance histórico con precisión: "Treinta y un años después de la Revolución del 9 de abril no ha habido un 'Octubre boliviano'. Eso es indiscutible. Sin embargo, la revolución del 9 de abril ha perdurado en la conciencia de las masas en Bolivia y en Sudamérica".³⁹

La lección de abril de 1952 no es que las masas fueran incapaces de tomar el poder. Es exactamente lo contrario: demostraron que podían hacerlo. Destruyeron el ejército, construyeron sus propias milicias, levantaron organismos de doble poder y contaron con un programa revolucionario avanzado. El problema fue que la dirección que habían construido frustró activamente su propia revolución, traicionando la lucha de la clase trabajadora y el campesinado boliviano.

La memoria de aquellos días — los mineros armados, las milicias en las calles, la COB como centro efectivo del poder y las *Tesis de Pulacayo* como programa— sigue viva. Cada nueva rebelión ha sido un intento de retomar aquel hilo interrumpido. Y cada nueva rebelión ha chocado con el mismo obstáculo: la ausencia de una dirección capaz de convertir la fuerza social de las masas en la conquista efectiva del poder.

Hoy, la tarea sigue siendo construir una dirección revolucionaria que no repita estos errores y comprenda que el poder no se alcanza por delegación ni mediante el apoyo crítico a gobiernos burgueses, sino a través de la acción independiente de la clase trabajadora organizada.

Los mineros bolivianos prometieron: "Volveremos". En 2003 y 2005 cumplieron esa promesa. La próxima vez, podrían contar con la dirección que merecen. Construirlos es nuestra responsabilidad. ■

NOTAS

¹ S. Sándor John, **Revolución permanente en el Altiplano: El trotskismo boliviano** (La Paz: Plural, 2016), pp. 12-13.

² John, **Revolución permanente**, p. 31.

³ John, **Revolución permanente**, p. 32.

⁴ John, **Revolución permanente**, p. 30.

⁵ John, **Revolución permanente**, pp. 32-33.

⁶ John, **Revolución permanente**, pp. 32-33; James Dunkerley, **Rebellion in the Veins: Political Struggle in Bolivia, 1952-1982** (Londres: Verso, 1984), pp. 13, 28-42.

⁷ John, **Revolución permanente**, p. 38.

⁸ John, **Revolución permanente**, pp. 38, 114.

⁹ John, **Revolución permanente**,

pp. 38, 67-73.

¹⁰ John, **Revolución permanente**, p. 31; Herbert S. Klein, **Bolivia: The Evolution of a Multi-Ethnic Society** (Nueva York: Oxford University Press, 1992), p. 145.

¹¹ John, **Revolución permanente**, p. 31; Dunkerley, **Rebellion in the Veins**, p. 13.

¹² John, **Revolución permanente**, pp. 22-23, 32.

¹³ Dunkerley, **Rebellion in the Veins**, capítulos 1 y 2.

¹⁴ Dunkerley, **Rebellion in the Veins**, p. 28; John, **Revolución permanente**, p. 114; Klein, **Bolivia**, p. 189.

¹⁵ General Gay Prado Salmón, **Poder y Fuerzas Armadas, 1919-1982** (Cochabamba, 1984), citado en Alicia Sagra, "Bolivia: 50 años al borde de la toma del poder", **Marxismo Vivo** N° 8, 2004.

¹⁶ Guillermo Lora, **Historia del Movimiento Obrero boliviano**, citado en Sagra, "Bolivia: 50 años al borde de la toma del poder".

¹⁷ León Trotsky, **Historia de la revolución rusa**, capítulo "La dualidad de poderes", pp. 157-163.

¹⁸ Sagra, "Bolivia: 50 años al borde de la toma del poder".

¹⁹ John, **Revolución permanente**, pp. 120-122.

²⁰ John, **Revolución permanente**, p. 165.

²¹ Trotsky, **El programa de transición** (1938).

²² Trotsky, "Por la ruptura de la coalición con la burguesía". Carta al Secretariado Internacional, 24 de junio de 1931. Ver también Nahuel Moreno y Miguel Romero, "Sobre el Gobierno Obrero y

Campesino (Una carta de diciembre de 1985 al dirigente de la organización trotskista francesa Lutte Ouvrière, Hardy)", 1985.

²³ John, **Revolución permanente**, p. 196.

²⁴ Dunkerley, **Rebellion in the Veins**, p. 73, citado por Sagra.

²⁵ Kevin Young, **Blood of the Earth: Resource Nationalism, Revolution, and Empire in Bolivia** (Austin: University of Texas Press, 2017), pp. 54-55.

²⁶ John, **Revolución permanente**, p. 200.

²⁷ John, **Revolución permanente**, p. 200.

²⁸ Resolución del III Congreso Mundial de la IV Internacional (1951), citada en Sagra, "Bolivia: 50 años al borde de la toma del poder".

²⁹ **Frente Proletario** (periódico del POR argentino, corriente de Nahuel Moreno), 29 de mayo de 1952, citado en Sagra.

³⁰ **Frente Proletario**, 15 de enero de 1953, citado en Sagra.

³¹ Nahuel Moreno, **El Partido y la Revolución** (1973). El texto retoma y desarrolla la polémica iniciada en "Un documento escandaloso" (respuesta a Ernest Mandel), capítulo I, "¿Todos los gobiernos son iguales?".

³² Moreno, **El Partido y la Revolución**.

³³ Moreno, **El Partido y la Revolución**.

³⁴ Sagra, "Bolivia: 50 años al borde de la toma del poder".

³⁵ Sagra, "Bolivia: 50 años al borde de la toma del poder".

³⁶ Sam Ryan, "A Letter on the Bolivian Revolution", **Socialist Workers Party Internal Bulletin**, junio de 1952; Sam Ryan, "The Bolivian Revolution and the Fight Against Revisionism", **SWP Discussion Bulletin**, octubre de 1954.

³⁷ Resolución del Comité Ejecutivo del POR boliviano, mayo de 1956, citada en Sagra, "Bolivia: 50 años al borde de la toma del poder".

³⁸ Guillermo Lora, **La Revolución Boliviana (análisis crítico)** (La Paz: Difusión s.r.l., 1964), citado en Sagra, "Bolivia: 50 años al borde de la toma del poder".

³⁹ Pierre Broué, "Bolivia, 9 April 1952: A Forgotten 'February Revolution'?", **Revolutionary History**, vol. 4, n.º 3, verano de 1992.

BOLIVIA – LA INSURRECCIÓN TRAICIONADA (1985)

EUGENIO GRACO, CORREO INTERNACIONAL,
N. 15. 12/1985. VERSIÓN ABREVIADA.

En marzo de 1985, los trabajadores bolivianos enfrentaron al gobierno de Hernán Siles Suazo en una huelga general de 16 días. En su transcurso, diez mil mineros armados con dinamita ocuparon la capital, La Paz, mientras el ejército permanecía dividido y vacilante, sin comenzar la represión. En Oruro, una ciudad fundamental por concentrar a su alrededor las minas más importantes del país, los trabajadores depusieron al prefecto y se apoderaron del gobierno, hasta entregarlo voluntariamente a la policía local. Mientras tanto, los campesinos apoyaban al movimiento obrero bloqueando las carreteras, la población de La Paz se solidarizaba con los mineros de diversas formas y el movimiento estudiantil luchaba codo a codo con los trabajadores.

Esa inmensa movilización revolucionaria fue organizada por la Confederación Obrera Boliviana (COB). Los mineros que ocuparon La Paz lo hicieron bajo las banderas de su sindicato, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), que integra la COB y es su columna vertebral. Los trabajadores que tomaron el gobierno en Oruro marcharon bajo la dirección de la Confederación Obrera Departamental (COD), la sección local de la COB. Los campesinos que bloqueaban las carreteras eran de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), aliada a la COB, de la cual la CSUTCB tiene representación.

Las organizaciones estudiantiles que se movilizaron también están representadas en la COB. Y todos los trabajadores del país, que se lanzaron a la huelga general de forma unánime, lo hicieron organizados en sus sindicatos, que están en la COB.

A pesar de tener todo a su favor, la huelga general no triunfó. Las reivindicaciones económicas que la originaron no fueron atendidas. El movimiento revolucionario retrocedió. La burguesía logró montar una trampa electoral que, mediante fraude, entregó el gobierno al notorio reaccionario Víctor Paz

Estenssoro. Este lanzó inmediatamente un nuevo ataque a las masas bolivianas, en la misma línea del FMI que su antecesor, pero mucho más violento. Una nueva huelga general fue organizada en septiembre, pero, esta vez, fue categóricamente derrotada.

Analizando retrospectivamente, esta segunda huelga general ya fue una batalla defensiva en la retaguardia. Su suerte estaba determinada en gran medida por la huelga anterior: el retroceso de marzo explica la derrota de septiembre. Por eso, extraer hasta el final las conclusiones de la huelga de marzo es absolutamente necesario para armar políticamente al movimiento obrero boliviano y a los revolucionarios del altiplano y del mundo entero. No solo para encontrar las razones de la derrota, sino también, y principalmente, para entender por qué se le escapó a la clase obrera boliviana, una vez más, una victoria



que tenía al alcance de las manos.

DOS TRAICIONES

Según nuestro punto de vista, la huelga de marzo no triunfó por una única razón: la dirección reconocida del movimiento obrero boliviano, fundamentalmente Juan Lechín y, en segundo plano,

el Partido Comunista y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), la traicionó. Esa huelga general solo podía triunfar si se transformaba en una insurrección, derrocaba al gobierno por medio de la violencia y colocaba el poder en las manos de la clase obrera y del pueblo, es decir, en las manos de la COB. Eso es lo que la dirección de los obreros y del pueblo boliviano no hizo.

Era de esperar que así ocurriera, visto que jamás una dirección no proletaria lleva a los trabajadores al poder por su propia voluntad. Ni Lechín, ni el PCB, ni el MIR son direcciones proletarias. Las dos primeras son burocracias antiobreras, en sus variantes nacionalista (Lechín) y rusa (el PCB). El MIR es una dirección pequeñoburguesa.

Pero lo más grave es que muchos de los que se dicen revolucionarios y trotskistas no tuvieron una política para hacer la revolución, para impulsar a las masas hasta la insurrección y, en algún momento de esa lucha, sustituir a las direcciones traidoras. Por eso, el centro de esta polémica es destacar los enormes errores teóricos y políticos de los que, una vez más, traicionaron la revolución boliviana de la manera más infame: abrigándose bajo las banderas revolucionarias del trotskismo. Haremos esta polémica a partir de las posiciones de la única corriente que elaboró una política revolucionaria para Bolivia: la Liga Internacional de los Trabajadores.

Los protagonistas de este debate son los siguientes:

La Liga Internacional de los Trabajadores – Cuarta Internacional (LIT-QI), su partido boliviano, el Partido Socialista de

los Trabajadores (PST) y la organización simpatizante de la LIT en Argentina, el Movimiento al Socialismo (MAS).

El Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional (SU) y su sección boliviana, el Partido Obrero Revolucionario Unificado (POR-U).

Dos grupos nacional-trotskyistas, débilmente asociados a la llamada Tendencia Cuarta Internacionalista (TC): el Partido Obrero Revolucionario de Bolivia, dirigido por Lora (POR-Lora), y el Partido Obrero (PO) de Argentina.

LA HUELGA GENERAL Y EL PROBLEMA DEL PODER

Lahuelga general de marzo lucha revolucionaria de masas contra el gobierno y el régimen burgués, que cuestionó el sistema capitalista semicolonial boliviano. Todo el mundo lo entendió así. La burguesía, aterrorizada, la denunciaba. Lechín reconocía que, evidentemente, la clase obrera no podría triunfar porque no estaba armada.

Las organizaciones con las cuales polemizamos también describían la situación de la misma forma. André Dubois, periodista del SU, decía que "desde el comienzo de esta huelga... la reivindicación más inmediata pone en el orden del día un enfrentamiento sociopolítico y coloca, de hecho, la cuestión del poder"².

La TC, por medio del periódico Masas, órgano del POR-Lora, afirmaba que "la huelga, desde el momento de su estallido, plantea en términos inequívocos el problema del poder"³. Y el PO informaba sobre la "confraternización revolucionaria" en las calles de La Paz de mineros, trabajadores fabriles, docentes y

estudiantes; la reducción del gobierno a una "máscara impotente" y el "legítimo temor de que las fuerzas armadas se desintegren" si fueran lanzadas a reprimir⁴.

La LIT y el PST boliviano, por su parte, venían afirmando, desde hace más de dos años, que en Bolivia estaba planteado el problema del poder y que la huelga general de marzo lo volvía candente. Podemos decir, entonces, que todas las tendencias que se reivindican trotskistas describieron correctamente la situación como revolucionaria y la huelga general como una huelga política que planteaba "el problema del poder".

Hasta ahí, todos coincidimos con nuestros maestros, que siempre atribuyeron ese carácter a las huelgas generales. Lenin, por ejemplo, decía que "el papel de clase verdaderamente avanzado... que levanta a las masas para la revolución... es desempeñado por el proletariado industrial, que cumple esta tarea con sus huelgas revolucionarias"⁵.

Trotsky afirmaba que "toda huelga general, cualesquiera que sean las consignas bajo las cuales haya surgido, tiene una tendencia interna a transformarse en conflicto revolucionario declarado, en lucha directa por el poder... Paralizando las fábricas, los transportes, todos los medios de comunicación en general, las usinas eléctricas, etc., el proletariado paraliza, así, no solo la producción, sino también al gobierno. El poder del Estado queda suspendido en el aire... La huelga general presenta, inevitablemente, a todas las clases de la nación la pregunta: '¿Quién va a ser el dueño de la casa?'"⁶.

CRISIS REVOLUCIONARIA Y LA CUESTIÓN DEL PODER

La huelga general de marzo no fue, sin embargo, un rayo en cielo azul. Fue el auge de una crisis revolucionaria prolongada, que se inició en 1982 con la caída de la dictadura militar de García Meza, se atenuó con las expectativas de las masas en el reciente gobierno de Siles Suazo y resurgió tres meses después de la posesión de Siles Suazo. A partir de entonces, una secuencia de paralizaciones, varias huelgas generales, manifestaciones, ocupaciones de empresas, bloqueos de carreteras y miles de otras formas de lucha de las masas cuestionaron permanentemente al gobierno y al Estado burgués. Sin llevar a una clara situación insurreccional, este prólogo de la huelga de marzo constituyó una situación crónica de doble poder —podríamos decir, una situación preinsurreccional— que se prolongó por más de dos años.

Esta situación se encuadra en la descripción de Lenin: "La clase obrera no da tregua al enemigo, interrumpe el curso normal de la vida industrial, detiene constantemente el aparato de la administración local y crea en todo el país un estado de alarma, movilizándolo nuevas y nuevas fuerzas para la lucha. Ningún Estado puede resistir durante mucho tiempo semejante embestida..."⁷.

Si era así, los revolucionarios estaban obligados a proponer al movimiento de masas, en su propaganda y agitación, que este asumiera el gobierno en sus manos, no solo durante la huelga de marzo, sino también durante todo el período de crisis revolucionaria que la precedió. En

situaciones como esta, la consigna de poder es la más importante, es el eje del programa revolucionario.

Sin embargo, esto no es suficiente. Es necesario mostrar a la clase obrera y al movimiento de masas cómo se concreta la "dictadura del proletariado" (expresión favorita de Lora) o el "gobierno de los trabajadores" (consigna del POR-U)⁸. Es necesario decir con qué instituciones y organizaciones la clase obrera y el pueblo pueden tomar el poder, destruir el Estado burgués y ponerse a gobernar el país.

CON LA COB Y CONTRA LA COB

Esta discusión ya dura más de 30 años en Bolivia. Está planteada desde la revolución de 1952, cuando el movimiento obrero boliviano, aliado al movimiento campesino, destrozó al ejército burgués, creó sus propias milicias sindicales y campesinas y, como resultado de este gran triunfo, construyó la COB.

A partir de entonces, la corriente trotskista que hoy se encuentra organizada en la LIT propuso que la COB asumiera el poder para instaurar un gobierno obrero y campesino y, consecuentemente, levantó esta consigna en cada ocasión en que la lucha de clases lo permitía. Pero también hace más de 30 años que Lechín, acompañado por el SU, Lora y compañía se oponen a que la COB gobierne Bolivia.

El dirigente del POR-U, Antonio Moreno, afirma que la COB "es la única institución que ha propuesto una solución alternativa a la crisis..."⁹. André Dubois también sostiene que la COB "reflejaba mal la dinámica real del

movimiento social..."

Lora teoriza: "Más que la teoría, la larga experiencia teórica (sic) demostró que, por su propia naturaleza, las organizaciones sindicales están impedidas..."¹⁰. Siguiendo a Lora, el dirigente del PO, Roberto Gramar, afirma que la COB "no es un mecanismo para la toma insurreccional del poder político..."¹¹.



LA COB ES MUCHO MÁS QUE UN SINDICATO

Antonio Moreno, Dubois, Lora y Gramar cometen el mismo error: identificar a la COB con su dirección burocrática. Es indiscutible que hay una burocracia lechinista en la COB y que es necesario combatirla con medidas que impongan la democracia obrera también en su cúpula. Pero lo que ellos proponen no es esto, sino que la COB no sirve para tomar el poder y, por lo tanto, es necesario construir otros organismos para ese fin.

Otro argumento que utilizan es que la COB es una organización sindical. Lora lo dice claramente y el SU lo insinúa cuando señala la necesidad de un instrumento más amplio y representativo. Este razonamiento choca con la realidad histórica y actual de la COB.

A pesar de ser verdad que su estructura básica está compuesta

por sindicatos, la COB es mucho más que una central sindical. La COB de 1952 construyó milicias obreras que, junto a las milicias campesinas, se convirtieron en la única fuerza armada del país hasta que, por la traición de su dirección, la burguesía logró reconstruir su ejército. La COB actual agrupa en su interior, además de los sindicatos, las organizaciones campesinas, estudiantiles, de mujeres, etc. Y habría bastado con que su dirección llamara a los soldados y policías a organizarse por la base para que, automáticamente, se incorporaran a ella.

Cuando Lora afirma que la COB no puede tomar el poder porque tiene las limitaciones de cualquier "organización sindical", por su "propia naturaleza", solo está diciendo una estupidez totalmente vaciada de todo contenido real. Desafiamos a Lora a explicar, de la forma en que él entiende, cómo se encaja en la "propia naturaleza" de un sindicato la práctica de formar milicias y agrupar a los campesinos y demás sectores explotados de la población.

LOS ORGANISMOS DE DOBLE PODER Y EL FETICHISMO SOVIÉTICO

Afirmar que la COB no es un organismo apto para ejercer el poder porque está estructurada en torno a una determinada forma organizativa —los sindicatos— indica una enorme ignorancia histórica y teórica sobre las instituciones de poder. Tanto la experiencia histórica como la teorización que Marx, Engels, Lenin y Trotsky hicieron sobre ella afirman que los organismos de poder del proletariado y las masas revolucionarias no se ajustan a

ninguna receta organizativa rígida, sino que adoptan las formas más variadas, según las propias masas las construyen en las situaciones de crisis revolucionaria.

Es verdad que Marx, Engels y Lenin defendieron que la Comuna era un gobierno obrero, mientras Trotsky afirmó que era un municipio democrático-burgués. Pero todos ellos coincidieron en que el primer organismo de poder obrero de la historia, que hizo la insurrección y actuó como gobierno, fue el Comité Central de la Guardia Nacional. Esto debería ser un llamado de atención para todos los que piensan que un organismo de poder, para serlo, debe seguir determinadas recetas organizativas y, consecuentemente, niegan ese carácter a la COB boliviana por asentarse sobre los sindicatos.

A partir del triunfo de la Revolución Rusa de 1917, la palabra "soviet" se convirtió en sinónimo de un organismo de poder de la clase obrera. Los soviets eran muy diferentes de los sindicatos. Nacieron como comisiones obreras para organizar las huelgas en la Revolución de 1905.

Lenin definió a los soviets como "órganos de la lucha directa de las masas. Surgieron como órganos de la lucha huelguística. Bajo la presión de la necesidad, se transformaron rápidamente en órganos de la lucha general revolucionaria contra el gobierno"¹³. Esos "nuevos órganos de poder revolucionario... eran creados exclusivamente por las capas revolucionarias de la población... por su carácter político-social, esto era, en su forma embrionaria, la dictadura de los elementos revolucionarios del

pueblo"¹⁴.

Sin embargo, al mismo tiempo, Lenin ya alertaba que "el papel de los soviets... ha rodeado a esas organizaciones de una aureola que, a veces, son consideradas con cierto fetichismo. Se cree que estos órganos son, siempre y en todas las circunstancias, órganos 'necesarios y suficientes' para el movimiento de masas"¹⁴.

En síntesis, tanto para Lenin como para Trotsky, lo que definía a los soviets como órganos de poder no era su forma organizativa, sino su "carácter político" y su "contenido de clase". De ahí que la definición más general que Trotsky hace no se refiere a una determinada forma de organización, sino al carácter de clase y a las tareas planteadas: "El soviet es la forma más elevada de frente único en la etapa en que el proletariado lucha por el poder"¹⁵. Exactamente la misma definición de Lenin: un organismo de "lucha general revolucionaria" de las "capas revolucionarias de la población" para tomar el poder.

Para los que cuestionan la capacidad de la COB de tomar el poder por su carácter sindical, recordemos que Trotsky afirmaba que "los sindicatos ingleses pueden ser una poderosa palanca de la revolución proletaria; incluso, en ciertas condiciones y por cierto período, pueden reemplazar a los soviets obreros"¹². Recapitulemos: el Comité Central de la Guardia Nacional en la Comuna de París, los soviets y los comités de fábrica en la Revolución Rusa, los comités de acción del Frente Popular en Francia, los comités de base en Alemania, los sindicatos en Inglaterra, los partidos-ejército guerrilleros en China, en Vietnam y en Cuba: todos ellos fueron, real o potencialmente, órganos de

poder. Nadie que posea conocimientos elementales de historia y de teoría marxista revolucionaria puede defender seriamente que la COB no sirve para tomar el poder por basarse en los sindicatos.

LA "HETEROGENEIDAD IDEOLÓGICA" DE LA COB

Otro argumento contrario a la COB como organismo de lucha por el poder es el que Lora señala al descartarla por su "heterogeneidad ideológica". Al contrario, un organismo que pretende tomar el poder debe, según él, ser ideológicamente homogéneo. Conclusión: Lora no tiene la menor idea de la diferencia entre una organización de masas y un partido revolucionario.

Toda organización de masas, desde un sindicato hasta un soviets, es ideológicamente heterogénea, pues agrupa a todos los obreros y los sectores de la población que luchan. Un partido es ideológicamente homogéneo porque agrupa a todos los que comparten su programa. Si una organización de masas no fuera ideológica y políticamente heterogénea, no sería de masas, pues excluiría a todos aquellos que, aun queriendo luchar, no comparten la ideología de su dirección. Por eso, Lenin definía el futuro "gobierno provisional revolucionario" como una "organización común... sin partido o interpartidaria"¹⁶.

¿Se quiere mayor "heterogeneidad ideológica" que esta, que incluye a los "partidos putrefactos" en el órgano de lucha por el poder? Precisamente por ser un organismo de frente único del proletariado y las masas explotadas, todo órgano de poder se apoya obligatoriamente en la

presencia, en su interior, de la amplia mayoría del movimiento de masas, con sus ideologías y partidos reformistas, centristas y revolucionarios. El partido revolucionario lucha por la dirección del organismo de masas contra los otros partidos. Trata de imponer su programa y su política. Pero si logra esto, no expulsa al resto de las corrientes; jamás exige de un organismo de masas la homogeneidad ideológica que pretende el ultrasecario Lora.

CAPITULACIÓN A LECHÍN

Consecuentemente, con su consigna de poder a la COB, el PST la formuló bajo la exigencia de que Lechín asumiera el gobierno del país en nombre de la COB y estuviera sometido a su disciplina. Ni el SU ni la TC levantaron esa consigna. Para Lora, un gobierno de la COB sería "nada más que una variante de los gobiernos burgueses" si la burocracia lechinista continuara a su frente. Gramar dijo textualmente lo mismo. Dubois y Antonio Moreno ni siquiera mencionan este problema.

Tanto el SU como la TC manifiestan una absoluta falta de política ante la dirección burocrática de Lechín, que se transforma en una capitulación total a él, disfrazada de lenguaje ultraizquierdista. Al no exigir a Lechín, dirección de la COB, que tome el poder y que gobierne bajo la disciplina de la COB, el SU y la TC no solo desconocen la más urgente necesidad del proletariado boliviano —tomar el poder con la dirección y la organización que tiene—, sino que tampoco comprometen al burócrata ante las masas por traicionarla. Finalmente, no se postulan como



dirección alternativa que se propone hacer lo que la situación exige —tomar el poder con la COB—, ya que Lechín se niega a hacerlo.

Lora ataca la exigencia del PST de que Lechín fuera presidente tomando el poder con la COB o, en caso contrario, renunciara a su dirección, alegando que eso significa que la toma del poder "es tarea de algunos dirigentes sindicales, y no de las masas". Parece que Lora no leyó a Lenin y Trotsky —o no entendió nada de lo que leyó—, ya que esta táctica no fue inventada por el PST ni por la LIT, sino por los bolcheviques durante la Revolución Rusa.

Cuando la dirección conciliadora de los soviets empantanaba la revolución, Lenin propuso la "formación de un gobierno constituido por socialistas-revolucionarios y mencheviques, responsable ante los soviets"¹⁷. Si ellos aceptaban, los bolcheviques "renunciarían inmediatamente a la exigencia de la transferencia del poder al proletariado y a los campesinos pobres y a los métodos revolucionarios de lucha a favor de esa reivindicación".

Trotsky hizo el balance de esta táctica genial: "los mencheviques y los socialistas-revolucionarios rechazaron este compromiso... En manos de los bolcheviques esta negativa se transformó en la más

poderosa arma para la preparación de la insurrección armada, que, siete semanas después, barrió a los mencheviques y a los socialistas-revolucionarios¹⁸.

Abdicar de la exigencia de que Lechín tome el poder y gobierne en nombre de la COB, y como responsable ante ella, significa simplemente capitular ante Lechín. Es negarse a usar la "arma más poderosa" para "barrerlo" de la dirección del movimiento de masas boliviano.

INVENTAR NO CUESTA NADA

Habiendo descartado a la COB como organismo de poder, el SU y la TC se dedican a inventar organismos "de masas" para hacer la revolución. Así, el SU y la TC actúan de forma inversa a la de los marxistas. En vez de preguntarse qué organismos fueron contruidos por las masas y proponer que, con ellos, tomen el poder, se dedican a extraer de sus febriles intelectos una serie de recetas organizativas. Cualquier cosa menos reconocer que el organismo que las masas tienen para luchar es la COB.

Trotsky recomendaba lo opuesto: no inventar nada; descubrir qué organizaciones de poder fueron contruidas por las propias masas.

No era tan difícil descubrir esas "formas y métodos de organización" en Bolivia, ya que existía el antecedente de la

insurrección triunfante de 1952, hecha por los sindicatos con sus milicias. Solo una profunda repugnancia por la clase obrera, por sus métodos y organizaciones, propia de pequeñoburgueses sin remedio, puede explicar que los dirigentes del SU y la TC no vieran a la COB como la organización revolucionaria de las masas bolivianas. Peor aún, que opusieran a esta central organismos que solo existían en sus cabezas, sustituyendo —diría Trotsky— "la acción revolucionaria por el más nefasto de los juegos, aquel que consiste en distraerse, en el campo de la organización, con puerilidades".

HUELGA GENERAL E INSURRECCIÓN

"¡Todo el poder a la COB!" fue, por lo tanto, la única consigna verdaderamente revolucionaria durante el período que va desde las primeras luchas contra Siles hasta la huelga general de marzo. Sin embargo, la estrategia revolucionaria no se agota en la consigna, que señala el objetivo del movimiento, pero no los medios para su realización.

Gramar afirma correctamente que no se debe confundir la situación revolucionaria con la insurrección. Efectivamente, ni una situación revolucionaria ni una huelga general son suficientes para la toma del poder: es necesaria una insurrección.

Lo curioso es que ninguna de las corrientes con las que discutimos llamó a los trabajadores a hacer la insurrección, a organizarse y armarse para ella. Polemizando con el MAS, Gramar sostiene que, en Bolivia, no se estuvo ni siquiera cerca de una insurrección, pues la "insurrección no ha anidado en las masas". Lora

afirma, en medio de la huelga general, que "no se puede decir que entramos en la etapa insurreccional". El SU no habla de la insurrección.

El SU y la TC desconocen lo más elemental de la teoría marxista revolucionaria, ya que, para Lenin y Trotsky, la huelga general siempre tendía a la insurrección. Trotsky afirmaba que "la huelga general no resuelve el problema del poder, no hace más que plantearlo. Para apoderarse del poder es preciso, apoyándose en la huelga general, organizar la insurrección"¹⁹. En 1920, al referirse a las lecciones de la revolución de 1905, Lenin decía que "la lucha revolucionaria alcanzó tal nivel de desarrollo y tal potencia que la insurrección armada coincidió con la huelga de masas". Y agregaba: "Esta experiencia tiene significación mundial para todas las revoluciones proletarias"²⁰.

En el mes de marzo boliviano, la tendencia a la insurrección se expresó, por lo tanto, en el simple hecho de haber una huelga general. Pero la realidad superó esta verdad teórica.

Ya vimos el ejemplo de Oruro, en que los trabajadores tomaron el gobierno en sus manos por un día. Pero el mejor ejemplo es el de La Paz. ¿Qué significa la ocupación de la capital del país por diez mil mineros armados con dinamita, que hacen en ella lo que quieren mientras la burguesía se esconde debajo de la cama, la pequeña burguesía acomodada tiembla de pánico, la clase obrera y el pueblo pobre los apoyan, y el ejército se muestra incapaz de intervenir?

Si no quieren llamar a esto semiinsurrección, comienzo de insurrección o "tendencia a la insurrección", no sabemos qué



otro nombre puede tener. ¿Les parece bien al SU y a la TC denominarlo "manifestación armada"? Pero no fue una manifestación armada; se trata claramente de una insurrección en curso. Lenin descubrió esta dinámica ya en 1905: "la huelga se transformó en huelga general y desembocó en una formidable manifestación... Comenzó la insurrección"²¹.

La ceguera del SU y la TC, que les impidió ver que estaban ante un comienzo de insurrección, tiene su explicación última en la ceguera en relación con la COB: si los trabajadores y el pueblo boliviano no habían construido un organismo para la insurrección y para gobernar... la insurrección no existía.

LA INSURRECCIÓN SOCIAL Y LA INSURRECCIÓN "COMO ARTE"

Gramar hace una distinción correcta al decir que existe una insurrección "masiva e irrefrenable" y otra insurrección que, "en tanto acción política consciente, es un arte". La primera es la que hacen las masas en lucha, que llegan hasta disputar el control de las calles con el régimen burgués; la que, como ya vimos, Lenin define como el paso de la huelga general a las manifestaciones. La segunda es la acción concreta de los destacamentos armados de esas masas en lucha para apoderarse del poder político.

La diferencia que tenemos con Gramar es que, para nosotros, la insurrección "masiva e irrefrenable" estaba en marcha en Bolivia en marzo: huelga general, ocupación armada de La Paz por los mineros, apoyo de los campesinos y del pueblo pobre,

crisis completa de la burguesía, parálisis y vacilación del ejército.

Faltaba hacer la insurrección como "acción política consciente". Concretamente, que los mineros se dirigieran a los cuarteles para hacer que gran parte de la base del ejército pasara al bando revolucionario, que, por esa vía, mejoraran su armamento, sumando fusiles a la dinamita, que se dirigieran a los trabajadores fabriles y funcionarios públicos y a los estudiantes para armar, junto con ellos, pequeños destacamentos de combate y que, finalmente, ocuparan la sede del gobierno y los centros neurálgicos de transporte y comunicación.

"Los soviets", dice Lenin, son necesarios "para aglutinar a las masas y forjar una unidad combativa, pero son insuficientes para organizar directamente las fuerzas de combate"²². Es necesario contar, al mismo tiempo, con una organización militar, "una organización directa de las fuerzas", "una organización de combate... en forma de destacamentos obreros armados".

Volviendo a Bolivia, debemos decir claramente que los diez mil mineros armados que ocupaban La Paz ya eran un organismo militar para la insurrección o, al menos, un embrión de ese organismo militar. Era a ellos a los que debía proponerse que se pusieran en marcha hasta la toma del poder por la fuerza, hasta la insurrección. Ese organismo debería reforzarse, extenderse a todo el proletariado y a los cuarteles, elaborar un plan concreto para la insurrección y ejecutarlo.

Todo esto, por supuesto, sin esperar ni un minuto a que Lechín cambiara de posición y se declarara a favor de la insurrección. La insurrección se haría aunque la

COB no la convocara oficialmente. ¿Y después? Después, posiblemente, casi seguramente, los insurrectos entregarían el poder a la COB. Parafraseando a Lenin: a pesar de que Lechín y compañía, que dirigen la COB, estaban en contra de la insurrección, si los trabajadores armados tomaban el poder, no lo harían "contra la COB, sino para ella".

EL PROBLEMA DEL ARMAMENTO

No fue en vano que Lechín se colocó, durante décadas, al frente de los grandes movimientos revolucionarios del proletariado boliviano para entregarlos mejor al enemigo de clase. El viejo burócrata vio que una insurrección se estaba gestando, dijo que era necesaria... y que no podía ser hecha porque no había armas. Gramar tiene la misma opinión que Lechín: para él, la dinamita es solo "un instrumento de trabajo" y "no fue la dinamita lo que decidió la situación en 1952, sino una insurrección imparable". Dubois dijo lo mismo: "el pueblo boliviano no está armado".

Concordamos con Lechín: no hay insurrección que triunfe si el problema del armamento no es resuelto. Pero discrepamos del concepto un tanto burocrático de Gramar sobre la dinamita. Si la dinamita es usada para extraer el mineral, es un "instrumento de trabajo"; si es usada para matar fascistas y militares de la burguesía, es un arma.

Los mineros con dinamita que ocuparon La Paz ya habían comenzado a armarse. Este hecho político y militar es fundamental.

Incluso sin dinamita y sin nada, bastaría con que hubieran comenzado a organizarse para la

lucha física en las calles, y la insurrección ya estaría en marcha. Porque, al contrario de lo que dijo Lechín, el armamento es producto de la organización militar de la insurrección y no un requisito previo.

Lenin recomendaba organizar militarmente la insurrección creando "grupos voluntarios de diez, cinco y hasta tres miembros... de partido y sin partido, todos vinculados por una tarea revolucionaria común: la insurrección contra el gobierno... antes de obtener las armas, independientemente del problema del armamento"²³.

MILICIA Y EJÉRCITO

En relación con el otro aspecto del armamento, la cuestión del ejército, Lenin y Trotsky la subordinaban a la organización militar de la insurrección. Lenin decía que "todo movimiento verdaderamente popular produce inevitablemente... la vacilación de las tropas", pero que su "cambio de lado" no es "un acto simple, sino el fruto de una verdadera lucha para ganar al ejército"²⁴. Esa lucha es imposible, según Trotsky, sin "la milicia obrera" que, "con el apoyo de toda la clase... deberá derrotar, desarmar y aterrorizar a las bandas de bandidos de la reacción y abrir el camino a los obreros hasta la fraternización revolucionaria con el ejército"²⁵.

En síntesis, la base del ejército no es ganada para la revolución solo ni fundamentalmente con la propaganda, sino con el armamento de la milicia obrera.

En Bolivia, la política revolucionaria estaba planteada de esa misma forma, concreta y material. Era necesario desarrollar la organización armada

embrionaria constituida por los mineros con sus dinamitas, extenderla a los trabajadores fabriles y a los estudiantes revolucionarios, ocupar las calles y marchar hasta los cuarteles para ganar a los soldados.

Tanto el SU como la TC hablaron propagandísticamente y ligeramente sobre el armamento y sobre que los soldados debían pasar al campo de la revolución. Pero al no encarar ni siquiera proponer medidas concretas, prácticas para organizar militarmente la insurrección, no hicieron nada para armar al proletariado y ganar a la base del ejército.

CÓMO SE FORJA UN PARTIDO REVOLUCIONARIO

Existe una polémica, a veces explícita y casi siempre tácita, entre dos concepciones sobre la forma de forjar un partido revolucionario. Una de ellas, que podríamos denominar "posibilista", afirma que el partido se construye haciendo lo posible, es decir, lo que su desarrollo y su influencia en el movimiento de masas permiten. Dada la situación mundial en que, por razones históricas, los partidos trotskistas son marginales y no poseen influencia de masas en ningún país del mundo, lo "posible" es hacer sindicalismo, hacer comentarios y críticas a los partidos oportunistas de masas, etc. Pero el curso de los acontecimientos está fatalmente determinado por los "factores objetivos" —entre los cuales se incluye el dominio de las masas por los aparatos burocráticos— y el partido trotskista, pequeño, marginal, no puede hacer nada para modificarlo.

De esta concepción nacen graves deformaciones, tanto

políticas como prácticas. En el ámbito político, lleva a que, aunque en algunas ocasiones sea posible hacer descripciones certeras sobre una situación, tales descripciones no se organicen en consignas claras, concretas, contundentes y precisas para actuar sobre esa realidad y modificarla a favor de la revolución. En lo práctico, los dirigentes y militantes de ese partido, educados en la lección de que nada pueden hacer para cambiar la historia, carecen de la audacia necesaria para actuar en esas raras ocasiones en que efectivamente pueden hacerlo, es decir, en las crisis revolucionarias.

La otra concepción es opuesta: los revolucionarios intervienen en la lucha de clases como pueden, para incidir sobre ella y llevar al proletariado a la victoria. No importa si ya tenemos la influencia sobre las masas que nos permita cambiar la historia o si aún no la tenemos. En todas las circunstancias, proponemos a la clase obrera y a su vanguardia líneas de acción revolucionarias, prácticas y concretas.

Sabemos que, cuando la lucha de clases no es aguda, no podemos imponer nuestras políticas, son "imposibles". Sabemos que, incluso en las crisis revolucionarias, para que nuestras políticas se impongan, es necesario un mínimo de fuerza y organización; de lo contrario, son "imposibles". Pero, aún así, seguimos el ejemplo de Marx, que, desde el exterior, proponía políticas y medidas claras y concretas a los revolucionarios de la Comuna de París y sin tener un solo militante organizado en París.

Esta concepción de cómo se construye un partido revolucionario forja partidos, dirigentes y militantes para la acción revolucionaria,

convencidos de que pueden cambiar la historia, sin limitarse a contemplar y comentar, como otros lo hacen... o no.

El "posibilismo" es un cáncer que impide la intervención revolucionaria en cualquier lucha de clases, incluso en la huelga más defensiva del país más estable. Pero este cáncer es mortal en las situaciones revolucionarias agudas, ya que en ellas el "factor subjetivo" adquiere un peso decisivo. Cuando las masas se lanzan al asalto contra el viejo sistema y este oscila en su crisis agonizante, la acción de una pequeña organización revolucionaria puede adquirir un peso objetivo: definir la situación como un triunfo revolucionario.

POSIBILISMO Y BOLCHEVISMO EN BOLIVIA

La revolución boliviana permite desnudar lo nefasto de la concepción "posibilista". En última instancia, tanto el SU como la TC actuaron convencidos de que la victoria de la revolución era imposible o, al menos, que no dependía de ellos. Era imposible que la única organización obrera y de masas existente y reconocida tomara el poder... porque Lechín la dirigía, porque era un sindicato y no un soviet, porque la "izquierda" no se unía en un frente, porque las masas no estaban armadas... por lo que fuera, pero era imposible. ¿Qué había que hacer? Esperar... a que el partido trotskista creciera y ganara a las masas, a que la izquierda se uniera, a que surgieran soviets o algo parecido, a que las masas rompieran con Lechín.

La clase obrera y las masas habían llegado lo más lejos que podían llegar por sus propios medios: habían realizado el 90% de

la preparación de la insurrección. Pero nuestros "posibilistas" decían a coro que la insurrección no estaba planteada... había que esperar.

Ellos no se consideraban capaces de aprovechar esas circunstancias excepcionales de la revolución para actuar y cambiar la historia de Bolivia.

Sin embargo, en Bolivia, habrían bastado 200 o 300 militantes revolucionarios decididos y audaces, que, en un trabajo de años, hubieran conquistado de 50 a 100 activistas mineros para la política revolucionaria correcta, para que la insurrección se desarrollara y triunfara. Que esos 50 mineros dijeran a los 10.000 que ocupaban La Paz: "¡Hay que voltear al gobierno! ¡Los que quieran hacerlo júntense en grupos de combate y empiecen a conseguir armas! ¡Vayamos a los cuarteles para ganar a los soldados! ¡Vayamos a las fábricas, a las universidades y a los barrios para organizar más grupos de combate! ¡Mandemos una delegación a Oruro para decirles a los trabajadores que no salgan de la sede del gobierno porque, en La Paz, nosotros vamos a hacer lo mismo con el Palacio Quemado!" Solo con eso era posible —no seguro, pero sí muy posible— que la revolución boliviana triunfara. Un partido educado en la acción revolucionaria podría haberlo hecho. ■

NOTAS

² INPRECOR, 15/4/85, p. 3-7.

³ Masas, 21/3/85.

⁴ Prensa Obrera, 20/3/85.

⁵ Lenin, Obras Completas, T.

XIX, p. 220.

⁶ Trotsky, ¿Adónde va Francia?, Pluma, Buenos Aires, 1974, p. 79-80 y 86.

⁷ Lenin, Obras Completas, T. IX, p. 341.

⁸ Ver Manifiesto del POR-U publicado en INPRECOR n° 194 y Masas, 20/3/85.

⁹ Intercontinental Press, 15/4/85.

¹⁰ Masas, 17/3/85.

¹¹ Prensa Obrera, 18/4/85.

¹² Trotsky, The Crisis of the French Section, Pathfinder, New York, 1977, p. 111.

¹³ Lenin, Obras Completas, T. XI, p. 118.

¹⁴ Lenin, Obras Completas, T. X, p. 237.

¹⁵ Trotsky, La lucha contra el fascismo en Alemania, Pluma, Buenos Aires, 1973, T. I, p. 41.

¹⁶ Lenin, Obras Completas, T. XV, p. 343.

¹⁷ Lenin, Obras Completas, T. XXV, p. 297-298.

¹⁸ Trotsky, La lucha contra el fascismo en Alemania, T. I, p. 139.

¹⁹ Trotsky, Stalin: el gran organizador de derrotas, Distribuidora Baires, Buenos Aires, 1974, p. 198.

²⁰ Lenin, Obras Completas, T. XXXI, p. 326.

²¹ Lenin, Obras Completas, T. VIII, p. 67.

²² Lenin, Obras Completas, T. XI, p. 118-120.

²³ Trotsky, Stalin, Yunque, Buenos Aires, 1975, T. II, p. 63.

²⁴ Lenin, Obras Completas, T. XI, p. 167.

²⁵ Trotsky, ¿Adónde va Francia?, p. 34.

CRONOLOGÍA DE LA REVOLUCIÓN Y LA CONTRARREVOLUCIÓN EN BOLIVIA

EDU ALMEDIA, PSTU, LIT-CI



1952 — Los mineros, armados con dinamita, derrotan al ejército boliviano y derrocan al gobierno militar y proimperialista de Hugo Ballivián.

Sin un partido revolucionario, la clase obrera no toma el poder y el gobierno lo asume el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario), un movimiento pequeñoburgués que, con Paz Estenssoro, Hernán Siles y Juan Lechín Oquendo, logra restaurar el Ejército y el resto de instituciones burguesas. Durante tres gobiernos consecutivos, el MNR abrió las puertas a la recolonización imperialista de Bolivia, dio rienda suelta a la burocratización de la COB y de los sindicatos, recortó las libertades democráticas y masacró las movilizaciones obreras y populares.

1964 — Las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado preventivo para impedir otra revuelta popular. En crisis, el MNR no logra controlar la situación. Se impone entonces una Junta Militar encabezada por el general René Barrientos y Alfredo Ovando. Barrientos, vicepresidente del último gobierno de Paz Estenssoro, fue entrenado por el gobierno

estadounidense en Panamá, lo que dio inicio a uno de los peores períodos de la historia de las masas bolivianas.

1965 — La COB decretó una huelga general en rechazo al destierro de Lechín y a las restricciones a las libertades sindicales, lo que provocó la intervención del ejército en las minas con detenciones y destierros de dirigentes. Miles de trabajadores son despedidos y los salarios se congelan a pesar del aumento del coste de la vida. Barrientos firma un pacto entre el ejército y los campesinos, lo que le gana un fuerte apoyo de estos.

1967 — Barrientos propicia la masacre de los mineros que se resistían a su gobierno y reprime las movilizaciones universitarias. Bajo órdenes de la embajada estadounidense y a manos de Barrientos, es ejecutado el Che Guevara.

1969 — Barrientos muere en un accidente y, constitucionalmente, asume el vicepresidente Adolfo Siles Salinas, quien es derrocado inmediatamente mediante un golpe de Estado encabezado por el general Alfredo Ovando, quien intenta establecer un gobierno populista con una política de desarrollo nacional y relativa independencia respecto al imperialismo. Durante su gobierno se nacionaliza el petróleo. La brutal colonización del imperialismo estadounidense, por un lado, y el ascenso obrero y popular, por otro, obligan a Ovando a pasar de un gobierno bonapartista reaccionario, con características fascizantes (fue cómplice de los crímenes cometidos por Barrientos, incluida la masacre de los mineros y la muerte del Che Guevara), a un gobierno bonapartista sui generis, en el sentido que le da Trotsky: *«En los países industrialmente atrasados, el capital extranjero desempeña un papel decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía*

nacional frente al proletariado nacional. Esto da lugar a condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la débil burguesía nacional y el proletariado relativamente poderoso. Esto confiere al gobierno un carácter bonapartista sui generis, un carácter diferenciado. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases. De hecho, puede gobernar, ora como instrumento del capital extranjero y controlando al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, ora maniobrando con el proletariado e incluso llegando a hacerle concesiones y obtener así la posibilidad de tener cierta independencia respecto a los capitales extranjeros». (Escritos sobre América Latina, 1938)

1970 — La embajada estadounidense intenta derrotar el auge revolucionario fomentando un golpe contra Ovando, dirigido por el general Miranda. Sin embargo, una poderosa huelga convocada por la COB frustra los planes y acaba con el golpe en 48 horas. Surge un gobierno kerenskiista, dirigido por el general Juan José Tórrez. Se abre una etapa revolucionaria.

El IV Congreso de la COB aprueba una tesis que dice, en resumen: «Nosotros, los mineros, declaramos que nuestra misión histórica hoy es derrotar al imperialismo y a sus lacayos nativos. Declaramos que nuestra misión es luchar por el socialismo. Declaramos que nosotros, los mineros, somos la vanguardia revolucionaria de la clase obrera boliviana. Asumimos el papel dirigente en la revolución como los auténticos representantes de los intereses nacionales. La alianza de los obreros y campesinos con los

pobres de las ciudades y todas las fuerzas antiimperialistas es la garantía de la victoria». Al concluir las Tesis, los mineros dicen: «Nosotros, los trabajadores mineros, hacemos un llamado a fortalecer la unidad de los trabajadores de América Latina para construir un mundo mejor. Hacemos un llamamiento a los trabajadores de nuestros países hermanos del continente para que se unan en torno a una política obrera independiente contra el imperialismo y la reacción oligárquica. Esta es la mejor garantía para lograr la gran patria latinoamericana con la que soñaron Martí y Bolívar. Hoy, como ayer, nuestro lema es: La emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores».

1971 — El 1 de mayo se constituye la «Asamblea Popular», organizada por la COB y presidida por Juan Lechín. Se instaló con 223 delegados, según los representantes de los sectores productivos del país y de la clase (132 mineros). La COB se erigió como un órgano real de poder y como un mecanismo para asumir el gobierno. Su funcionamiento tiene lugar en las instalaciones del Poder Legislativo. Tórrez ofrece a la COB el 50 % del gobierno, propuesta que es rechazada. Sin embargo, las principales direcciones desarrollan una estrategia de poder en favor de la clase obrera. La embajada estadounidense y los empresarios planean un golpe reaccionario, y Tórrez, leal a su clase y al ejército, se niega a entregar armas a la COB para repelerlo.

El 21 de agosto se consolida el golpe militar encabezado por el coronel Hugo Bánzer, cerrando la etapa revolucionaria. Masacre de mineros y universitarios, y se

restringen todas las libertades políticas y sindicales.

El país se hunde en una recolonización cada vez más profunda; la industria, la agricultura y otros sectores no se desarrollan a pesar de los precios excepcionales del estaño y los hidrocarburos, base de la economía nacional, debido a la intensificación del saqueo imperialista, reflejada en el colosal aumento de la deuda externa.

1976 — La resistencia obrera y popular a los planes de Bánzer surte efecto y surge una ola de huelgas que exigen el fin de la dictadura. En enero comienza una huelga en la fábrica de calzado MANACO en Cochabamba y, a pesar de la solidaridad de los estudiantes y de la clase obrera, no se impide el despido de 900 trabajadores.

A solo tres días de que terminara el año, cuatro mujeres mineras, acompañadas de sus 14 hijos, llegaron a La Paz. Eran las compañeras Domitila Chungara, Aurora de Lora, Angélica Flores y Luzmila de Pimentel, esposas de activistas mineros despedidos durante la huelga a principios de año. Inician una huelga de hambre que se generaliza en todo el país, exigiendo la amnistía general, la reincorporación de los mineros y demás trabajadores despedidos por motivos políticos y sindicales, la vigencia de los sindicatos y la retirada del ejército de los centros mineros.

1977 — La lucha culmina con una gran victoria: se derrota a la dictadura, que cede en todos los puntos exigidos por los trabajadores. La iniciativa pasa a manos de la clase obrera.

1978 — Bánzer se ve obligado a convocar elecciones, que son anuladas por un escandaloso

fraude. El candidato oficialista, Pereda Asbún, se niega a dimitir y da un golpe militar contra Bánzer. La crisis se agrava.

1979 — Momentáneamente, la burguesía encuentra una salida conformando un gobierno civil encabezado por Guevara Arce. Sin embargo, en noviembre, Natush Bush da un golpe sangriento que es derrotado por una gran huelga general de la COB de 15 días, y asume el poder la presidenta del Senado, Lidia Gueiler.

La COB celebra su V Congreso. El movimiento campesino se organiza al margen de la tutela del Estado y surge la poderosa Confederación Campesina, la CSUTCB, que se afilia por primera vez a la COB.

1980 — Se celebran nuevas elecciones. Sale victoriosa la Frente Popular (Unidad Democrática y Popular - UDP), encabezada por Siles Suazo (MNRI), Jaime Paz Zamora (MIR) y el Partido Comunista. También hubo un gran apoyo al partido socialista de Quiroga Santa Cruz. Sin embargo, los militares impiden su elección en el Congreso mediante un sangriento golpe de Estado. Nace el gobierno de García Mesa y Arce Gómez, con el fuerte apoyo de sectores burgueses narcotraficantes y de la dictadura argentina, aunque sin contar con el respaldo total de la embajada estadounidense. Asesina a Marcelo Quiroga Santa Cruz y a otros. Encarcela y exilia a Lechín, así como a dirigentes políticos y sindicales. Se destruye la histórica sede de la COB

1982 — La presión de la clase obrera hace sentir su peso. En lo que se denominó «septiembre rojo», una ola de huelgas y movilizaciones acabó con la dictadura militar, que había pasado

de Mesa a Torrelío y, finalmente, a Vildoso. El distrito minero de Huanuni inicia una huelga general de tiempo indefinido, que se expande rápidamente por todo el país. A los mineros les siguieron los obreros de Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí. Se abre de nuevo una etapa revolucionaria y, en octubre, un vacío de poder. El poder estaba al alcance de los trabajadores, pero la burguesía, contando con la colaboración de los principales dirigentes de la COB y de la UDP, convocó el Congreso que eligió a Siles Suazo como presidente y a Jaime Paz Zamora como vicepresidente.

1983 — Surge un gobierno kerenskiista, incapaz de resolver los problemas del país debido a su compromiso con el imperialismo. Las huelgas y los bloqueos de carreteras paralizan al gobierno. La COB se convierte en un órgano de poder dual que centraliza todas las luchas.

1984 — Se celebra el VI Congreso de la COB; a pesar de ratificar formalmente las tesis socialistas de 1971, la declaración por mayoría se pronuncia «a favor de defender y preservar la coyuntura democrática», negándose así a asumir la lucha por el poder de la clase obrera y campesina.

1985 — Una huelga general de 16 días organizada por la COB pone contra las cuerdas al gobierno de Siles Suazo. Diez mil mineros armados con dinamita ocupan la capital, La Paz, mientras que el ejército, dividido y vacilante, no se atreve a reprimir. De nuevo, el poder se pone al alcance de los trabajadores.

Pero la burguesía logra, mediante una trampa electoral, derrotar al movimiento. Ni Lechín, dirigente histórico de la COB, ni el

PC, ni el POR, ni ninguna otra fuerza política obrera representada en la COB quiso encabezar el derrocamiento de Siles e imponer un gobierno de los trabajadores, que se concentraba en el poder de la COB. Desorientadas, las masas acuden a las elecciones y votan mayoritariamente a los partidos burgueses. Con un fraude declarado, sube al poder el gobierno reaccionario de Víctor Paz Estenssoro, apoyado por la burguesía suen la conjunto (incluido el MIR) y por el imperialismo.

1986 — Paz Estenssoro lanza el peor ataque recolonizador contemporáneo contra Bolivia y las conquistas de la clase obrera, y logra cerrar la etapa revolucionaria. Aplica un plan económico salvaje (el Decreto Supremo 21060). Además del aumento de la deuda externa, la sumisión se acentúa mediante las privatizaciones de las empresas estatales.

Su éxito residió en el despido de 30 000 trabajadores mineros, 18 000 trabajadores de fábricas, 2 000 bancarios y decenas de miles de empleados del Estado.

1987 — En medio de la etapa reaccionaria, se celebra el VII Congreso de la COB. La otrora poderosa COB atraviesa la peor de sus crisis; sin embargo, en su debilidad, ajusta cuentas con Lechín, a quien expulsa. Asume la dirección Reyes, del Partido Comunista.

1989 — En las elecciones nacionales, los tres partidos representantes del neoliberalismo se disputan los primeros puestos: MNR, ADN y MIR. En el Congreso, con el apoyo de Bánzer, es elegido presidente Jaime Paz Zamora. La política recolonizadora sigue su curso. El

VIII Congreso de la COB expulsa a los comunistas y a la dirección histórica del sindicalismo campesino, encabezada por Genaro Flores.

1990 — La resistencia del movimiento obrero y popular se atomiza. Sin embargo, logra frenar la entrega de las salinas de Uyuni a las transnacionales. Sin embargo, el retroceso en la lucha de clases deja su huella en las direcciones de la COB, que giran cada vez más hacia la derecha.

1993 — Nuevas elecciones nacionales: Gonzalo Sánchez de Lozada (conocido como Goni), dirigente del MNR, gana en medio de un clima de denuncias de corrupción y fraude. Elegido presidente por el Congreso, lanza una nueva ofensiva contra los trabajadores, despide a dos mil ferroviarios, lleva a cabo la reforma de la seguridad social, la de la educación, la «participación popular» y, antes de dejar su mandato, la Ley de Hidrocarburos, que legitima el robo de las enormes riquezas gasísticas en favor de las transnacionales.

1994 — Goni, agente directo de la Embajada estadounidense, se lanza contra los cocaleros con su plan «nuevo amanecer». La resistencia campesina se desata a partir de la lucha de los campesinos productores de coca en la zona del Chapare. Esta resistencia está encabezada por el líder cocalero Evo Morales, quien es detenido por estas acciones. También surge una resistencia a la venta del gas y a las empresas de transporte, que son derrotados en estos movimientos.

1997 — El mandato de Goni termina con una sangrienta masacre contra los mineros de Amaya Pampa y Capasirca, cerca de Potosí. En las elecciones

nacionales, con un discurso contra el gobierno anterior, gana Hugo Bánzer. Este es elegido en el Congreso con el apoyo de Jaime Paz Zamora y de partidos populistas. Sin embargo, la estrategia del nuevo gobierno es destruir el movimiento cocalero, que se enfrenta a los sangrientos planes imperialistas de erradicación de la coca. Cobre fuerza el partido campesino, el MAS, liderado por Evo Morales, que ya cuenta con cuatro parlamentarios.

2000 — En abril estalla en Cochabamba una insurrección victoriosa contra la presencia de la transnacional Bechtel, que pretendía privatizar el agua. Se cierra la etapa reaccionaria y comienza claramente la etapa revolucionaria. El Estado profundiza su crisis, la policía se amotina, se derrota el estado de sitio. Una vez más, el problema del poder se sitúa en el centro de la escena de la lucha de clases. Sin embargo, el XII Congreso de la COB no refleja este cambio, pues mantiene las direcciones progubernamentales. En septiembre estallan nuevas movilizaciones, principalmente en el sector rural del Chapare y en el altiplano, encabezadas por Felipe Quispe (Mallku).

2001 — Nuevas huelgas agravan la crisis del gobierno y lo sitúan al borde del abismo. Bánzer, gravemente enfermo, cede el poder a Tuto Quiroga, el vicepresidente. Este logra resolver la crisis con la colaboración abierta de las direcciones de la COB y de la CSUTCB, de Morales y Quispe, lo que hace viable la salida electoral.

2002 — Elecciones nacionales, victoria de Gonzalo Sánchez de Lozada. El ascenso de las masas se refleja de manera

distorsionada en la gran votación del MAS, que solo no ganó las elecciones por un fraude escandaloso. El Congreso elige a Goni presidente, en contra de Evo.

2003 — Año de las revoluciones más importantes: en febrero, a partir de un motín policial, las masas derrotan un «impuesto» del gobierno. Con un saldo de más de treinta personas asesinadas por el régimen. Goni es un cadáver político. Las masas toman la iniciativa política y se lanzan a la huelga y a los bloqueos. Entra en escena la clase obrera urbana.

El XIII Congreso de la COB, en agosto, clausura sus trabajos con una victoria tras derrotar a las direcciones oficialistas. Y es elegido Jaime Solares, quien impulsa movilizaciones contra la venta del gas, contra el ALCA.

En septiembre, la lucha se recrudece, se producen masacres en Warisata, lo que precipita un pleno ampliado de la COB que declara la huelga general con la consigna «Fuera Goni».

En octubre tiene lugar la gran insurrección que derriba al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El problema del poder se plantea de forma evidente; de nuevo, la COB recupera su peso como órgano de poder de las masas. El balance es de 80 muertos y más de 400 heridos. El epicentro de la lucha es la ciudad de El Alto.

La burguesía y el imperialismo, con el apoyo de las direcciones mayoritarias del movimiento de masas, desvían el curso de la revolución obrera y socialista en marcha hacia una salida constitucional, asumiendo el cargo de vicepresidente Carlos Mesa.

En 2005, una nueva oleada de protestas contra Carlos Mesa (quien se negaba a nacionalizar los

hidrocarburos) también forzó su renuncia.

2005 — La energía revolucionaria que amenazaba con disolver el Estado burgués fue canalizada por la vía electoral. El Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el dirigente cocalero Evo Morales, se presentó como la única alternativa institucional viable para pacificar el país. En las elecciones de diciembre de 2005, Morales capitalizó el descontento y ganó con un histórico 53,7 % de los votos. Este triunfo electoral operó como una desviación del proceso insurreccional: la lucha por el poder en las calles se transformó en la gestión del aparato estatal burgués existente.

Como resultado de ese ascenso, canalizado hacia la democracia burguesa, Evo tuvo el gobierno más duradero de todos los gobiernos de conciliación de clases de América Latina, durante tres mandatos consecutivos (2005-2019).

Bajo la presión de ese ascenso, se renacionalizaron las minas y se constituyó una Asamblea Constituyente que, entre otros logros, decretó un Estado plurinacional en el país, antigua aspiración de los pueblos indígenas.

Sin embargo, al igual que los demás gobiernos de conciliación de clases, Evo gobernó para la burguesía y las multinacionales, y realizó algunas concesiones a las masas.

Aprovechó el auge de las materias primas para hacer algunas concesiones al movimiento de masas, como el Bono Juancito Pinto (para reducir el abandono escolar), el Bono Juana Azurduy (para mujeres embarazadas) y la Renta Dignidad (una pensión para la vejez), que

redujeron la pobreza y dinamizaron el mercado interno.

Al mismo tiempo, Evo garantizaba grandes beneficios a las multinacionales. No solo gobernó junto a las multinacionales estadounidenses. También fue un agente de la entrada del imperialismo chino en Bolivia, cediendo el litio boliviano a una multinacional china.

Con el fin del boom de las materias primas, Bolivia entró en declive económico y el desgaste del gobierno de Evo se acentuó. Intentó perpetuarse en el poder, llegando incluso a no aceptar el resultado de un referéndum (2016) que le impedía la reelección.

2019 — En las elecciones de 2019, hubo numerosas denuncias de fraude. Aprovechando la crisis política, un golpe de Estado de la derecha derrocó a Evo Morales y dio paso al gobierno interino de Jeanine Áñez, quien luego intentó perpetuarse en el poder.

2020 — Una movilización masiva derrotó el golpe en agosto de 2020; mediante un bloqueo de carreteras que paralizó el país, se obligó al gobierno a fijar una fecha para las elecciones.

En octubre de 2020, el Movimiento al Socialismo (MAS) volvió al poder a través de las urnas. Luis Arce Catacora, exministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales, ganó las elecciones con el 55,1 % de los votos, lo que puso de manifiesto el rechazo de la población al golpe de Estado de la derecha.

Pero el declive económico se acentuó, y el gobierno de Arce se desgastó rápidamente con nuevos planes neoliberales. Se produjo una división en el MAS, con un fuerte enfrentamiento entre Evo y Arce, en una pugna por definir quién sería el candidato en las

próximas elecciones. Esto finalmente condujo a la división del MAS.

2025 — En las elecciones de 2025, Arce obtuvo el 2,48 % de los votos y Evo no pudo presentarse, lo que provocó la abstención. El vencedor fue Rodrigo Paz, con un discurso de «conciliación» entre las candidaturas de Arce y la ultraderecha, encabezada por Jorge Quiroga, expresidente.

Paz tomó posesión en noviembre de 2025. En diciembre, implementó un megadecreto neoliberal (5503), que eliminaba los subsidios a los combustibles (con un aumento del 86 % en el precio de la gasolina y del 160 % en el del diésel), congelaba los salarios públicos, recortaba el gasto del Estado y desregulaba la economía para abrir los recursos estratégicos al capital multinacional (incluido el disputado litio).

2026 — Una gigantesca movilización de más de 500 000 personas, convocada por la COB, obligó al Gobierno a dar marcha atrás, infligiéndole su primera derrota.

En marzo, Paz participó en Miami en la reunión con Trump y los gobiernos de extrema derecha de América Latina (entre ellos Milei, Bukele, Noboa, Kast y otros) que creó el «Escudo de las Américas», una alianza militar que permite la intervención de Estados Unidos para «combatir el narcoterrorismo» en América Latina.

El Gobierno siguió atacando a los trabajadores y generando movilizaciones sectoriales cada vez mayores. El 1 de mayo, la COB convocó un cabildo (asamblea popular) que decretó una huelga general indefinida y el bloqueo de carreteras por parte de los campesinos.

BOLIVIA: LA DIRECCIÓN DE LA COB NEGOCIA, TRAICIONA AL MOVIMIENTO Y EL GOBIERNO DECRETA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

LENA SOUZA

20 DE JUNHO, 2026

Después de 49 días de una de las mayores movilizaciones de los últimos años, la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) participa de una mesa de diálogo con el gobierno de Rodrigo Paz (18/06) y abandona la exigencia de su renuncia, aprobada en anteriores ampliados nacionales. Lo hizo presentándose como representante del conjunto de los sectores movilizados y ha puesto como condición para continuar la negociación que hubiera la liberación de los detenidos. Entretanto, apenas 1 día después (19/06) firma un acuerdo con el gobierno, donde siquiera la liberación de los detenidos fue garantizado.

Esta decisión no cuenta con el mandato ni la aprobación de las bases que sostenían la lucha. De hecho, las propias bases obreras y mineras de la COB ya habían disminuido significativamente su participación en las movilizaciones, mientras que eran las organizaciones campesinas e indígenas las que continuaban garantizando la mayor parte de los bloqueos de caminos y manteniendo la presión sobre el Gobierno. Ni la Federación Tupac Katari ni la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) participaron de la mesa de negociación, ambas organizaciones denunciaron la falta de consulta y mantuvieron sus medidas de presión. La decisión de negociar fue adoptada desde la dirección de la COB, desconociendo el sacrificio de miles de movilizados y arrogándose una representación que ya no ejercía en la práctica. Este giro político desarmó la lucha precisamente en el momento en que el gobierno

atravesaba su mayor crisis, favoreció la división del movimiento y abrió las puertas para una nueva ofensiva represiva contra el movimiento popular.

ACUERDOS PRELIMINARES CON LOS MINEROS

La dirección de la COB y los dirigentes de la minería estatal llegaron a acuerdos con el gobierno antes de que las organizaciones campesinas e indígenas pudieran discutir colectivamente el rumbo de la movilización. Los trabajadores mineros de Colquiri y Huanuni, que constituyen el sector obrero más importante y con peso en las instancias de decisión de la COB, alcanzaron acuerdos con el Ejecutivo los días 17 y 18 de junio, antes de que la central obrera firmara el acuerdo general y convocara oficialmente al levantamiento de los bloqueos. O sea, queda claro que la dirección de la COB ha construido una condición para que no hubiera cuestionamientos de su principal base.

Durante semanas trabajadores, sectores populares, campesinos e indígenas sostuvieron bloqueos de caminos y movilizaciones, enfrentando la represión, la escasez y enormes sacrificios económicos. La fuerza demostrada por las bases había colocado al gobierno contra las cuerdas. Sin embargo, mientras los sectores campesinos e indígenas continuaban garantizando la mayor parte de los bloqueos y exigían discutir colectivamente los pasos a seguir, la dirección cobista no ha llamado la ampliación del movimiento, no hizo ningún intento de mantener los sectores fabriles, mineros, profesores unificados al movimiento popular, indígena y

campesino y optó por canalizar la fuerza de los bloqueos hacia la negociación y la desmovilización, privilegiando los acuerdos alcanzados por su principal base obrera y actuando sin el mandato del conjunto de los sectores movilizados.

EL ACUERDO DE LA COB CON EL GOBIERNO NO GARANTIZA LA LIBERTAD DE LOS PRESOS, NINGUNA DEMANDA INMEDIATA Y CONCEDE UN PLAZO DE 90 DÍAS AL GOBIERNO

El contenido del acuerdo revela el verdadero carácter de la negociación. La profundidad de la capitulación de la dirección de la COB quedó en evidencia en el tratamiento de los detenidos. Apenas dos días antes de la firma, la propia central sindical había afirmado que la liberación de los presos era una condición primordial para avanzar en el diálogo y que, sin ese «primer paso» del Gobierno, cualquier acuerdo sería visto como una traición por las bases. Sin embargo, el documento final no garantiza la liberación de ninguno de los detenidos, no fija plazos, tampoco prevé el retiro de las acusaciones ni el cierre de los procesos judiciales. El acuerdo se limita a crear una comisión integrada por el Gobierno, la COB y el Ministerio Público para «gestionar la liberación» y revisar los casos individualmente.

Ninguna de las principales demandas de la movilización tiene una respuesta inmediata. El gobierno obtuvo un plazo de 90 días para estudiar las reivindicaciones y elaborar propuestas, sin comprometerse a resolver la crisis económica ni a atender las demandas de salarios,

abastecimiento, empleo y condiciones de vida.

En los hechos, la dirección de la COB otorgó al gobierno el tiempo que necesitaba para reorganizarse políticamente y recuperar la iniciativa.

LAS BASES CAMPESINAS E INDÍGENAS NO ACEPTAN EL ACUERDO

El acuerdo fue recibido con rechazo por numerosos sectores campesinos e indígenas que denunciaron no haber sido consultados y cuestionaron la decisión de la dirección de la COB como traidora del movimiento. Las organizaciones de base sostienen que el levantamiento de las medidas de presión desconoce el sacrificio de miles de movilizados y rompe el acuerdo de unidad construida durante casi siete semanas de lucha.

Las organizaciones campesinas e indígenas fueron uno de los principales motores de la movilización nacional. Su participación en los bloqueos, las marchas y los enfrentamientos con las fuerzas represivas fue decisiva para sostener el movimiento. Por ello, la exclusión de estos sectores de las decisiones estratégicas expresa una profunda crisis de representación dentro de la propia dirección cobista.

La resistencia de las bases demuestra que la lucha no ha sido derrotada. Lo que está en cuestión es la orientación de una dirección que decidió negociar desde arriba y sin mandato de quienes mantuvieron la movilización en las calles y carreteras.

EL GOBIERNO SE APROVECHA DE LA DIVISIÓN PROVOCADA POR LA COB Y DECRETA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

La decisión de la COB de desmovilizar y dividir al movimiento fue inmediatamente aprovechada por el gobierno. Apenas recuperó margen de maniobra política, el Ejecutivo decretó el estado de excepción, ampliando las facultades represivas del Estado y habilitando mayores restricciones a las libertades democráticas.

El gobierno pretende utilizar el estado de excepción para restablecer la autoridad estatal, contener nuevas protestas y disciplinar a los sectores que continúan movilizados. La ofensiva gubernamental confirma que la negociación de la COB no condujo a una salida favorable para los trabajadores y los pueblos del campo. Por el contrario, la desmovilización debilitó la capacidad de resistencia y facilitó la iniciativa represiva del Ejecutivo.

Em este momento, antes mismo de ser llevado a la Asamblea para aprobación del estado de excepción, las noticias dan cuenta del desplazamiento de la fuerzas militares, para varias regiones del país, en los puntos de bloqueo, además de persecución e intento de capturar dirigentes del movimiento.

LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL SE TORNA MÁS NECESARIA

La declaración del estado de excepción por parte del gobierno de Rodrigo Paz marca un nuevo salto en la ofensiva represiva contra el movimiento popular. Con esta medida, el Ejecutivo busca otorgarse mayores facultades para desarticular las movilizaciones, criminalizar la protesta y garantizar la intervención de las fuerzas represivas contra campesinos e

indígenas que continúan luchando y garantizando los bloqueos. Al mismo tiempo, la traición de la dirección de la COB al abandonar la exigencia de renuncia del gobierno, sentarse a negociar y llamar a levantar las medidas de presión debilita la resistencia y deja a los sectores movilizados más expuestos a los ataques estatales. En estas condiciones, la solidaridad internacional se vuelve imprescindible. Las organizaciones obreras, populares, campesinas, indígenas, estudiantiles y de derechos humanos de toda América Latina y del mundo deben pronunciarse contra el estado de excepción, denunciar cualquier intento de represión y apoyar activamente la lucha del pueblo boliviano. Frente al aislamiento que buscan imponer el gobierno y las direcciones conciliadoras, es necesario fortalecer una amplia campaña internacional de solidaridad con quienes continúan enfrentando las políticas de ajuste y hambre.

ES NECESARIO CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA DE DIRECCIÓN

Las jornadas de lucha de estos 49 días demostraron una enorme disposición de combate de trabajadores, campesinos e indígenas. También pusieron en evidencia los límites de una dirección que, cuando el gobierno se encontraba más debilitado, optó por salvarlo mediante negociaciones y concesiones.

La experiencia deja una lección fundamental: ninguna salida favorable para las mayorías explotadas y oprimidas puede depender de direcciones que subordinan la lucha a acuerdos con los gobiernos de turno. Sin embargo, la propia Central Obrera

Boliviana, por su composición histórica y social, sigue siendo potencialmente un espacio donde se expresa la fuerza organizada de la clase trabajadora, campesina y popular del país, y por tanto puede constituir una base para una alternativa de poder de las mayorías oprimidas. Pero ese potencial solo puede realizarse bajo condiciones de democracia obrera y control real de las bases sobre sus direcciones. Mientras la conducción de la COB actúe desligada de las decisiones colectivas y sin control efectivo de quienes sostienen las movilizaciones, su papel continuará siendo el de mediación y contención de la lucha, incluso en momentos decisivos.

Por eso, no se trata únicamente de cambiar nombres en la dirección, sino de construir una nueva dirección verdaderamente democrática, revolucionaria, socialista e independiente del gobierno y de los sectores empresariales, que responda exclusivamente a las decisiones soberanas de las bases movilizadas.

La tarea inmediata es reorganizar la resistencia, fortalecer la coordinación entre trabajadores, campesinos e indígenas y preparar nuevas instancias de deliberación desde abajo. La fuerza demostrada por la movilización nacional sigue existiendo. Lo que hace falta es una dirección consecuente que esté dispuesta a llevar la lucha hasta el final y a abrir una salida propia de los trabajadores y los pueblos de Bolivia.





CORREIO

INTERNACIONAL





CORREIO

INTERNACIONAL

Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
Acceda a las publicaciones de la LIT-CI en:
www.litci.org